



CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

Segundo Período Extraordinario de Sesiones Tercer Año de Ejercicio Constitucional Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza

6 de Agosto de 2011

Diputado Presidente Jesús Mario Flores Garza:

Muy buenos días.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, con intervención del Presidente, Vicepresidente y Secretarios de la Diputación Permanente, se celebra esta Reunión Preparatoria para elegir la Mesa Directiva que estará en funciones durante el Segundo Período Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado.

Para dar inicio a los trabajos de esta Reunión Preparatoria, a continuación procederemos a pasar lista de asistencia de las Diputadas y Diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura, por lo que se les solicita que registren su asistencia mediante el sistema electrónico, pidiéndose asimismo al Diputado Secretario Rogelio Ramos Sánchez, que se sirva informar sobre el número de integrantes del Pleno que están presentes y si existe quórum para el desarrollo de la reunión, no sin antes informar que el Diputado Carlos Ulises Orta Canales no asistirá a la presente sesión por causa justificada.

Abrimos el sistema para considerar la asistencia.

Diputado Secretario Rogelio Ramos Sánchez:

Diputado Presidente, se informa que están presentes 29 integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura, por lo que existe el quórum para el desarrollo de esta reunión.

Diputado Presidente Jesús Mario Flores Garza:

Habiendo quórum, se declara abierta esta reunión y válidos los acuerdos que se aprueben en la misma.

Declarado lo anterior, a continuación procederemos a la elección de la Mesa Directiva que estará en funciones durante el Período Extraordinario de Sesiones que iniciaremos en esta fecha, informándose que para este efecto, la Junta de Gobierno determinó hacer una propuesta en los siguientes términos:

Presidenta: Diputada Hilda Esthela Flores Escalera.
Vicepresidente: Diputado Jesús Mario Flores Garza.
Vicepresidente: Diputado José Miguel Batarse Silva.
Secretaria: Diputada Cecilia Yanet Babún Moreno.
Secretario: Diputado Loth Tipa Mota.
Secretario: Diputado Enrique Martínez y Morales.
Secretario: Diputada Raúl Onofre Contreras.

Al respecto, esta Presidencia también señala que la votación que se hará en este caso tendrá el carácter de secreta, en observancia a lo establecido en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Congreso, por lo que el sistema electrónico únicamente registrará la emisión del voto de las Diputadas y Diputados, así como el resultado general de la votación sin que se consigne el sentido en que vote cada uno.

Para proceder a lo indicado, se les solicita que utilizando el sistema electrónico emitan su voto en el sentido que determinen respecto a la propuesta que se dio a conocer, pidiéndose asimismo a la Diputada Secretaria Esther Quintana Salinas, que se sirva informar sobre el resultado de la votación.

Abrimos el sistema. Cerramos el sistema.

Diputada Secretaria Esther Quintana Salinas:

Diputado Presidente, se informa que el resultado de la votación es el siguiente: 30 votos a favor de la planilla propuesta; ninguno en contra, ni abstenciones.

Diputado Presidente Jesús Mario Flores Garza:

Conforme al resultado de la votación, la Mesa Directiva que estará en funciones durante el Período Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado, se integrará en la siguiente forma:

Presidenta: Diputada Hilda Esthela Flores Escalera.

Vicepresidente: Diputado Jesús Mario Flores Garza.

Vicepresidente: Diputado José Miguel Batarse Silva.

Secretaria: Diputada Cecilia Yanet Babún Moreno.

Secretario: Diputado Loth Tipa Mota.

Secretario: Diputado Enrique Martínez y Morales.

Secretario: Diputada Raúl Onofre Contreras.

Declarado lo anterior, se dan por concluidos los trabajos de esta reunión preparatoria y a continuación, se procederá al desarrollo de la Sesión del Período Extraordinario que se celebrará el día de hoy, por lo que se pide a las Diputadas y Diputados que fueron electos para integrar la Mesa Directiva, ocupen sus lugares en esta mesa.

Muchas gracias.

Diputada Presidenta Hilda Esthela Flores Escalera:

Vamos a dar inicio a la Sesión del Segundo Período Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado, señalándose que conforme a lo dispuesto en los artículos 53, 64 y 65 de la Ley Orgánica del Congreso, se ha designado a los Diputados Cecilia Yanet Babún Moreno y Loth Tipa Mota, para que funjan como Secretarios en esta sesión.

Señalado lo anterior, a continuación procederemos a confirmar la existencia del quórum legal para el desarrollo de esta sesión, por lo que nuevamente se les solicita que registren su asistencia mediante el sistema electrónico, pidiéndose asimismo a la Diputada Secretaria Cecilia Yanet Babún Moreno, que tome nota sobre el número de integrantes del Pleno que están presentes e informe si existe quórum para el desarrollo de la sesión, no sin antes reiterar que el Diputado Carlos Ulises Orta Canales no asistirá a la presente sesión por causa justificada.

Se abre el sistema para el registro de asistencia. ¿Alguien falta de registrar asistencia? Se cierra el registro

Diputada Secretaria Cecilia Yanet Babún Moreno:

Diputada Presidenta, están presentes 29 integrantes de la Legislatura, por lo que existe quórum legal para el desarrollo de esta sesión.

Diputada Presidenta Hilda Esthela Flores Escalera:

Gracias Diputada Secretaria.

Habiendo quórum y en atención a lo dispuesto por el artículo 51 de la Constitución Política Local y los artículos 59 y 163 de la Ley Orgánica del Congreso, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que se aprueben en la misma.

A continuación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley Orgánica del Congreso, le solicito al Diputado Secretario Loth Tipa Mota, se sirva dar lectura a la Convocatoria expedida por la Diputación Permanente, para la celebración de este Período Extraordinario de Sesiones.

Diputado Secretario Loth Tipa Mota Natharen:

Con su permiso, Diputada Presidenta.

LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 47 Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO Y EN LOS ARTÍCULOS 5, 55, 152, Y 165 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PROPIO CONGRESO DEL ESTADO, ACUERDA EXPEDIR LA SIGUIENTE:

CONVOCATORIA

PRIMERO.- Se convoca a las Diputadas y los Diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado, para que concurran a la celebración de un Período Extraordinario de Sesiones, que se iniciará a las 12:00 horas del día sábado 6 de agosto del año 2011.

SEGUNDO.- En este Período Extraordinario de Sesiones, se tratarán los siguientes asuntos:

1.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de un Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con relación a una Minuta con Proyecto de Decreto en el que se reforman los párrafos sexto y séptimo del Artículo 4 y se adiciona la fracción XXIX-P del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a garantizar constitucionalmente el derecho de las niñas y los niños.

2.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de un Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con relación a una Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo décimo al Artículo 4 y se reforma la fracción XXIX-J del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a garantizar el acceso a la cultura física y el deporte.

3.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de un Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con relación a una Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al Artículo 4, recorriéndose en el orden los subsecuentes y un segundo párrafo a la fracción XX del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a garantizar el acceso a la alimentación.

4.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de un Dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Finanzas, con relación a una Iniciativa de Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

TERCERO.- Para la elección de la Mesa Directiva que estará en funciones durante el Período Extraordinario de Sesiones a que se convoca, se celebrará inicialmente una reunión preparatoria que será dirigida por el Presidente, Vicepresidente y Secretarios de la Diputación Permanente, según lo dispuesto en el Artículo 55 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado.

CUARTO.- Comuníquese esta convocatoria al Ejecutivo del Estado, para su conocimiento y efectos procedentes, así como a los integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado, para su conocimiento y asistencia al período extraordinario a que se convoca.

SALON DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO A

SALTILLO, COAHUILA, A 4 DE AGOSTO DE 2011.

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE.

DIP. JESÚS MARIO FLORES GARZA.

DIP. SECRETARIO ROGELIO RAMOS SÁNCHEZ.

DIP. SECRETARIO MARIO ALBERTO DÁVILA DELGADO.

Diputado Presidente, cumplida la lectura de la Convocatoria para la celebración de este Período Extraordinario de Sesiones.

Diputada Presidenta Hilda Esthela Flores Escalera:

Gracias, Diputado Secretario.

Cumplido lo anterior, a continuación le solicito a la Diputada Secretaria Cecilia Yanet Babún Moreno, se sirva dar lectura al Orden del Día, propuesto para el desarrollo de esta sesión.

Diputada Secretaria Cecilia Yanet Babún Moreno:

Orden del Día conforme al cual se desarrollará el Segundo Período Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado.

6 de agosto de 2011.

1.- Confirmación del quórum legal.

2.- Lectura de la convocatoria expedida por la Diputación Permanente, para la celebración del Período Extraordinario de Sesiones.

3.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día propuesto para el desarrollo de esta sesión.

4.- Declaratoria de apertura del Segundo Período Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura.

5.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de dictámenes en cartera:

A.- Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con relación a una minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 4 y se adiciona la fracción XXIX-P del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a garantizar constitucionalmente el derecho de las niñas y los niños.

B.- Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con relación a una minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo décimo al artículo 4 y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a garantizar el acceso a la cultura física y el deporte.

C.- Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con relación a una minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 4, recorriéndose en el orden los subsecuentes y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a garantizar el acceso a la alimentación.

D.- Dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Finanzas, con relación a una iniciativa de Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

6.- Clausura del Segundo Período Extraordinario de Sesiones, del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura y mandamiento para que se expida el acuerdo en que se dé cuenta de su celebración.

7.- clausura de la sesión.

Diputada Presidenta, cumplida la lectura del Orden del Día propuesto para el desarrollo de esta sesión.

Diputada Presidenta Hilda Esthela Flores Escalera:

Muchas gracias, Diputada Secretaria.

A continuación, se somete a consideración el Orden del Día que se dio a conocer, señalándose a quienes deseen intervenir para hacer algún comentario que soliciten la palabra mediante el sistema electrónico a fin de registrar su participación.

No habiendo intervenciones, se somete a votación el Orden del Día que se puso a consideración en los términos propuestos, por lo que solicito a las Diputadas y Diputados que mediante el sistema electrónico emitan su voto en el sentido que determinen, pidiéndose asimismo la Diputada Secretaria Cecilia Yanet Babún Moreno, que tome nota e informe sobre el resultado de la votación.

Se abre el sistema y les pedimos registren su votación. ¿Falta alguien de votar? Muy bien, se cierra el sistema.

Diputada Secretaria Cecilia Yanet Babún Moreno:

Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 24 votos a favor; 4 votos en contra y 0 abstenciones.

Diputada Presidenta Hilda Esthela Flores Escalera:

Conforme al resultado de la votación, se aprueba por mayoría de votos el Orden del Día propuesto para el desarrollo de esta sesión en los términos en que fue presentado.

Cumplido lo anterior y atendiendo lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley Orgánica, a continuación se solicita a todos los presentes se sirvan poner de pie, a fin de que la de la voz, proceda a hacer la declaratoria de apertura del Período Extraordinario de Sesiones, que se inicia en esta fecha.

El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, abre hoy, 6 de agosto de 2011, el Segundo Período Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura.

Asimismo, en observancia en lo dispuesto en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Congreso, expídase el Acuerdo en que se dé cuenta de lo anterior y comuníquese mediante oficios a los poderes del estado.

Muchas gracias a todos. Favor de tomar asiento.

Cumplido lo anterior y pasando al siguiente punto del Orden del Día, a continuación le solicito al Diputado Secretario Loth Tipa Mota, que se sirva dar lectura al dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con relación a una Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos Sexto y Séptimo del artículo 4 y se adiciona la fracción XXIX-P del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a garantizar constitucionalmente el derecho de las niñas y los niños.

Diputado Secretario Loth Tipa Mota Natharen:

Con permiso, Diputada Presidenta.

DICTAMEN de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo al Oficio del C. Lic. Emilio Suárez Licona Secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual envía copia del expediente relativo a la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 4º., y se adiciona la fracción XXIX-P del artículo 73 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y,

R E S U L T A N D O

PRIMERO.- Que con fecha 20 de mayo del año en curso, en sesión celebrada por la Diputación Permanente del Congreso, se acordó el turno a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Oficio del C. Lic. Emilio Suárez Licona Secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual envía copia del expediente relativo a la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 4º., y se adiciona la fracción XXIX-P del artículo 73 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y,

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 93, 96, 97, 99 fracción I, 100 fracción I y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

SEGUNDO.- La Minuta Proyecto de Decreto minuta proyecto de decreto por el cual se reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 4º., y se adiciona la fracción XXIX-P del artículo 73 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

De acuerdo con lo establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño, se han venido estableciendo a nivel internacional una serie de instrumentos jurídicos para resguardar aquellos derechos que dicha convención establece como iguales e inalienables para todos los miembros de la familia humana.

Asimismo en esta convención se ha ponderado la promoción del progreso social y la elevación del nivel de vida dentro de un concepto amplio de libertad. Todo esto en el contexto del reconocimiento que se ha dado a las niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos.

En el artículo 3° de la Convención sobre los derechos del niño se estipula que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial es que se atenderá siempre en primer lugar el interés superior del niño.

Es importante revisar la historia jurídica mexicana, por la cual el tema del interés superior del niño se ha venido ajustando a la tradición paternalista/autoritaria y no ha podido esclarecerse ni en materia legislativa ni en materia judicial. De acuerdo con el esquema paternalista/autoritario, el legislador, el juez o la autoridad legislativa “constituía” o “realizaba” el interés superior del niño como un acto potestativo, que derivaba de su investidura o su potestad y no de los derechos de los afectados. En este contexto el interés superior del niño sólo funciona a manera de fundamento per se en el que se basan las autoridades para tomar una decisión o determinación “correcta”.

En este sentido el interés superior del niño no desempeña un papel primordial al que deban estar sujetas todas las discusiones, deliberaciones y disposiciones que surjan a partir de un hecho o acto jurídico determinado. El niño, en este sentido, se encuentra desprovisto de otras orientaciones jurídicas.

Aunado a esto, el interés superior del niño se encuentra reducido a una especie de “recomendación” que funciona sólo como un valor efímero sin consecuencias concretas y sin ninguna garantía de ser realizable.

A pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece garantías específicas para la 'protección de los derechos de la niñez mexicana, cuyo texto dice a la letra:

“Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez”

Como puede verse, nuestro texto Constitucional ha avanzado sustantivamente en una visión garantista con respecto a los derechos de la niñez mexicana; sin embargo, el principio del interés superior de la niñez no ha quedado explícitamente plasmado en nuestra Carta Magna, incumpliendo con ello los Acuerdos asociados a la Convención de los Derechos del Niño, en los cuales se establece que los Estados-Parte de la misma armonizarán sus marcos constitucionales y legales con los principios de la Convención.

Con la Reforma propuesta, México cumpliría cabalmente con sus responsabilidades asumidas ante la comunidad internacional, pero lo más importante es que daría un paso adelante en la protección de los derechos de uno de los grupos de población en mayores circunstancias de vulnerabilidad social.

Esta Iniciativa busca además fortalecer el contenido de nuestra Carta Magna en lo relativo al conjunto de derechos sociales, pues establecer de manera explícita el principio del interés superior de la niñez, obligaría a todas las autoridades del Estado a que en toda decisión o política, se tome en consideración siempre a los niños primero.

La aprobación de esta reforma, permitirá además fortalecer las capacidades del Estado mexicano para revertir las oprobiosas condiciones de desigualdad, pobreza, marginación, vulnerabilidad e inseguridad que enfrentan millones de niñas, niños y adolescentes en el país.

Así, al obligar explícitamente al Estado y a sus instituciones a proteger siempre primero a los niños, no habría argumento posible para postergar, bajo ningún argumento, el diseño de políticas, programas y acciones dirigidos a la plena garantía de los derechos de las niñas y los niños.

La urgencia de actuar en este sentido se evidencia a través de las cifras que reporta el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información (INEGI). En su boletín con motivo del "día del niño", emitido el 30 de abril de 2009, se destaca que en 2006, aproximadamente 7 de cada 100 niños nacidos vivos en México pesaron menos de 2,500 gramos al nacer. De manera específica, Baja California Sur (0.5%), Colima (0.6%), Campeche y Nayarit (0.7%) son las entidades con el menor porcentaje de nacidos vivos con bajo peso; en contraste, las entidades donde se observan los mayores porcentajes de bajo peso al nacer son el Distrito Federal (13.9%), estado de México (11.5%) y Jalisco (6.2%), además de la existencia de severos rezagos en entidades del sur y del centro del país, tales como Chiapas, Puebla, Veracruz, Michoacán y Guanajuato.¹

Porcentaje de nacidos vivos con menos de 2 500 gramos de peso al nacer por entidad federativa 2006

En materia educativa los rezagos persistentes son de suma gravedad. De acuerdo con los datos del Módulo de Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2007, en México había en ese año más de 3.1 millones de menores de 17 años que estaban privados de su derecho a la educación; y los resultados de las pruebas de rendimiento escolar, muestran lo impostergable que es llevar a cabo nuevas medidas que, sin el sustento de la protección de interés superior de la niñez, pueden seguir postergándose en aras de atender prioritariamente otros temas de la agenda nacional.

Es muy grave que en México haya aún casi 6 millones de analfabetas y que en el 2008, el 2.5% de los niños de 8 a 14 años no sabe leer ni escribir, según los datos del Segundo Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal.

Adicionalmente, las desigualdades en materia de protección de los derechos de los niños son abismales, sobre todo si se piensa en las diferencias que persisten entre las zonas urbanas y las rurales. Así, según los datos de la SEP, en localidades de menos de 2 500 habitantes, la proporción de la población de 8 a 14 años que no sabe leer ni escribir prácticamente se duplica, en relación al promedio nacional, ya que cinco de cada 100 niños se encuentran en dicha situación².

Otra realidad inaceptable respecto al incumplimiento de los derechos de los niños es la presencia masiva del trabajo infantil. De acuerdo con ya citado *Módulo de Trabajo Infantil 2007*, de la ENOE, en ese año había 29.2 millones de niños de 5 a 17 años, cifra que representa 27.5% de la población total del país; 50.5% eran niños y 49.5%, niñas.

De esa cantidad, 3.7 millones de niñas y niños entre los 8 y los 17 años trabajaban en alguna actividad, ya sea remunerada o no remunerada. De acuerdo con el tipo de actividades que realizaron en la semana de referencia, 52.8% realizaron quehaceres domésticos en su hogar y estudiaron, 28.8% sólo estudiaron, y 5.1 % combinaron el trabajo económico con los quehaceres domésticos y el estudio.

Los niños de 5 a 17 años que realizaron alguna actividad económica durante la semana de referencia fueron 3.6 millones; de los cuales, 66.9% son niños y 33.1% niñas. De acuerdo con la edad, 30.5% tienen entre 5 y 13 años y el resto (69.5%) entre 14 y 17 años.

Del total de niños ocupados, 1.5 millones no asisten a la escuela (41.5%), 70.7% son niños y 29.3%, niñas. La tasa de ocupación en las actividades económicas ascendió a 12.5%, porcentaje que en los niños fue de 16.6% y en las niñas de 8.3 por ciento.

1 "Estadísticas a propósito del día del niño". Datos nacionales, Inegi, 2009. P.4

2 Ibid, p.5

En las áreas más urbanizadas (100 mil y más habitantes) se ubica 30.6% del total de niños ocupados; en contraste, la mayoría (69.4%) radica en localidades con menos de 100 mil habitantes desempeñándose en su mayoría como jornaleros agrícolas.

En materia de violencia contra las niñas y los niños, México tiene un saldo de enormes magnitudes. De acuerdo con el Informe del Secretario General de la ONU, sobre la Violencia contra los niños, el nuestro es uno de los países con mayores tasas de muertes infantiles accidentales y violentas, con tasas crecientes de homicidios y suicidios entre la población adolescente.

Una de las preocupaciones fundamentales en estas materias, es la insuficiencia y la mala calidad de las estadísticas oficiales. Por lo que el establecimiento del Principio del Interés superior de la niñez, obligaría incluso a los órganos que tienen autonomía técnica o de gestión, tales como el Consejo Nacional de Población, el CONEVAL o el propio INEGI, a diseñar construir sistemas de indicadores eficientes para conocer y determinar el estado que guarda el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México.

2005-2006- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF.

En materia de salud, en México persisten altas tasas de mortalidad infantil por causas prevenibles, tales como las enfermedades diarreicas, las enfermedades intestinales infecciosas y las enfermedades respiratorias agudas.

Al respecto, vale la pena destacar que los índices de los derechos de la niñez mexicana, contruidos por UNICEF-México, muestran que en materia de salud, una niña o niño que nace en Chiapas o Guerrero, tiene tres veces más probabilidades de morir antes de cumplir los cinco años que una niña o niño que nace en el Distrito Federal o en Nuevo Leon.

En efecto, es una verdadera vergüenza nacional que el hecho de ser indígena o nacer con algún tipo de discapacidad, sea un determinante para estar en mayor riesgo de morir por falta de atención médica adecuada, acceso a medicamentos o a condiciones de higiene y saneamiento al interior de los hogares.

Ante todos estos datos, vale la pena advertir que no reflejan aún los efectos de la crisis económica que inició en 2008, lo que permite asumir que la gravedad de estos temas pudo haberse agudizado y que las condiciones de desigualdad, pobreza y vulnerabilidad ya se agravaron para las niñas y niños de México.

Vale la pena señalar además, que ya ha habido importantes esfuerzos en esta materia; ya en 2004, la entonces Senadora de la República, Yolanda Eugenia González Hernández, había presentado una iniciativa de reforma en el mismo sentido que la que aquí se plantea.

Asimismo, numerosas organizaciones de la sociedad civil han hecho hincapié, una y otra vez, en la importancia de incorporar a la Constitución este principio.

Más aún, el pasado 19 de noviembre de 2009, esta Legislatura llevó a cabo un Foro Nacional sobre los derechos de la niñez, en el que, con la presencia de la Lic. Margarita Zavala, de los c. Gobernadores de Durango y Morelos, así como de los coordinadores de todos los Grupos Parlamentarios, se dieron a conocer algunas de las conclusiones y resoluciones de los Foros organizados por la Presidencia de la República en materia de derechos de los niños.

Una de las principales propuestas ahí presentadas fue precisamente la de la necesidad de elevar a rango constitucional el Principio del Interés Superior de la Niñez.

Finalmente, debe decirse que esta Reforma rescata además, de la Iniciativa presentada en 2004 en el Senado de la República, una propuesta para reformar y actualizar: el Artículo 31 de nuestra

Carta Magna, a fin de adecuar las responsabilidades asignadas a los padres de familia, a la realidad y contexto actual.

Sin duda alguna, el cumplimiento de los derechos de los niños recae por un lado en las instituciones del Estado, pero sobre todo, lo hace en los progenitores, quienes son los principales responsables de velar porque el cumplimiento de los derechos de sus hijos tenga plena vigencia.

En esa lógica, y en el marco de un Estado democrático de derecho, es fundamental que nuestra Carta Magna establezca de manera explícita la necesidad de que todos los mexicanos contribuyamos a generar un régimen de gobierno plural, abierto y garante de todas las libertades.

En ese sentido, el fortalecimiento de la democracia pasa necesariamente por la educación y formación de nuestras niñas, niños y adolescentes en ambientes en los que el diálogo y el respeto mutuo sean los criterios elementales para la convivencia y el desarrollo social ampliado.

De acuerdo con el Diagnóstico presentado por el PNUD, *La democracia en América Latina; la Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas* (ENCUP, 2008); y muchos otros documentos, en México hay una deficiente cultura democrática y no se ha logrado que se asuma de manera generalizada los valores y principios que cimientan a todo régimen plenamente democrático.

Por ello, se considera de enorme relevancia establecer como una de las principales responsabilidades de los mexicanos, inculcar en sus hijos o niñas y niños bajo cuidado y resguardo, los principios que nos dan cohesión y posibilidad de convivencia armónica y solidaria.

Así, con base en los argumentos expuestos, las mujeres integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados presentamos para el análisis y en su caso aprobación de la presente Iniciativa, ante esta Honorable Asamblea

ANTECEDENTES DE LA MINUTA

Para un correcto entendimiento, se transcribe el Dictamen emitido por el Senado de la República:

Estas comisiones dictaminadoras comparten el espíritu así como los fines y razones que animan la minuta que se analiza.

Es importante señalar que el PRINCIPIO DEL INTERES SUPERIOR DEL NIÑO no es nuevo y su aparición en el derecho internacional es tributaria del extenso uso que de este principio se ha hecho en los sistemas jurídicos nacionales, tanto de cuño anglosajón como de derecho codificado. El análisis comparado de la evolución de los derechos de los niños en diferentes sistemas jurídicos revela una característica uniforme: el reconocimiento de los derechos de los niños ha sido un proceso gradual desde una primera etapa en que fueron personas prácticamente ignoradas por el derecho y solamente se protegían jurídicamente las facultades, generalmente muy discrecionales, de los padres. Los intereses de los niños eran un asunto privado, que quedaba fuera de la regulación de los asuntos públicos,

En América Latina la evolución de los derechos de los niños se deja ver en el derecho de familia, para presentarse con mucha claridad a partir de la legislación de protección dictada a comienzos de este siglo.

El principio del interés superior del niño fue uno de los mecanismos para avanzar en este proceso de considerar el interés del niño como un interés que debía ser públicamente, y por consecuencia, jurídicamente protegido. Tanto en Asia, Oceanía y África, las leyes promulgadas por el Imperio Británico consideraron este principio para la resolución de los conflictos de familia, y en muchos lugares han sido refrendadas por legislación posterior.

Con las leyes de menores, especialmente en América Latina, los niños no fueron suficientemente protegidos de la arbitrariedad privada y quedaron expuestos a diversas formas de abuso público, antes desconocidas, debido a la indiferencia de los órganos del Estado hacia la infancia. Sólo con el proceso iniciado con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN) en el que los intereses de los niños se convierten en genuinos derechos, los niños podrán oponer sus derechos como límite y orientación tanto de la actuación de los padres, como del Estado.

También, la evolución de los instrumentos internacionales de los derechos de los niños revela la permanente presencia de la noción de interés superior del niño, ya sea en la Declaración de Ginebra de 1924 que establecía el imperativo de darle a los niños lo mejor, o con frases como los “niños primero”, hasta la formulación expresa del principio en la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y su posterior incorporación, no sólo en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, sino también en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (arts. 5 y 16).

Como se puede apreciar, de este breve análisis se desprende que el principio del interés superior ha evolucionado conjuntamente con el reconocimiento progresivo de los derechos del niño y que, ahora que la construcción jurídica de los derechos del niño ha alcanzado un importante grado de desarrollo, corresponde que este principio sea interpretado según este nuevo contexto.

Cuando los niños eran considerados meros objetos dependientes de sus padres o de la arbitrariedad de la autoridad el principio fue importante para resaltar la necesidad de reconocer al niño su calidad de persona; ahora que, al menos en el plano normativo, se ha reconocido al niño como un sujeto portador de derechos, el principio debe ser un mecanismo eficaz para oponerse a la amenaza y vulneración de los derechos reconocidos y promover su protección igualitaria.

La CIDN contiene “principios” -que a falta de otro nombre, Miguel Cillero Bruño denomina “estructurantes”- entre los que destacan: el de no discriminación (art.2), de efectividad (art.4), de autonomía y participación (arts.5 y 12) y de protección (art 3). Estos principios -como señala Dworkin- son proposiciones que describen derechos: igualdad, protección efectiva, autonomía, libertad de expresión, etc., cuyo cumplimiento es una exigencia de la justicia. Los principios, en el marco de un sistema jurídico basado en el reconocimiento de derechos, puede decirse que son derechos que permiten ejercer otros derechos y resolver conflictos entre derechos igualmente reconocidos.

Entendiendo de este modo la idea de “principios”, la teoría supone que ellos se imponen a las autoridades, esto es, son obligatorios especialmente para las autoridades públicas y van dirigidos precisamente hacia (o contra) ellos. En consecuencia, nada más lejano al sentido de lo que se llama principio del interés superior del niño, creer que el interés superior del niño debe meramente “inspirar” las decisiones de las autoridades. No, el principio del interés superior del niño lo que dispone es una limitación, una obligación, una prescripción de carácter imperativo hacia las autoridades.

Más aún, si en este contexto analizamos el artículo 3.1 de la Convención comprobamos que su formulación es paradigmática en cuanto a situarse como un límite a la discrecionalidad de las autoridades:

“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos una consideración primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño”.

En ese tenor, es posible señalar que de la disposición del artículo 3 de la Convención se desprenden las siguientes características:

- Es una garantía, ya que toda decisión que concierna al niño, debe considerar primordialmente sus derechos.
- Es de una gran amplitud ya que no sólo obliga al legislador sino también a todas las autoridades e instituciones públicas y privadas y a los padres; también es una norma de interpretación y/o de resolución de conflictos jurídicos.
- Es una orientación o directriz política para la formulación de políticas públicas para la infancia, permitiendo orientar las actuaciones públicas hacia el desarrollo armónico de los derechos de todas las personas, niños y adultos, contribuyendo, sin dudas, al perfeccionamiento de la vida democrática.

Desde su creación los Estados partes, firmantes de la CIDN, se comprometieron (en el artículo 4) a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos establecidos en la misma.

En el entendido de que las leyes constituyen un marco propicio para establecer las prioridades del desarrollo de un país y por ende, son el origen de las políticas públicas, el compromiso establecido en la CIND pronto sirvió para que diversos organismos, como el Comité de los Derechos del Niño de la ONU (organismo encargado de supervisar el cumplimiento de la Convención en los Estados partes) insistieran en la necesidad de armonizar las leyes para garantizar su aplicación en el corto y en el largo plazo.

En México durante los 10 años de vigencia de la CIDN ocurrieron diversas reformas legislativas relacionadas con los derechos de la niñez, sobre todo a partir de la segunda mitad de los 90. Estas reformas tocaron aspectos como la violencia intrafamiliar, las adopciones, la tipificación de delitos cometidos contra niñas y niños, entre las principales. Sin embargo también ocurrieron reformas en el sentido contrario sobre todo en el ámbito penal.

Organizaciones sociales, legisladores, personalidades involucradas en la promoción de los derechos de la niñez en México, así como el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, enfatizaron la necesidad de crear leyes especializadas tanto en el ámbito federal como estatal, que dieran cuenta de manera integral de los derechos de la infancia y crearan las medidas apropiadas para garantizar su cumplimiento. Las reformas específicas, si bien necesarias, no superaban la desarticulación y contradicciones de los diversos ordenamientos legales referidos a la niñez en los distintos ámbitos.

Tales contradicciones frente a las difíciles y deprimentes condiciones de vida de millones de niñas y niños en México justificaban, incluso, propuestas en torno a reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de establecer, desde la Carta Magna, los compromisos del Estado frente a los derechos de la niñez y orientar así las leyes federales y estatales, dando origen a instrumentos especializados para tal efecto.

El 7 de abril de 2000 se publicó en el DOF la reforma y adición al artículo 4° de la Constitución que modifica por completo el régimen constitucional sobre los niños y niñas, se precisan cuáles son sus principales necesidades: alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral; se establece no sólo respecto de los padres sino también cuando corresponda a otros ascendientes o tutores y custodios el deber de preservar el derecho a satisfacer tales necesidades; se incorpora el concepto de dignidad de los niños y se establece la obligación del Estado de propiciar el respeto a tal dignidad y al ejercicio pleno de los derechos de la infancia. Finalmente, se establece que el Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de los niños.

Como ya se mencionó en el apartado anterior, al mes siguiente, el 29 de mayo de 2000, se publicó la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Esta es la ley reglamentaria del artículo 4° constitucional.

Por otra parte, la Ley de Asistencia Social de 2 de septiembre de 2004 se refiere especialmente a los niños, niñas y adolescentes como sujetos preferentes de la asistencia social, sobre todo cuando se encuentran en situación de desnutrición, por deficiencias en su desarrollo físico o mental; por maltrato o abuso; por abandono; por ser víctimas de explotación; por vivir en la calle; por ser víctimas de tráfico de personas o de cualquier tipo de explotación; por ser víctimas de pornografía o comercio sexual; ser infractores o víctimas de delito; hijos con padres que tengan enfermedades terminales o en condiciones de extrema pobreza; por ser migrantes y repatriados o ser víctimas de conflictos armados y persecución étnica o religiosa.

También en los términos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, de 11 de junio de 2003, al definir lo que se consideran conductas discriminatorias, se definen varias que tienen que ver con niñas, niños y adolescentes.

Estas medidas deben ser consideradas como un paso fundamental en materia de protección de los derechos de la niñez, principalmente porque introdujeron por primera vez en la historia del país, el concepto de niña, niño y de sus derechos, aspectos que resultan fundamentales para un trato diferente hacia esta población.

Dicha modificación constitucional ha llevado a reflexionar en torno a la necesidad, sentida por años, de contar con un marco legal amplio que garantice los derechos de la niñez y las condiciones que son básicas para hacerlos valer.

Es importante señalar que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU - organismo encargado de dar seguimiento a los acuerdos de la CIDN, ha recomendado al gobierno mexicano que las leyes federales y estatales reflejen los principios y medidas establecidas en el acuerdo internacional; que tales medidas fortalezcan el mandato y los recursos humanos y financieros de instancias como la Procuraduría de la Defensa de los Derechos del Niño y la Familia, entre otras.

Por los argumentos expuestos, estas comisiones unidas coinciden con la minuta de mérito, en la necesidad de que desde la ley se garanticen los derechos de la niñez, para que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se vele y cumpla con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Y que este principio guíe el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de la niñez.

Asimismo, que se establezca en el texto constitucional la obligación de los ascendientes, tutores y custodios de preservar y hacer cumplir estos derechos y principios, ya que son éstos quienes tienen la personalidad jurídica para ejercer estos derechos y hacer cumplir con los principios.

Y finalmente, estas comisiones dictaminadoras coinciden en establecer en el artículo 73 constitucional la facultad del Congreso para legislar en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes; en el entendido de que se trata de un tema de prioridad de la Federación y así se podrá contar con un instrumento jurídico adecuado.

Porque si bien el Congreso de la Unión ha emitido una ley en la materia, abrió la puerta a una variedad de versiones estatales sobre un mismo derecho, ya que como se menciona en el Dictamen de la Colegisladora, no obstante la existencia de ordenamientos secundarios en 30 entidades federativas, lo que tenemos es una heterogeneidad que atenta en contra de quienes se suponen son los sujetos fundamentales de estas leyes: las niñas, niños y adolescentes.

Es por ello que resulta necesario que los tres órdenes de gobierno, en una relación armónica, de recíproca complementación y de idéntica responsabilidad puedan dar mejores resultados. Ya que por tratarse de un derecho fundamental, no debe tener modalidades distintas,

Las facultades concurrentes implican que las entidades federativas, los municipios y la Federación, pueden actuar respecto de una misma materia, pero que, en estos casos, corresponde en exclusiva al Congreso de la Unión, el determinar la forma y términos de la participación de

dichos entes, a través de una Ley General. El anterior criterio, se contiene en la siguiente jurisprudencia:

FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES. Si bien es cierto que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: “Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.”, también lo es que el Órgano Reformador de la Constitución determinó, en diversos preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto de competencias, denominado “facultades concurrentes”, entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios e, inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, como son: la educativa (artículos 3o., fracción VIII y 73, fracción XXV), la de salubridad (artículos 4º., párrafo tercero y 73, fracción XVI), la de asentamientos humanos (artículos 27, párrafo tercero y 73, fracción XXIX-C), la de seguridad pública (artículo 73, fracción XXIII), la ambiental (artículo 73, fracción XXIX-G), la de protección civil (artículo 73, fracción XXIX-I) y la deportiva (artículo 73, fracción XXIX-J). Esto es, en el sistema jurídico mexicano las facultades concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el Distrito Federal, los Municipios y la Federación, puedan actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley general.

Así, la existencia de una concurrencia entre diferentes niveles de gobierno, permite fijar con claridad el ámbito de actuación de las entidades federativas y la Federación, identifica los espacios en donde debe generarse la coordinación y proporciona un marco para la identificación de autoridades responsables y, en su caso, para el ejercicio de las facultades de atracción.

En términos generales, con la propuesta de reforma de la minuta en estudio, se fijarán las bases para el establecimiento de una política integral en materia de derechos de la niñez que permita una acción efectiva y coordinada del Estado mexicano para velar por el interés superior de los mismos, cumpliendo con los tratados internacionales de los que México es parte.”

Tercero.- Esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que dictamina, llega a la convicción de ser procedente la reforma propuesta a los párrafos sexto y séptimo del artículo 4º., y se adiciona la fracción XXIX-P del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior en razón que como parte de la Federación debemos resaltar, que desde hace México ha suscrito diversos instrumentos internacionales de derechos humanos relacionados con los derechos de los niños y las niñas.

Algunos de ellos lo son:

- Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948.
- Convención Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Niños de 1921.
- Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.
- Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional.

Lo anterior sin perder de vista que, a nivel internacional los principales antecedentes en materia de los Derechos de los niños los tenemos desde la Declaración de Ginebra de 1924 que versa sobre Derechos del niño, entre otros instrumentos emitidos por Organismos Especializados Internacionales que han procurado el bienestar de las niñas, niños y adolescentes en todos sus aspectos.

El Estado de Coahuila siempre a mostrado un gran interés en proteger a nuestra niñez muestra de ello es la expedición de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas y los Niños y Adolescentes del Estado, Publicada en el Periódico Oficial del Estado el 26 de Octubre del año 2006.

El interés superior de la niñez exige que las sociedades y gobiernos deban de realizar el máximo de sus esfuerzos para propiciar las condiciones jurídicas, materiales y afectivas más favorables y que garanticen un desarrollo integral y una vida digna a nuestras niñas y niños, que les permitan desplegar sus habilidades alcanzando un máximo de bienestar que se verá reflejado en el crecimiento de nuestra sociedad a medida que se desarrollan y se convierten mujeres y hombres de provecho y de bien.

En la Declaración de los Derechos del niño en el numeral 1 de su artículo 3 se señala: ***“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el Interés Superior del niño”.***

Es por ello que esta Comisión dictaminadora considera que la reforma propuesta es un paso más en el avance de la regulación legal de los Derechos de las Niñas y los Niños, en la que nuestro país a asumido diversos compromisos vinculantes a través de los instrumentos internacionales que ha suscrito, con lo que se da pauta al reconocimiento de diversos derechos que les son inherentes a nuestros niños como lo son: el derecho a la identidad; a la adecuada salud y nutrición; a la educación; a vivir en un medio ambiente sano; a no ser explotado y a otra serie de prerrogativas que les otorga nuestra propia constitución, lográndose con esta reforma una armonía legislativa a favor de la niñez mexicana; por lo que se considera pertinente emitir el siguiente:

D I C T A M E N

UNICO.- Por las razones expuestas, y para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se aprueba por ésta Legislatura el Proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 4º., y se adiciona la fracción XXIX-P del artículo 73 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos siguientes:

Artículo Único. Se reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 4o.; y se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4º.

.....

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

.....

Artículo 73. ...

I. a XXIX-O. ...

XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia, de los que México sea parte.

XXX. ...

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Quincuagésimo Octava Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Diputado Jesús Mario Flores Garza, (Coordinador), Diputada Jessica Agüero Martínez, Diputado Salvador Hernández Vélez, Diputada Verónica Boreque Martínez González, Diputado Rogelio Ramos Sánchez, Diputada Esther Quintana Salinas, Diputado José Manuel Villegas González, Diputada Cecilia Yaneth Babún Moreno, Diputada Verónica Martínez García Saltillo, Coahuila, a 1 de agosto de 2011.

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES

NOMBRE	VOTO Y FIRMA		
	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN
DIP. JESÚS MARIO FLORES GARZA			

COORDINADOR			CONTRA
DIP. JESSICA AGÜERO MARTÍNEZ	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA
DIP. SALVADOR HERNÁNDEZ VÉLEZ	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA
DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA
DIP. ROGELIO RAMOS SÁNCHEZ	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA
DIP. ESTHER QUINTANA SALINAS	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA
DIP. JOSÉ MANUEL VILLEGAS GONZÁLEZ	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA
DIP. CECILIA YANETH BABÚN MORENO	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA
DIP. VERONICA MARTINEZ GARCIA	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA

Es cuanto, Diputada Presidenta.

- Participa también en la lectura del dictamen Diputada Secretaria Cecilia Yanet Babún Moreno.

Diputada Presidenta Hilda Esthela Flores Escalera:

Muchas gracias, Diputada Secretaria.

A continuación, esta Presidencia someterá a consideración el proyecto de decreto que contiene el dictamen que se acaba de leer, por lo que se solicita a quienes deseen intervenir para hacer comentarios que se sirvan indicarlo mediante el sistema electrónico a fin de registrar sus intervenciones.

Está pidiendo la palabra el Diputado Mario Alberto Dávila, ¿El sentido de su intervención? -A favor- Es la única intervención registrada. Tiene la palabra Diputado Mario Alberto Dávila Delgado.

Diputado Mario Alberto Dávila Delgado:

Muchísimas gracias, Diputada Presidenta.

En cuanto a este tema, es fundamental para los derechos de los niños y este trabajo que nos presenta el Congreso de la Unión y por supuesto el compromiso de este Congreso es también estar en ese sentido, en la reforma de los artículos 4 y artículo 73 de la Constitución Política de nuestro país, donde lo fundamental son los derechos de los niños y todo se resume a un lema donde está fortaleciendo esta reforma, “*los niños son primero*”.

Nuestro país en concordancia y en compromiso con las instituciones internacionales y nacionales se pone a la par en este tema con la preocupación de mejorar los temas fundamentales de la niñez, en lo específico como son: la alimentación, la salud, la educación, el sano esparcimiento, la dignidad de los niños y la atención primero que todos en caso de cualquier tipo de urgencia.

Con esta iniciativa la propuesta establecida es que mejoremos en los temas de natalidad, que haya una mejor expectativa de vida para los niños, que se disminuyan los índices de mortalidad y que reforcemos lo fundamental de la educación, la cultura y también toca otros temas importantes como el relativo al trabajo infantil, por todo lo anterior y por ser parte de mi profesión, apruebo y estoy de acuerdo con esta iniciativa y mi voto y el de mis compañeros es a favor.

Muchas gracias y es cuanto, Diputada Presidenta.

Diputada Presidenta Hilda Esthela Flores Escalera:

Gracias Diputado Mario Dávila.

No habiendo más intervenciones, se somete a consideración este dictamen, señalándose que el sistema electrónico estará abierto el tiempo programado para ese efecto y que una vez que concluya ya no se podrá votar, pidiéndose a las Diputadas y Diputados presentes que mediante el sistema electrónico emitan su voto en el sentido que determinen y al Diputada Secretario Loth Tipa Mota, que tome nota de la votación y que una vez que se cierre el registro de los votos informe sobre el resultado.

Se cierra el sistema.

Diputado Secretario Loth Tipa Mota Natharen:

Diputada Presidenta, habiéndose cerrado el registro de votación se informa que el resultado de la votación es el siguiente: 29 votos a favor; 0 votos en contra y 0 abstenciones.

Diputada Presidenta Hilda Esthela Flores Escalera:

Gracias Diputado Secretario.

Conforme al resultado de la votación, se aprueba por unanimidad el dictamen presentado en este caso por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por lo que deberá procederse a la formulación del decreto correspondiente, así como a su envío al Ejecutivo del Estado para su promulgación, publicación y observancia, asimismo comuníquese la expedición del presente decreto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A continuación, le solicito a la Diputada Secretaria Cecilia Yanet Babún Moreno, que se sirva dar lectura al dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con relación a una Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo décimo al artículo 4 y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a garantizar el acceso a la cultura física y el deporte.

Diputada Secretaria Cecilia Yanet Babún Moreno:

DICTAMEN de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo al Oficio de la C. Dip. María de Jesús Aguirre Maldonado Secretaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual envía copia del expediente relativo a la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo décimo al artículo 4º., y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y,

R E S U L T A N D O

PRIMERO.- Que con fecha 25 de marzo del año en curso, en sesión celebrada por el Pleno del Congreso, se acordó el turno a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Oficio de la C. Dip. María de Jesús Aguirre Maldonado Secretaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual envía copia del expediente relativo a la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo décimo al artículo 4º, y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y,

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 93, 96, 97, 99 fracción I, 100 fracción I y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

SEGUNDO.- La Minuta Proyecto de Decreto minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo décimo al artículo 4º, y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como parte de la cultura física, el deporte es una de las manifestaciones sociales que han adquirido mayor importancia dentro de la vida cotidiana del ser humano, el fenómeno deportivo es uno de los que más ha evolucionado y se ha desarrollado durante el proceso de la globalización por su gran inmersión en los ámbitos político, social, económico, cultural y jurídico.

Estudios recientes demuestran que la creciente importancia del deporte como realidad cotidiana resulta acreditada por su significación económica y social, sin olvidar su dimensión cultural y educativa.

A través de sus diversas modalidades como entretenimiento, espectáculo, alto rendimiento, popular o profesional, los alcances del deporte como instrumento educativo y su valor universalmente reconocido como protector de la salud física y mental han transformado a la cultura física y al deporte en una realidad en el ámbito internacional creando todo un nuevo concepto legal.

En textos especializados en la materia, se pone de manifiesto que *"la reciente constitucionalización del deporte no es un acontecimiento espontáneo, sino que responde a una evolución de los derechos y deberes públicos, íntimamente conectada con la transformación sucesiva de las tareas y cometidos de los poderes públicos frente a la sociedad"*.

En este sentido, nuestra Constitución es el instrumento jurídico que establece el Gobierno representativo, la división de poderes y garantiza los derechos individuales de los ciudadanos, complementados por los derechos sociales mismos que consisten en el reconocimiento de aquellos derechos de los grupos originariamente desconocidos por los regímenes individualistas.

No cabe duda que correspondió a nuestra Constitución el privilegio de ser la primera que consagró las normas protectoras de las clases sociales y su pleno reconocimiento. Los derechos sociales imponen al Estado un hacer, una conducta positiva que cuida la condición de los hombres frente a la economía y el capital, a la vez que significan un imperativo dirigido al Estado para que vigile, intervenga y garantice su respeto.

En anteriores estudios, realizados por este Congreso de la Unión, se afirma que la Constitución de 1917 dio cabida en forma clara y precisa a los derechos sociales que asisten a campesinos y trabajadores en los artículos 27 y 123 Y ello otorgó las bases para la conformación de otros derechos sociales que exigen con urgencia análisis y definición, entre ellos el derecho a la cultura física y el deporte.

La práctica de actividades físicas y deportivas, es un derecho vinculado a otros derechos fundamentales, pero no se le ha otorgado individualidad propia como tal, ya que se ha visto como un medio para la consecución de otros derechos, por lo que se debe reformular la regulación de la cultura física y el deporte, previéndolos como parte importante de la política social y económica, buscando su reconocimiento constitucional, estableciendo en los poderes públicos su estímulo, fomento, protección y garantía de que la práctica del deporte y el acceso a la cultura física se dé en las mejores condiciones y que se favorezcan los valores humanos de la libertad, de la igualdad y de la solidaridad.

Por otra parte, y como referencia expresa en el ámbito internacional, la Conferencia General de la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, reunida en París, en su 20 sesión emitió el 21 de noviembre de 1978 la "Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte", que en los términos de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, nos habla sobre las condiciones esenciales del ejercicio efectivo de los derechos humanos, dependiendo de la posibilidad brindada a todos y cada uno de desarrollar y preservar libremente sus facultades físicas, intelectuales y morales, por lo que en consecuencia se debería dar y garantizar a todos la posibilidad de acceder a la educación física y al deporte.

Con la convicción de que la preservación y el desarrollo de las aptitudes físicas, intelectuales y morales del ser humano mejoran la calidad de vida en los planos nacional e internacional afirmando que la educación física y el deporte deben reforzar su acción formativa y favorecer los valores humanos fundamentales que sirvan de base al pleno desarrollo de los pueblos.

En este contexto la Carta Internacional de la UNESCO proclama el desarrollo de la educación física y el deporte al servicio del progreso humano, para favorecer su desarrollo y exhortar a los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales competentes, los educadores, las familias y los propios individuos a inspirarse en ella, difundirla y ponerla en práctica.

A este posicionamiento la UNESCO recomienda en su artículo 10. de dicha carta que "la práctica de la educación física y el deporte es un derecho fundamental para todos.

"Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física y al deporte, que son indispensables para el pleno desarrollo de su personalidad. El derecho a desarrollar las facultades físicas, intelectuales y morales por medio de la educación física y el deporte deberá garantizarse tanto dentro del marco del sistema educativo como el de los demás aspectos de la vida social."

Más allá de lo anterior debemos considerar que el pleno desarrollo de las facultades a que hace mención dicha carta, sólo podrán llevarse a cabo cuando se tenga el pleno reconocimiento de lo que representan la cultura física y el deporte, así como su adecuada implementación y fomento por parte del Estado mexicano.

La falta de una norma constitucional que eleve a rango de garantía social ha sido un factor determinante para que en su momento la Ley de Fomento y Estímulo al Deporte, la Ley General del Deporte y la actual Ley General de Cultura Física y Deporte no hayan consolidado un modelo de cultura física y deporte que garantice el acceso de todos los mexicanos a la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas, pero sobre todo que defina claramente la participación del Estado; al igual que la de asociaciones civiles como la Confederación Deportiva Mexicana y el Comité Olímpico Mexicano en el fomento, promoción y desarrollo de la cultura física y el deporte en nuestro país.

El actual Plan Nacional de Desarrollo establece la necesidad de fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática; así como estimular la formación y consolidación de una cultura deportiva entre todos los grupos sociales y de edad, en todas las regiones del país promoviendo entre la población en general el acceso a la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas. .

Las nuevas generaciones requieren del reconocimiento de sus derechos fundamentales, pero sobre todo requieren que se garantice la respuesta del Gobierno para fomentar la equidad, justicia y oportunidad para realizar sus actividades fundamentales.

Por tanto, es necesario no solamente reconocer el derecho de los ciudadanos a desarrollar sus facultades físicas a través de la activación física, la recreación y el deporte, sino a acceder a los medios para cuidar de su salud física, durante toda su vida y que obtengan las oportunidades para poder desarrollar su talento deportivo dentro de organizaciones democráticas, justas y productivas.

Por ello, resulta importante resaltar que naciones como Grecia, Albania, Suiza, Bulgaria, Portugal, España, Brasil, Cuba, Chile, Paraguay, Perú, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Bolivia, Venezuela y Guatemala, estipulan en su carta magna el derecho al deporte o la obligación del Estado a fomentarlo.

Esto ha permitido a aquellas naciones establecer una política de Estado en materia deportiva con bases jurídicamente sólidas pudiendo implementar a su interior, una mejor cultura deportiva así como desarrollar un marco jurídico que vele por los derechos de los deportistas y establecer claramente, sin duda alguna, el papel e incumbencia de las diversas organizaciones deportivas nacionales e internacionales en la materia.

De ahí, surge la necesidad de proponer ante" esta soberanía la adición a nuestra Ley Fundamental donde el Estado reconozca el derecho al deporte y asuma la responsabilidad de proveer los elementos suficientes para hacer posible el ejercicio del derecho que todo gobernado debe tener.

En nuestro país ha tratado de justificarse, erróneamente, que el derecho al deporte está implícito en el artículo 3° constitucional, toda vez que en su segundo párrafo al señalar que: *la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano*. Se está considerando también el derecho al deporte.

En su momento, fue éste el fundamento Constitucional que intentó otorgársele al primer ordenamiento específico en la materia cuando este Poder Legislativo creó la Ley de Estímulo y Fomento del Deporte; misma que con posterioridad fue señalada como inconstitucional por no tener el Congreso de la Unión, en ese tiempo, facultades para legislar sobre esta materia ya que con posterioridad, y con base en estudios específicos en la materia, se concluyó que dicha referencia del artículo 3° constitucional corresponde al fundamento pedagógico de la educación física, concepto muy diferente al de deporte.

Controversia que persistió hasta el momento en que el Constituyente Permanente se vio en la necesidad de adicionar la fracción XXIX-J al artículo 73 de nuestra Ley Fundamental, otorgando expresamente al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia de deporte estableciendo las bases generales de concurrencia entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y municipios, y la participación de los sectores social y privado.

Lo anterior demuestra que el derecho al deporte no tiene su fundamento en el artículo 3° constitucional, pues de otra forma no se entiende la razón de haber adicionado la fracción XXIX-J al artículo 73 constitucional, toda vez que el Congreso de la Unión ya tenía la facultad de legislar en materia de educación.

De igual forma, sería erróneo argumentar que su fundamento se encuentra actualmente en el artículo 4° constitucional, ya que el Legislativo Federal, también cuenta con facultades para legislar en materia de salud.

El derecho al deporte no tiene actualmente ningún fundamento en los artículos 3° y 4° Constitucionales ni es reconocido con la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución, pues es evidente que se trató de una reforma a la parte orgánica de ésta dotando a un poder público del Estado, en este caso al Legislativo Federal, la facultad de legislar para establecer bases generales de coordinación, en esta materia.

Lo que hoy demandamos es la adición a nuestra Ley Fundamental en su parte dogmática para que el Estado reconozca como garantía de todo gobernado el derecho a la práctica del deporte y asuma la responsabilidad de fomentarlo.

Con esta iniciativa que hoy presentamos, retomamos y damos seguimiento a los trabajos realizados por las tres legislaturas que nos antecedieron y con el firme propósito de reconocer explícitamente a todos los ciudadanos mexicanos el derecho a la cultura física y el deporte.

Es por ello que los interesados en el tema insistimos en el reconocimiento expreso en la Ley Fundamental de la nación del derecho a esta importante actividad considerando que:

- I. El reconocimiento expreso del derecho a la cultura física y el deporte en nuestra Constitución Política será un excelente cauce para la vertebración de las acciones públicas a favor del desarrollo de estas actividades.
- II. La existencia de estos preceptos, específica mente en nuestra Carta Magna, será una muestra del interés de los poderes públicos por la materia en general y no sólo por la actividad institucionalizada y organizada, resaltándose la importante labor del Estado respecto de su promoción y fomento.
- III. Con las reformas y adiciones propuestas no cabrán mas posturas interpretativas unilaterales e incuestionables que desmeriten, intervengan o interrumpen el desarrollo del ordenamiento jurídico en la materia.
- IV. La estructura normativa de la cultura física y del deporte en nuestro país será reformada desde la perspectiva de ambas como un derecho y no como un concepto complementario o coyuntural, lo que permitirá la definición de una serie de directrices de actuación de los poderes públicos y las instancias particulares en sus respectivas y definidas competencias.
- V. La adecuación y actualización de la fracción XXIX- J del artículo 73 permitirá la expedición de una nueva Ley Reglamentaria en la materia de la que podrán emanar un determinado grupo de reglamentos que complementen la legislación en materias como:
 - a) Deportistas de alto rendimiento;

- b) Disciplina deportiva;
- c) Dopaje;
- d) Reconocimiento de la formación y titulación de los técnicos y entrenadores deportivos;
- e) Prevención de la violencia en los eventos y espectáculos deportivos;
- f) Registro y reconocimiento de asociaciones deportivas nacionales;
- g) Conformación de delegaciones representativas nacionales y
- h) Regulación laboral especial de los deportistas profesionales, complementario de la Ley Federal del Trabajo.

Las reformas propuestas, sin duda alguna, enriquecerán el actual marco jurídico nacional y consagrarán la existencia en nuestro derecho positivo de una nueva materia inexistente en el país, como la del derecho público del deporte permitiendo a nuestras comunidades universitarias, docentes e investigadores entre otras interesadas, participar en el desarrollo jurídico de esta vital e importante actividad en la vida nacional.

Por lo anteriormente expuesto, los Senadores integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de:

ANTECEDENTES DE LA MINUTA

Para un correcto entendimiento se transcribe el dictamen emitido por el Senado de la República:

"Estas comisiones unidas comparten el espíritu que anima la iniciativa en estudio y se coincide con la propuesta.

Toda vez que; si bien es cierto que existe la Ley General de Cultura Física y Deporte, y que la Ley General de Educación establece como objetivo de la educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares, que ésta estimule la educación física y la práctica del deporte, también lo es que, es preciso que nuestra Celta Magna consagre la necesidad de que el Estado garantice el derecho a la cultura física y el deporte a través de su promoción, fomento y estímulo.

La práctica de actividades físicas y deportivas es un derecho vinculado a otros derechos fundamentales, pero no se le ha otorgado individualidad propia como tal, ya que se ha visto como un medio para la consecución de otros derechos, por lo que se debe reformular la regulación de la cultura física y el deporte, previéndolos como parte importante de la política social y económica, buscando su reconocimiento constitucional estableciendo en los poderes públicos su estímulo, fomento, protección y garantía de que la práctica del deporte y el acceso a la cultura física se den en las mejores condiciones y se favorezcan los valores humanos de la libertad, de la igualdad y de la solidaridad.

Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física y al deporte, que son indispensables para el pleno desarrollo de su personalidad. El derecho a desarrollar las facultades físicas, intelectuales y morales por medio de la educación física y el deporte deberá garantizarse tanto dentro del marco del sistema educativo como en los demás aspectos de la vida social.

Más allá de lo anterior, debemos considerar que el pleno desarrollo de las facultades a que hace mención la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte emitida el 21 de noviembre de 1978 durante la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, reunida en París, sólo podrán llevarse a cabo cuando se tenga el pleno reconocimiento de lo que representan la cultura física y el deporte, así como su adecuada implementación y fomento por parte del Estado mexicano.

De todos es sabido que el deporte engrandece la vida; el deporte y la actividad física amalgaman la práctica recreativa, el ejercicio físico, el aprendizaje del desarrollo colectivo e individual. Este tipo de actividades resultan decisivas para el desarrollo de muchos aspectos, tanto físicos como psicológicos, de la vida futura. En definitiva, la actividad física y deportiva no es solo diversión, sino que también es salud ya que, en esencia, facilita el desarrollo integral de toda persona.

En el campo de la prevención de la violencia, el deporte ofrece a los adolescentes un modo de canalizar sus tensiones físicas y les permite aprender formas de competición positiva y de conducta no agresiva,

En el caso de los adultos, los expertos reconocen que el ejercicio sirve de palanca para empezar a rebajar la presencia de factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión arterial, la arterioesclerosis, la obesidad, entre otros.

La práctica de un ejercicio o deporte junto con la observancia de otros hábitos de salud puede tener consecuencias positivas inmediatas en la salud. Además el ejercicio físico mejora la capacidad orgánica del corazón, disminuyendo la necesidad de oxígeno, reduciendo la tensión arterial.

En el caso de los adultos mayores la práctica de la actividad física regular es una de las prioridades como forma de prevención de enfermedades crónico-degenerativas. La promoción de actividad física en los adultos mayores es indispensable para disminuir los efectos del envejecimiento y preservar su capacidad funcional.

A grandes rasgos este es sólo un pequeño recuento de las grandes ventajas que la educación física y el deporte ofrece para el crecimiento y desarrollo integral. Su elevación a rango constitucional ampliaría las oportunidades de convivencia y bienestar en pro de la sociedad mexicana.

En virtud de lo anterior, cabe resaltar que el reconocimiento constitucional del derecho a la cultura física y el deporte, significará para los poderes del Estado la asunción definitiva de un compromiso encaminado al aseguramiento del bienestar social de nuestra sociedad, lo cual claramente reflejará el establecimiento de una nueva etapa en el desarrollo del Estado Mexicano.

Asimismo, es importante mencionar que tanto en el ámbito internacional como en el derecho comparado es indudable que el deporte se ha convertido en una de las actividades del ser humano, que mayor atención capta; ya sea como entretenimiento, espectáculo, alto rendimiento o profesional; de ahí la gran importancia que representa y genera para la sociedad siendo innegable tanto su existencia y reconocimiento como derecho social.

Dicha existencia y reconocimiento del derecho del deporte que, en el ámbito internacional guían a la cultura física y el deporte, han provocado y traído la atención de diferentes sectores de la sociedad quienes indudablemente han visto en éste un gran medio para el desarrollo de diversas actividades sociales y económicas.

En la exposición de motivos de la iniciativa en estudio, se argumenta que la falta de una norma constitucional que eleve a rango de garantía social ha sido un factor determinante para que en su momento la Ley de Fomento y Estímulo al Deporte, La Ley General del Deporte y la actual Ley General de Cultura Física y Deporte no hayan consolidado un modelo de cultura física y deporte que garantice el acceso de todos los mexicanos a la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas, pero sobre todo que defina claramente la participación del Estado.

Así y conforme a los antecedentes jurídicos existentes en la materia, se estima obvio que ha correspondido al Derecho, jurídicamente hablando, un retraso en llegar a comprender a la cultura física y el deporte desde el especializado y particular punto de vista, lo cual nos permite en este momento dimensionar dichas actividades tomando en cuenta y considerando que si bien es cierto se ha escrito y han estudiado como un fenómeno basado en la actividad física, nos queda claro que

también son un fenómeno normativo; donde las reglas y normas, incluso propias, llegan a rebasar los límites establecidos en cada una de sus modalidades, mismos que repercuten en diversas ocasiones diferentes ámbitos sociales por lo que no es posible seguir haciendo caso omiso de las acciones y repercusiones jurídicas de las actividades físicas deportivas.

Es por ello que el planteamiento motivo del presente dictamen obtiene mayor repercusión cuando se trata como lo plantean los autores de la iniciativa, de la inserción de la cultura física y el deporte en los ordenamientos jurídicos y aun más cuando se promueve su incorporación al derecho positivo mexicano desde su constitucionalización como un derecho social, cuestión sin duda alguna novedosa que directamente incidirá en nuestro contexto normativo y doctrinal.

Por tal motivo y como lo han afirmado diversos teóricos de la materia, "se hace impostergable un acercamiento al deporte desde la perspectiva del Derecho, que permita delinear los contornos teóricos de la dogmática particular del derecho al deporte, en primer lugar, y a partir de la misma determinar si sus elementos constitutivos operan en el ámbito normativo del deporte, bien sea éste producto de los órganos estatales o bien las organizaciones deportivas".

De tal manera que lo anteriormente expuesto coincide con lo planteado por los autores de la iniciativa, con referencia a que se debe definir claramente la participación del Estado, de su órgano representante; al igual que de asociaciones civiles como la Confederación Deportiva Mexicana y el Comité Olímpico Mexicano en el fomento, promoción y desarrollo de la cultura física y el deporte en nuestro país.

Por lo que corresponde a la reforma a la fracción XXIX-J del artículo 73 constitucional, los autores consideran que dicha fracción solo otorga a un poder del Estado, en este caso al Legislativo Federal la facultad de legislar para establecer bases generales de coordinación en la materia, más no su proclamación y reconocimiento como un derecho.

Es por ello que con el reconocimiento expreso del derecho a la cultura física y el deporte en el artículo 4º constitucional, el complemento necesario de dicha adición resultaría ser precisamente la adecuación de dicha fracción XXIX-J, dando hincapié a la expedición de una nueva ley de carácter reglamentario correspondiente al derecho a la cultura física y el deporte.

Tercero.- Esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que dictamina, después de hacer un análisis exhaustivo de la minuta enviada por el Congreso de la Unión, llega a la convicción de ser procedente la reforma propuesta de agregar un décimo párrafo al artículo 4º y modificar la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en base a las siguientes consideraciones.

En los últimos años hemos observado el gran avance en nuestro sistema Jurídico Mexicano de protección a los derechos sociales, muestra de lo anterior son las diversas reformas a la propia Constitución como lo son la inclusión de diversos derechos colectivos encaminados a proteger a los individuos y su medio ambiente, así como proveer su sano desarrollo, otorgándole diversos medios que le puedan otorgar el acceso a una vida plena y satisfactoria.

Y a fin de continuar con ese espíritu protector, es muy loable que se siga plasmando nuevas protecciones como lo es el derecho al deporte, esta materia no es nueva en el mundo jurídico, este derecho efectivamente aparece ligado a la concepción de lo que debe ser la actuación de los poderes públicos y

el bienestar que estos deben otorgar a sus gobernados; al respaldarse constitucionalmente el deporte será una directriz de la concepción de calidad de vida que el Estado debe otorgar a sus ciudadanos.

Como se ha mencionado algunos derechos sociales como lo son el derecho a la protección de la salud, el derecho a un medio ambiente adecuado y otros que generan un bienestar al individuo, forman parte ya del texto del artículo 4º constitucional, razón por la cual el derecho al deporte debe de ser incluido como un derecho mas garante del desarrollo personal del individuo y de nuestra sociedad.

Los derechos colectivos se han formado gradualmente en nuestro sistema jurídico, dando paso con ello a los llamados derechos de tercera generación, que su fin es responder con eficacia a los escenarios complejos de nuestra sociedad, razones estas por las cuales es de considerarse necesaria la inclusión de estos derechos en nuestra constitución; por lo que se considera pertinente emitir el siguiente:

D I C T A M E N

UNICO.- Por las razones expuestas, y para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se aprueba por ésta Legislatura el Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo décimo al artículo 4º., y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos siguientes:

Artículo Único.- Se adiciona un párrafo décimo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para queda como sigue:

Artículo 4o.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.

Artículo 73.

I. a XXIX-I.

XXIX-J. Para legislar en materia de cultura física y deporte con objeto de cumplir lo previsto en el artículo 4o. de esta Constitución, estableciendo la concurrencia entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios; así como de la participación de los sectores social y privado;

XXIX-K a XXX.

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- En el plazo de un año, a partir de la publicación del presente Decreto, el Congreso de la Unión expedirá la legislación general reglamentaria del artículo 4o. constitucional en materia de cultura física y deporte.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Quincuagésimo Octava Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Diputado Jesús Mario Flores Garza, (Coordinador), Diputada Jessica Agüero Martínez, Diputado Salvador Hernández Vélez, Diputada Verónica Boreque Martínez González, Diputado Rogelio Ramos Sánchez, Diputada Esther Quintana Salinas, Diputado José Manuel Villegas González, Diputada Cecilia Yaneth Babún Moreno, Diputada Verónica Martínez García Saltillo, Coahuila, a 1 de agosto de 2011.

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES

NOMBRE	VOTO Y FIRMA		
	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA
DIP. JESÚS MARIO FLORES GARZA COORDINADOR			
DIP. JESSICA AGÜERO MARTÍNEZ			
DIP. SALVADOR HERNÁNDEZ VÉLEZ			
DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ			
DIP. ROGELIO RAMOS SÁNCHEZ			
DIP. ESTHER QUINTANA SALINAS			
DIP. JOSÉ MANUEL VILLEGAS			

GONZÁLEZ			
DIP. CECILIA YANETH BABÚN MORENO	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA
DIP. VERONICA MARTINEZ GARCIA	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA

Es cuanto, Diputada Presidenta.

- Participa también en la lectura del dictamen el Diputado Secretario Loth Tipa Mota Natharen.

Diputada Presidenta Hilda Esthela Flores Escalera:

Muchas gracias Diputado Secretario.

A continuación, esta Presidencia someterá a consideración el proyecto de decreto que contiene el dictamen que se acaba de leer, por lo que se solicita a quienes deseen intervenir para hacer comentarios que se sirvan indicarlo mediante el sistema electrónico a fin de registrar sus intervenciones.

Está solicitando la palabra el Diputado Mario Alberto Dávila, ¿El sentido de su intervención? -A favor-. Tiene la palabra Diputado Mario Dávila.

Diputado Mario Alberto Dávila Delgado:

Muchas gracias Diputada Presidenta.

Nuevamente en esta reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por supuesto este Congreso también se adhiere a esta modificación en el artículo 4 párrafo diez y en el artículo 73 fracción XXIX, elevando esta garantía a rango constitucional el acceso de toda la población a la cultura física y al deporte.

Esta también es una exigencia internacional trabajada principalmente por la Organización Mundial de la Salud, trabajada también por la Organización de Educación de la propia ONU, donde se trabaja un triángulo de positividad que está relacionada con la educación con cultura, artes, con deporte y cultura física.

Se dice por esta Organización Mundial de la Salud y por la ONU, que si un joven y un niño se mantiene en este triángulo de positividad, educación, cultura y deporte muy seguramente será un adulto positivo, un adulto productivo, además de que el bienestar físico y mental te dará una mejor sociedad, te dará mejores individuos, te dará una mejor productividad.

Y en cuanto al tema de la salud pues de alguna manera estarás combatiendo el problema de sobrepeso y de obesidad que posteriormente te podrá llevar algunas enfermedades como hipertensión, como hipercolesterolemias, problemas de infartos, problemas de diabetes y de otros tipos.

En lo particular, hace más de un año presenté una iniciativa de ley ante este Congreso para atender y tratar el sobrepeso y la obesidad y en un capítulo en los artículos 11, 12, 13, 14 y 15 hablamos de este tema donde debe estar involucrada la sociedad, donde debe estar involucradas las escuelas, los padres de familia, deben estar involucradas las autoridades, específicamente las de salud y las de educación y también deberán estar involucrados los tres niveles de gobierno.

Con esto pues, este Congreso está al tanto de lo que está sucediendo al nivel nacional y en nivel internacional y esperemos que siga en este rumbo y que en su momento podamos revisar esta iniciativa de ley, específicamente estos artículos y también podamos proponer algunas otras iniciativas en este

tema fundamental, ya que también contamos con una Comisión de Cultura Física y Deporte en este Congreso. Nuestro voto es a favor.

Y es cuanto Diputada. Muchas gracias.

Diputada Presidenta Hilda Esthela Flores Escalera:

Gracias, Diputado Mario Dávila.

No habiendo más intervenciones, procederemos a votar el proyecto de decreto que se sometió a consideración, señalándose que el sistema electrónico estará abierto el tiempo programado para ese efecto y que una vez que concluya ya no se podrá votar, pidiéndose a las Diputadas y Diputados presentes que mediante el sistema electrónico emitan su voto en el sentido que determinen, y a la Diputada Secretaria Cecilia Yanet Babún Moreno, que tome nota de la votación y que una vez que se cierre el registro de los votos informe sobre el resultado.

Se abre el sistema. Se cierra el sistema.

Diputada Secretaria Cecilia Yanet Babún Moreno:

Diputada Presidenta, habiéndose cerrado el registro de votación se informa que el resultado de la votación es el siguiente: 30 votos a favor; 0 votos en contra y 0 abstenciones.

Diputada Presidenta Hilda Esthela Flores Escalera

Muchas gracias, Diputada Secretaria.

Conforme al resultado de la votación, se aprueba por unanimidad el dictamen presentado en este caso por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por lo que debe procederse a la formulación del decreto correspondiente, así como a su envío al Ejecutivo del Estado para su promulgación, publicación y observancia, asimismo comuníquese la expedición del presente decreto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A continuación, le solicito al Diputado Secretario Loth Tipa Mota, que se sirva dar lectura al dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con relación a una Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 4, corrigiéndose en el orden los subsecuentes y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a garantizar el acceso a la alimentación.

Diputado Secretario Loth Tipa Mota Natharen:

Con permiso, Diputada Presidenta.

DICTAMEN de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo al Oficio del C. Lic. Emilio Suarez Licona Secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual envía copia del expediente relativo a la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 4º, recorriéndose en el orden los subsecuentes, y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y,

R E S U L T A N D O

PRIMERO.- Que con fecha 20 de mayo del año en curso, en sesión celebrada por la Diputación Permanente del Congreso, se acordó el turno a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Oficio del C. Lic. Emilio Suarez Licona Secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual envía copia del expediente relativo a la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 4º, recorriéndose en el orden los subsecuentes, y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 93, 96, 97, 99 fracción I, 100 fracción I y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

SEGUNDO.- La Minuta Proyecto de Decreto minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 4º., recorriéndose en el orden los subsecuentes, y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Es responsabilidad de esta Comisión de Puntos Constitucionales llevar a cabo una reforma a nuestro documento fundamental que establezca con claridad el contenido de la norma respecto de la reforma que se pretende hacer. Por ello, en sesión celebrada en el Pleno de la Comisión de Puntos Constitucionales, y derivado del estudio a la minuta enviada por el Senado de la República por la que se modifican los artículos 4º y 27 Constitucional, y una vez analizado y discutido sobre su contenido, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales arribaron a la conclusión de que el texto propuesto por el Senado debería modificarse, en virtud de evitar imprecisiones en el texto Constitucional. Por ello, se propone a la Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

La histórica transformación racional del ser humano según la cual el individuo en algún momento histórico indeterminado cedió parte de sus naturales libertades de acción -para obtener el respeto a sus derechos-, a una sociedad organizada a la cual se le llamó Estado, le permite a éste actuar legítima y dinámicamente en todos los actos de su función, y someter a los justiciables a una disciplina norma da que le alcanza a él mismo.

A medida que los gobiernos y el derecho positivo han encontrado las fórmulas idóneas, incluso por medio de la influencia del exterior, para establecer en una carta constitucional, la organización política, económica, social y cultural de los mexicanos, a la par se ha querido que la Constitución sea el documento indubitable a partir del cual se tenga la protección de los principios fundamentales del hombre, el control de la competencia de la autoridad y la adecuación de las demás normas legales a la misma.

El Estado de Derecho no puede subsistir si las leyes quedan rezagadas frente a las exigencias de la sociedad, sobre todo de una sociedad inmersa en un profundo proceso de cambio, como es la nuestra.

En este contexto esta Comisión de Puntos Constitucionales, concluye que el Estado tiene la imperante obligación de establecer los mecanismos necesarios para proveer un sistema alimentario, que permita a la sociedad mexicana su sano desarrollo.

El poder alimentarse es, sin duda, una necesidad elemental de los seres vivos, pero también es el derecho fundamental de garantizar los derechos del hombre. Sin embargo, en las últimas décadas la producción de la alimentación, se ha convertido en una crisis a nivel internacional, que no sólo abarca la producción, sino que se extiende al abasto y a la calidad de los alimentos, esto tiene como consecuencia que exista una gran preocupación en todas las naciones.

La comunidad internacional, con el fin de contrarrestar los efectos nocivos de la falta de alimentos, creó organismos especializados para hacer frente a la problemática alimenticia que cada año va en aumento, y eso derivó a que dentro del marco de las Naciones Unidas, en 1945 se fundará la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO), cuyo objetivo es la implementación de programas y la aplicación de acciones para erradicar el hambre y dar la seguridad alimenticia que nuestro mundo requiere. Asimismo, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), organismo cuyo propósito es lograr el desarrollo agrícola de las comunidades rurales, en función a la producción alimenticia, estos organismos, han declarado que es necesario que los países tomen acciones, concretas con la finalidad de superar la crisis que en este rubro enfrenta el mundo.

La crisis alimentaria ha generado en diversos foros y convenciones, el que los países participantes se comprometan a través de instrumentos jurídicos internacionales a realizar acciones necesarias para abatir las deficiencias alimenticias.

Es de precisarse que, en dichos foros y convenciones, México ha tenido una participación activa, suscribiendo conjuntamente con otros países instrumentos jurídicos internacionales de la siguiente magnitud:

1. La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948, segunda parte de su artículo 25.
2. La Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Mal Nutrición, aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 16 de noviembre de 1974, a la que posteriormente se adhirió nuestro país.
3. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (PIDESC), de 16 de diciembre de 1966, en su artículo 11, punto 2º, precisa que los Estados adoptarán las medidas o los métodos necesarios para mejorar la producción, conservación, distribución de alimentos y asegurar una distribución equitativa de los mismos.
4. En La Cumbre Mundial sobre la Alimentación celebrada en Roma en 1996, se pidió que se estableciera el derecho a la alimentación, con un contenido más concreto y operativo y, con este objetivo, se recogieron varias iniciativas de los asistentes.
5. En 1999, el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el órgano compuesto por expertos independientes que vigila la aplicación por parte de los Estados del Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptó una Observación General (Observación General No. 12) Sobre el Derecho a la Alimentación.
6. El 17 de abril de 2000, la Comisión de Derechos Humanos estableció, -por resolución 2000/10-, el mandato del Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación.

7. La Cumbre Mundial sobre la Alimentación del año de 2002, solicitó crear un Grupo de Trabajo Intergubernamental bajo los auspicios de la FAO, con el fin de poder preparar una serie de directrices encaminadas a la implementación, del derecho a la alimentación.

8. El 23 de noviembre de 2004, los 187 Estados Miembros del Consejo General de la FAO, adoptaron un "Conjunto de Directrices Voluntarias con el fin de Respaldo la Realización Progresiva del Derecho a una Alimentación adecuada en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional", estas directrices son recomendaciones que los Estados han aprobado para contribuir a la realización del derecho humano a una alimentación adecuada, ofreciendo a los Estados orientaciones sobre el mejor modo de cumplir la obligación contraída en razón de respetar el derecho a una alimentación, asimismo asegurar que las personas no padezcan hambre.

Los citados instrumentos, ilustran la problemática alimenticia, en el contenido de la Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Mal Nutrición, que a la letra dice:

“La grave crisis alimentaria que afecta a las poblaciones de los países en desarrollo, en los que vive la mayoría de las personas hambrientas y malnutridas del mundo y donde más de dos tercios de la población mundial producen alrededor de un tercio de los alimentos del mundo _desequilibrio que amenaza aumentar en los diez próximos años_ no sólo tiene graves repercusiones económicas y sociales, sino que compromete gravemente la realización de los principios y valores fundamentales asociados con el derecho a la vida y la dignidad humana, incorporados en la Declaración Universal de Derechos Humanos”³...

En este sentido la comunidad internacional, ha asumido compromisos ineludibles para adoptar medidas que logren abatir la crisis, ésto es a través de mecanismos que redunden en la producción de una autosuficiencia alimentaria y de calidad, cuyo objeto no tenga mayor propósito que satisfacer las necesidades de su población.

El Estado Mexicano preocupado por la problemática de la crisis alimentaria, suscribió además la Declaración de Roma sobre Seguridad Alimentaria Mundial, en la que quedó puntualmente establecido el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos.

Derivado de los compromisos internacionales, México llevó a cabo una serie de modificaciones a sus instrumentos jurídicos, y entre ellos destaca la ley de desarrollo sustentable.

Sin embargo, estos esfuerzos han sido insuficientes, las acciones legislativas han quedado cortas, pues la problemática alimentaria en nuestro país se ha agudizado. Esto es, por la importación de productos alimenticios que desde hace mucho tiempo se ha convertido en una total e indebida dependencia, aunada a una equivocada política de Estado en cuanto a la que debe entenderse por autosuficiencia alimentaria.

Por ello, es prudente que el Estado mexicano implemente políticas que aseguren la producción, el abasto y la calidad de los alimentos de manera oportuna, a fin de superar la crisis alimentaria en nuestro país.

En base a lo anterior, nuestro Estado esta comprometido no solamente a impulsar políticas públicas, sino, a realizar una reforma trascendental que implique la responsabilidad esencial

3 Sitio consultado www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/60/pr/pr30.pdf el 5 de abril de 2010.

que tiene con cada uno de sus gobernados en materia alimentaria, en el entendido de que es un derecho fundamental de carácter universal, que tiene toda persona independientemente de su condición económica, lugar de origen y características étnicas. Por lo tanto, es necesario que en nuestra Carta Magna se reconozca a la alimentación como un derecho fundamental, pues no se debe olvidar que los derechos fundamentales son:

“Todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto a status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar, entendiéndose por derecho subjetivo cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa de no sufrir lesiones en referencia a un sujeto por una norma jurídica; y por status la condición de un sujeto, prevista asimismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y o autor de los actos en ejercicio de estas.”⁴

De ahí que el derecho a alimentarse adecuadamente sea un derecho social; y es por eso que los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales consideran pertinente que se incorpore esta garantía dentro del artículo 4º Constitucional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente:

ANTECEDENTES DE LA MINUTA

"Estas comisiones unidas coinciden con la Colegisladora en los argumentos para incorporar en nuestra Constitución el derecho a la alimentación, así como establecer que el Estado se responsabilice en elaborar y llevar a cabo políticas públicas encausadas a que el abasto de los alimentos considerados como básicos sean suficientes y de calidad mediante un desarrollo rural integral, lo anterior con el objetivo de materializar este derecho como garantía,

Cabe señalar que esta reforma responde a la demanda de la sociedad civil por elevar a rango constitucional uno de los derechos humanos fundamentales como lo es el derecho a no padecer hambre y malnutrición, la cual ha sido apoyada por organizaciones de la sociedad civil desde 1992 (organizaciones campesinas, pro- derechos humanos, sindicales, urbanas, magisteriales, religiosas, de académicos e investigadores, de profesionistas de la nutrición así como de innumerables intelectuales, científicos, artistas y ciudadanos y ciudadanas de a pie).

Organizaciones que mediante escrito presentado el pasado 6 de abril en la Cámara de Diputados, consideran que para enfrentar eficientemente la crisis alimentaria por la que atraviesa nuestro país, no se puede seguir soslayando el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos internacionales derivados de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), así como los contraídos en la Cumbre Mundial de la Alimentación y la Cumbre del Milenio celebrada en Roma en 1996.

Elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación significa que éste se instituya como una garantía en nuestra Constitución, cuyo garante es el Estado mexicano; es un derecho que debe ser exigible ante el Estado. Es decir, que éste asegure en lo que se refiere a la alimentación dos condiciones básicas e indispensables: que sea adecuada y que en el abastecimiento de ella a la población haya sostenibilidad.

La adecuación en la alimentación significa que el Estado garantice la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad, nutritivos y de acuerdo a las tradiciones culturales para satisfacer las necesidades alimentarias de las personas. La sostenibilidad significa que las formas de producir y de brindar acceso a dichos alimentos garanticen que sean accesibles a las generaciones futuras.

4 Ferrajoli Luigi, Derechos y Garantías, editorial Trotta España 2001, pág. 37.

Esto exige que el Estado se obligue a fortalecer las capacidades de la Nación para desarrollar su soberanía alimentaria y emplear un modelo de agricultura que no sólo no agote, sino enriquezca la dotación de recursos naturales.

En nuestra Constitución el derecho a una adecuada alimentación se encuentra consagrado de una manera implícita.

El artículo 2° constitucional establece que para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, la Federación, los Estados y los Municipios tienen la obligación de apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil. Asimismo, el artículo 4° establece que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Dado que la salud depende de una alimentación adecuada, el reconocimiento constitucional del derecho a la salud implica y exige la protección del derecho a una alimentación adecuada.

Asimismo, se debe considerar que la propia suscripción del gobierno mexicano de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos hace que éstos formen parte de nuestro orden jurídico, tales como:

1. La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948, segunda parte de su artículo 25.

2. La Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Mal Nutrición, aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 16 de noviembre de 1974, a la que posteriormente se adhirió nuestro país.

3. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (PIDESC), de 16 de diciembre de 1966, en su artículo 11, punto 2°, precisa que los Estados adoptarán las medidas o los métodos necesarios para mejorar la producción, conservación, distribución de alimentos y asegurar una distribución equitativa de los mismos.

4. En La Cumbre Mundial sobre la Alimentación celebrada en Roma en 1996, se pidió que se estableciera en el derecho a la alimentación un contenido más concreto y operativo y, con este objetivo, se recogieron varias Iniciativas de los asistentes.

5. El Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1999), el órgano compuesto por expertos independientes que vigila la aplicación por parte de los Estados del Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptó en la Observación General No. 12 misma que establece los siguiente:

La disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas, y aceptables para una cultura determinada; La accesibilidad de esos alimentos en forma que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos... ”

6. El 17 de abril de 2000, la Comisión de. Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció, - por resolución 2000/10-, el mandato del Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación.

7. La Cumbre Mundial sobre la Alimentación del año de 2002, solicitó crear un Grupo de Trabajo Intergubernamental bajo los auspicios de la FAO, con el fin de poder preparar una serie de directrices encaminadas a la implementación del derecho a la alimentación.

8. El 23 de noviembre de 2004, los 187 Estados Miembros del Consejo General de la FAO, adoptaron un "Conjunto de Directrices Voluntarias con el fin de Respalidar la Realización Progresiva del Derecho a una Alimentación adecuada en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional"; estas directrices son recomendaciones que los Estados han aprobado para contribuir a la realización del derecho humano a una alimentación adecuada, ofreciendo a los Estados orientaciones sobre el mejor modo de cumplir la obligación contraída en razón de respetar el derecho a una alimentación, asimismo asegurar que las personas no padezcan hambre.

Los citados instrumentos, ilustran la problemática alimenticia, en el contenido de la Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Mal Nutrición.

De los preceptos que se acaban de mencionar se desprende que el derecho a la alimentación forma parte del concepto más amplio de "calidad de vida"; que se relaciona con el resto de los derechos sociales establecidos en la Constitución mexicana y en los instrumentos que conforman el derecho internacional de los derechos humanos.

Los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país son importantes pero no suficientes. Es necesario proteger adecuadamente el acceso a alimentos en la Constitución Federal y también a través de una ley reglamentaria en la materia.

Como se refiere en la Iniciativa que origina la presente reforma ".....nuestro Estado está comprometido no solamente a impulsar políticas públicas, sino, a realizar una reforma trascendental que implique la responsabilidad esencial que tiene con cada uno de sus gobernados en materia alimentaria, en el entendido de que es un derecho fundamental de carácter universal que tiene toda persona independientemente de su condición económica, lugar de origen y características étnicas."

Lo decisivo no es sólo incorporar el derecho a la alimentación en nuestra Constitución, sino que el Estado haga cumplir ese derecho".

Tercero.- Esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que dictamina la minuta que adiciona un párrafo al artículo 4º de y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considera que en la minuta de referencia, sus ponentes plantan la necesidad de que la garantía de tener una Alimentación Nutritiva, Suficiente y de Calidad, debe establecerse en forma clara y precisa en el texto Constitucional.

Es de considerarse, que efectivamente el poder alimentarse es una necesidad elemental de los seres humanos, pero de igual forma debe considerarse el garantizar ese derecho fundamental inherente al hombre.

Así las cosas, no podemos perder de vista que, que en los últimos años, la producción de alimentos es un problema no solo de nuestro país, sino por el contrario es un global internacional, que se genera no únicamente por el desabasto, sino la falta de producción y de calidad en los alimentos, lo que merece la atención y preocupación de los órganos Legislativos a fin de establecer los mecanismos necesarios para proveer un sistema nacional alimentario, que permita a la sociedad mexicana alcanzar un sano desarrollo.

Con esta reforma se estaría responsabilizando al Estado mexicano para proteger este derecho, así mismo lo obliga para que lleve a cabo la implementación de todas las medidas necesarias para garantizar el abasto suficiente y oportuno de los alimentos considerados como básicos, en primer lugar al crear el marco normativo que regularía su cumplimiento y en segundo lugar diseñando por parte de la administración Pública Federal las políticas necesarias para lograr se cumpla con la satisfacción de este derecho.

Así mismo, se considera acertada la modificación del segundo párrafo del la fracción XX del artículo 27, en virtud de cómo se señala en la minuta de estudio, el elemento de sustentabilidad, es un concepto coincidente con el criterio de la ONU al definirlo como aquel que satisface las necesidades esenciales de la generación presente sin comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades esenciales de generaciones futuras.

Por último es necesario señalar que esta iniciativa recoge en esencia la mayoría de los instrumentos internacionales suscritos por México en dicha materia de alimentación; por lo que se considera pertinente emitir el siguiente:

D I C T A M E N

UNICO.- Por las razones expuestas, y para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se aprueba por ésta Legislatura el Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 4º., recorriéndose en el orden los subsecuentes, y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos siguientes:

Artículo Único.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 4º., recorriéndose en el orden los subsecuentes, y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4º.- ...

....

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

....

....

....

....

....

....

....

Artículo 27.-...

....

I. a XIX...

XX. ...

El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Quincuagésimo Octava Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Diputado Jesús Mario Flores Garza, (Coordinador), Diputada Jessica Agüero Martínez, Diputado Salvador Hernández Vélez, Diputada Verónica Boreque Martínez González, Diputado Rogelio Ramos Sánchez, Diputada Esther Quintana Salinas, Diputado José Manuel Villegas González, Diputada Cecilia Yaneth Babún Moreno, Diputada Verónica Martínez García Saltillo, Coahuila, a 1 de agosto de 2011.

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES

NOMBRE	VOTO Y FIRMA		
	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA
DIP. JESÚS MARIO FLORES GARZA COORDINADOR			
DIP. JESSICA AGÜERO MARTÍNEZ			
DIP. SALVADOR HERNÁNDEZ VÉLEZ			
DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ			
DIP. ROGELIO RAMOS SÁNCHEZ			

DIP. ESTHER QUINTANA SALINAS	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA
DIP. JOSÉ MANUEL VILLEGAS GONZÁLEZ	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA
DIP. CECILIA YANETH BABÚN MORENO	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA
DIP. VERONICA MARTINEZ GARCIA	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA

Es cuanto, Diputada Presidenta.

- Participa también en la lectura del dictamen la Diputada Secretaria Cecilia Yanet Babún Moreno.

Diputada Presidenta Hilda Esthela Flores Escalera:

Muchas gracias Diputada Secretaria.

A continuación, esta Presidencia someterá a consideración el proyecto de decreto que contiene el dictamen que se acaba de leer, por lo que se solicita a quienes deseen intervenir para hacer comentarios que se sirvan indicarlo mediante el sistema electrónico a fin de registrar sus intervenciones.

No habiendo intervenciones, procederemos a votar el proyecto de decreto que se sometió a consideración, señalándose que el sistema electrónico estará abierto el tiempo programado para este efecto y que una vez que concluya ya no se podrá votar, pidiéndose a las Diputadas y Diputados presentes que mediante el sistema electrónico emitan su voto en el sentido que determinen, y al Diputado Secretario Loth Tipa Mota, que tome nota de la votación y que una vez que se cierre el registro de los votos informe sobre el resultado.

Se abre el sistema. Se cierra el sistema.

Diputado Secretario Loth Tipa Mota Natharen:

Diputada Presidenta, habiéndose cerrado el registro de votación se informa que el resultado de la votación es el siguiente: 30 votos a favor; 0 votos en contra y 0 abstenciones.

Diputada Presidenta Hilda Esthela Flores Escalera:

Muchas gracias Diputado Secretario.

Conforme al resultado de la votación, se aprueba por unanimidad el dictamen presentado en este caso por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por lo que debe procederse a la formulación del decreto correspondiente, así como a su envío al Ejecutivo del Estado para su promulgación, publicación y observancia, asimismo, comuníquese la expedición del presente decreto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es importante señalar en este momento que se incorporó ya a la sesión el Diputado Jesús Contreras Pacheco.

A continuación, le solicito a la Diputada Secretaria Cecilia Yanet Babún Moreno que se sirva dar lectura al dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de

Finanzas con relación a una iniciativa de Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Tiene la palabra Diputada Cecilia Yanet Babún.

Diputada Secretaria Cecilia Yanet Babún Moreno:

Con su permiso, Diputada Presidenta.

DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Finanzas de la Quincuagésimo Octava Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la Iniciativa de Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Lic. Jorge Juan Torres López Gobernador Constitucional del Estado; y,

RESULTANDO

PRIMERO.- Que en sesión celebrada por la Diputación Permanente del Congreso el día 04 de agosto del año 2011, se acordó turnar a estas Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Finanzas, la Iniciativa a que se ha hecho referencia.

SEGUNDO.- Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a estas Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Finanzas, la Iniciativa de Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Lic. Jorge Juan Torres López Gobernador Constitucional del Estado; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que estas Comisiones, con fundamento en los artículos 93, 96, 97, 99 fracción I, 100 fracción I, 101 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, son competentes para emitir el presente dictamen.

SEGUNDO.- Que la Iniciativa de Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Lic. Jorge Juan Torres López Gobernador Constitucional del Estado, se basa en las consideraciones siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La legislación y normatividad federal ha sufrido a partir del día 6 de diciembre de 1996, fecha en que se publicó la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza en vigor, importantes modificaciones que inciden de diversas formas en la regulación de la deuda pública estatal, municipal y de las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, incluyendo aspectos que van desde la determinación de facultades y la distribución de competencias, hasta la regulación de nuevos instrumentos y mecanismos de financiamiento, así como el establecimiento de nuevos requerimientos para su implementación y otros temas sustantivos, modificaciones que a la fecha no han sido totalmente incorporadas en la ley estatal de la materia.

De la misma forma, los mercados financieros han evolucionado rápidamente durante los últimos años, existiendo actualmente nuevos instrumentos de financiamiento bursátil y nuevas formas de acceso al financiamiento bancario mediante créditos estructurados, disponibles para estados, municipios y entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, cuya

implementación puede hacerse más eficaz mediante la expedición de un marco jurídico moderno que brinde plena certeza jurídica a los participantes en el mercado.

Asimismo, como resultado de la disponibilidad de nuevos instrumentos y formas de financiamiento, así como de la consecuente evolución del mercado, los inversionistas institucionales, instituciones bancarias, agencias calificadoras de valores, autoridades financieras y en general, los participantes en el mercado financiero, han ido estableciendo, recientemente, diversos requisitos que es necesario incluir en los ordenamientos legales, a efecto de que las entidades puedan tener acceso, de manera más eficiente, a las nuevas formas de financiamiento.

En ese contexto y considerando adicionalmente, en lo aplicable a entidades subnacionales, las Directrices para la Gestión de la Deuda Pública publicadas por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial, así como las recomendaciones emitidas en materia de deuda pública por la Convención Nacional Hacendaria en agosto de 2004, se hace necesario contar con una nueva y avanzada Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que entre otros aspectos relevantes:

- Incorpore los cambios necesarios, derivados de las múltiples modificaciones que ha sufrido en los últimos años, la legislación y normatividad federal aplicable en materia de deuda pública;
- Favorezca la diversificación de los instrumentos de deuda a los que pueden acceder el Estado, los Municipios y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, permitiéndoles el acceso eficiente a nuevos y más competitivos mecanismos de financiamiento, como son los derivados de la estructuración bancaria o bursátil, por citar algunos;
- Incluya lo necesario para cumplir con los requisitos establecidos por los inversionistas institucionales, instituciones bancarias, agencias calificadoras de valores, autoridades financieras y en general, los participantes en el mercado financiero, derivadas de la disponibilidad para Estados, Municipios, entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, de nuevos instrumentos de financiamiento estructurados, bancarios y bursátiles, así como de la consecuente evolución del mercado;
- Asegure que las necesidades de financiamiento y el cumplimiento de las obligaciones de pago del Estado, los Municipios y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, se satisfagan al más bajo costo posible y siempre en forma compatible con un nivel prudente de riesgo;
- Provea total transparencia y certeza jurídica, al determinar clara y detalladamente las funciones, facultades, obligaciones y objetivos de las autoridades en materia de deuda pública;
- Establezca provisiones para hacer públicos los aspectos sustanciales de la gestión de la deuda pública; y
- Prevea disposiciones que obliguen a las entidades a informar periódicamente sobre el volumen y la composición de su deuda.

La presente iniciativa de Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se integra por **nueve capítulos, cien artículos y ocho transitorios**, de los cuales a continuación se exponen los aspectos de mayor relieve:

En el **Capítulo Primero, “De las Disposiciones Generales”**, se precisa el objeto de la ley que consiste en establecer las bases a que deberán sujetarse el Estado de Coahuila de Zaragoza, los Municipios, los organismos públicos descentralizados estatales o municipales, las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria y los fideicomisos públicos estatales o municipales, que formen parte de la administración pública paraestatal o paramunicipal, para contraer obligaciones o celebrar empréstitos o

créditos que deriven del crédito público y que, en términos de lo previsto por la misma, constituyan deuda pública, así como regular lo relativo a su presupuestación, administración, garantías, mecanismos de pago, registro y control.

Igualmente, se especifica lo que para efectos de este ordenamiento debe entenderse por entidades, incluyendo al Estado, los Municipios, los organismos públicos descentralizados estatales o municipales, las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria y los fideicomisos públicos estatales o municipales, que formen parte de la administración pública paraestatal o paramunicipal.

Por otra parte, se definen y precisan diversos conceptos utilizados con frecuencia a lo largo del texto legal, tales como: Deuda Pública, Crédito Público, Empréstitos, Créditos, Financiamientos, Servicio de la Deuda Pública, Inversiones Públicas Productivas, Operaciones de Refinanciamiento, Operaciones de Reestructuración, Montos y Conceptos de Endeudamiento Autorizado, Órganos de Gobierno y Valores, entre otros.

El concepto de inversiones públicas productivas se replantea a efecto de precisarlo, en línea con lo previsto por otras leyes estatales, comprendiendo, entre otros aspectos, las destinadas a la ejecución de obras públicas; a la adquisición o manufactura de bienes; a la prestación de servicios públicos; al mejoramiento de las condiciones, estructura o perfil de la deuda pública vigente o de la que se pretenda contraer, rubro que se amplía para incluir, el refinanciamiento o reestructuración de empréstitos o créditos celebrados siempre que en su origen hayan sido destinados a Inversiones Públicas Productivas, lo cual permitirá refinanciar o reestructurar no sólo los financiamientos que se hubieren contratado en términos del Artículo 9 de la Iniciativa, sino también aquéllos pasivos cuya contratación, por alguna causa, pudiera haberse realizado por las entidades sin cumplir algún requisito legal, siempre que dichos financiamientos, en su origen, hayan sido destinados a Inversiones Públicas Productivas; o a cualquier otra finalidad de interés público o social, cuando en forma directa o indirecta, inmediata o mediata generen recursos públicos.

En apego a lo previsto por la fracción VIII del Artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformada por última vez en abril de 1981, la iniciativa prevé que los recursos obtenidos por las entidades mediante operaciones de deuda pública, únicamente podrán ser destinados a inversiones públicas productivas, quedando prohibido expresamente a las entidades contraer obligaciones de pasivo que constituyan deuda pública para financiar gasto corriente, prescribiendo además, que no podrán en ningún caso, contraer directa o indirectamente obligaciones, créditos o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional. No obstante lo anterior y a fin de adecuar la normatividad a la realidad imperante en los mercados financieros, la propuesta prevé que las obligaciones de pago que contraigan las entidades puedan denominarse en Unidades de Inversión o “UDI”.

De igual manera, considera que el desvío de los recursos procedentes de financiamientos constitutivos de deuda pública, será responsabilidad de los servidores públicos que incurran en ella, ya sea que ordenen o ejecuten los actos que resulten en el desvío correspondiente, sancionándose de conformidad con las leyes aplicables.

En el **Capítulo Segundo, “De las Facultades y Obligaciones de los Órganos en Materia de Deuda Pública”**, se consideran como órganos en esta materia al Congreso del Estado, al Poder Ejecutivo del Estado, a la Tesorería General, al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila de Zaragoza, a los Ayuntamientos y a los órganos de gobierno de las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, asimismo, se detallan minuciosamente las facultades y obligaciones de cada uno de ellos en materia de deuda pública, estableciéndose un sistema seguro, moderno, eficiente y congruente con la legislación federal y estatal en vigor, para la autorización, contratación, administración, refinanciamiento, reestructuración, registro y control de la deuda pública.

En el **Capítulo Tercero, “De la Presupuestación de la Deuda Pública”**, se establece en estricto apego a lo previsto por la Constitución Federal, que los montos y conceptos de endeudamiento, directo y contingente, que en su caso, sean necesarios para el financiamiento del Estado, los Municipios y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal,

deberán ser incluidos anualmente por el Poder Ejecutivo del Estado y por los Ayuntamientos, en la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado y en las iniciativas de Leyes de Ingresos de los Municipios, según corresponda.

A efecto de dar un mayor control al Congreso del Estado en materia de deuda pública, la iniciativa prescribe que la autorización de montos y conceptos de endeudamiento en las partidas correspondientes de la Ley de Ingresos del Estado y en las Leyes de Ingresos de los Municipios, no autoriza, por sí misma, al Poder Ejecutivo del Estado, a los Ayuntamientos, ni a las entidades de la administración pública paraestatal o paramunicipal, para la contratación de los créditos o empréstitos cuyos montos y conceptos se encuentren amparados bajo tales partidas, sino que, para que éstos puedan obtener dichos financiamientos deberán presentar y gestionar ante el Congreso del Estado, las solicitudes de autorización de endeudamiento correspondientes de acuerdo con lo previsto en el **Capítulo Cuarto** de la ley.

De particular importancia resulta señalar, que en los casos en que el Congreso del Estado autorice créditos o empréstitos que impliquen el ejercicio de montos y conceptos de endeudamiento no previstos o adicionales a los autorizados en la Ley de Ingresos del Estado o en las Leyes de Ingresos Municipales, dichos ordenamientos deberán reformarse o adicionarse a fin de incluir los nuevos montos y conceptos de endeudamiento. En todo caso, las reformas o adiciones antes señaladas deberán realizarse previamente a que las entidades contraigan los créditos o empréstitos de que se trate.

Con el objetivo de que las entidades tengan finanzas sanas en materia de deuda pública, se prescribe que los financiamientos deberán ser en todo caso, acordes con la capacidad de pago de las mismas y se determina la obligación de incluir en sus presupuestos de egresos, la o las partidas presupuestales necesarias y suficientes para cubrir el pago del servicio de la deuda pública a cargo de las mismas, correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, lo cual será verificado por el Congreso del Estado.

Asimismo, en estricto apego a lo previsto por el citado Artículo 117, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la iniciativa puntualiza la obligación del Poder Ejecutivo del Estado y de los Ayuntamientos de informar al Congreso del Estado sobre el ejercicio de las partidas correspondientes a los montos y conceptos de endeudamiento autorizado y en relación a la situación de su deuda pública al rendir la cuenta pública estatal o municipal.

En el **Capítulo Cuarto, “De la Contratación de Empréstitos y Créditos”**, se establece el procedimiento que deberán seguir las entidades que se propongan celebrar financiamientos, incluida la emisión de valores y se dispone que una vez que las entidades cuenten con las autorizaciones de los órganos de gobierno, de los Ayuntamientos y de la Tesorería General, según corresponda, para la obtención de los empréstitos o créditos, podrán gestionar ante el Congreso, por conducto del Poder Ejecutivo del Estado o de los Ayuntamientos, según corresponda, la autorización correspondiente.

Con el propósito de generar una mayor transparencia en el manejo y gestión de la deuda pública, se prescribe el deber de las entidades de remitir al Congreso del Estado, dentro de un plazo de sesenta días naturales, contados a partir de la celebración de cualquier crédito o empréstito, un informe por escrito que refleje el monto, forma y términos de los mismos, acompañando copia de los documentos en los que consten los actos jurídicos, valores o títulos de crédito que las documenten.

De igual manera, para garantizar las mejores condiciones de financiamiento en favor de las entidades, la iniciativa propuesta determina la obligación de las entidades que se propongan contraer deuda pública de analizar las diferentes opciones de financiamiento disponibles en el mercado y optar por la, o las, que ofrezcan las condiciones más favorables al interés público.

En virtud de lo anterior, la Iniciativa propone que las autorizaciones que, mediante ley o decreto, otorgue el Congreso para la contratación de las operaciones previstas en la ley, deberán ser genéricas y en ningún caso podrán designar a la institución con la cual deberá celebrarse la operación correspondiente.

En otro orden de ideas, se señala que las operaciones de endeudamiento que celebren las entidades, deberán apegarse a las autorizaciones otorgadas por el Congreso del Estado y los recursos provenientes de las mismas, aplicarse de acuerdo al destino

autorizado en el decreto correspondiente, acotando que cualquier modificación al destino de un crédito o empréstito, o a las demás condiciones autorizadas por el Congreso del Estado en el decreto respectivo, requerirá de una nueva autorización por parte de dicho órgano legislativo.

Asimismo, en este capítulo se determina, que el Congreso del Estado vigilará, a través de sus órganos facultados para tal fin, que los recursos obtenidos por las entidades con motivo de las operaciones de endeudamiento sean destinados a las inversiones públicas productivas autorizadas por el propio Poder Legislativo y que dichas operaciones sean realizadas conforme a las disposiciones constitucionales y legales aplicables.

Con relación al pago del servicio de la deuda pública, se prescribe la obligación del Poder Ejecutivo del Estado, los Ayuntamientos y los órganos de gobierno de las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal de realizar oportunamente los pagos de la deuda pública a su cargo.

Por otra parte, en atención a la incertidumbre que genera la gran dinámica de las variables económico-financieras en el mundo actual y con miras a facilitar el control y la adecuada administración y gestión de los riesgos derivados de la deuda pública, se incluye en la propuesta un precepto que faculta a las entidades para celebrar operaciones financieras de cobertura que tiendan a evitar o reducir los riesgos económico-financieros derivados de los créditos o empréstitos obtenidos con base en la ley, estableciendo que en los casos en que el plazo de las operaciones financieras de cobertura exceda de tres años su contratación requerirá de la previa autorización del Congreso del Estado.

Con la finalidad por un lado, de satisfacer los nuevos requerimientos establecidos en la normatividad que regula a las Instituciones de Banca Múltiple y a las Instituciones de Banca de Desarrollo, y lograr con ello que el Estado y los Municipios puedan celebrar créditos o empréstitos en mejores condiciones; y por otro lado, con el objetivo, de que las entidades puedan acceder de manera más eficiente a mecanismos de financiamiento bursátil, se establece la obligación a cargo del Poder Ejecutivo del Estado de contratar a instituciones calificadoras de valores a efecto de que emitan la calificación sobre la calidad crediticia del Estado y para que realicen, en su caso, la revisión periódica de dicha calificación. Asimismo, se faculta al Poder Ejecutivo del Estado para que en su caso, contrate a dichas instituciones para que califiquen la calidad crediticia de los valores que emita o de los préstamos que contraiga con instituciones financieras y para que realicen, la revisión periódica de dichas calificaciones.

Con igual propósito y en atención a que la contratación de las instituciones calificadoras de valores no siempre se justifica, la ley faculta, pero no obliga, como en el caso del Estado, a los Ayuntamientos y los órganos de gobierno de las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, para que en los casos en que así lo estimen justificado, contraten a instituciones calificadoras de valores para que califiquen su calidad crediticia, la de los valores que emitan o préstamos que contraigan con instituciones financieras y para que realicen la revisión periódica de dichas calificaciones.

A fin de cumplir, por un lado, con las exigencias normativas asociadas a las nuevas formas de financiamiento disponibles en el mercado y, por el otro, de satisfacer los requerimientos necesarios para obtener de las instituciones calificadoras de valores, evaluaciones que permitan a las entidades acceder a financiamiento en mejores condiciones, se autoriza a las entidades para contratar auditores externos que dictaminen sus estados de ingresos y egresos.

En cuanto a la posibilidad de que las entidades se otorguen empréstitos o créditos entre sí, la iniciativa faculta al Estado para que por conducto de la Tesorería General o del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila de Zaragoza, pueda otorgar a los Municipios y a las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, empréstitos o créditos de los previstos en el **Artículo 9** de esta ley. Asimismo, faculta a las Entidades de la Administración Pública Paraestatal para otorgar empréstitos o créditos de los anteriormente señalados al Estado, y prevé que los Municipios puedan otorgar créditos de los previstos en el **Artículo 9** a las entidades de la administración pública paramunicipal.

Lo anterior en el entendido de que los financiamientos entre entidades deberán ser en todo caso, acordes con la capacidad de pago de las mismas.

Para concluir, el **Capítulo Cuarto** establece la obligación del Poder Ejecutivo del Estado de asesorar, por conducto del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila de Zaragoza, en los casos en que así se lo requieran, a los Municipios y a las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal en la formulación de sus proyectos financieros y en lo relativo a los financiamientos que se propongan obtener.

El **Capítulo Quinto**, “**De la Emisión y Colocación de Valores**”, autoriza a las entidades para que ocurran al mercado de valores a obtener financiamiento mediante la emisión de valores y señala que la celebración de empréstitos o créditos mediante esa vía, así como la colocación de los mismos entre el gran público inversionista, estará sujeta en todos los casos, a la aprobación previa del Congreso del Estado, debiéndose cumplir con los requisitos que para las demás operaciones de endeudamiento se precisan en este ordenamiento.

La iniciativa propuesta determina que las entidades sólo podrán emitir valores pagaderos en moneda nacional y dentro del territorio de la República. Estableciendo la obligación de que en los títulos respectivos, y en su caso en el acta de emisión, se citen los datos fundamentales de su autorización, así como la prohibición de su venta a extranjeros, sean estos gobiernos, entidades gubernamentales, organismos internacionales, sociedades o particulares. De igual forma, determina que los valores no tendrán validez si no consignan dichos datos. Esta disposición se hace extensiva a los demás títulos de crédito que suscriban, avalen o acepten las entidades.

Asimismo, el **Capítulo Quinto** establece que los valores que emitan las entidades deberán inscribirse en la Sección de Valores del Registro Nacional de Valores y en su caso, en una bolsa de valores mexicana legalmente autorizada para operar y prevé la posibilidad de que las entidades emitan valores directamente o de manera indirecta, mediante fideicomisos, a través de instituciones fiduciarias y al amparo en su caso, de un acta de emisión, cuando por disposición de la ley o de la naturaleza de los títulos correspondientes así se requiera.

La iniciativa prevé también, la posibilidad de que las entidades puedan, previa autorización del Congreso del Estado, realizar emisiones conjuntas de valores y dispone que en los actos jurídicos que las documenten, se deberán establecer separadamente las obligaciones a cargo de cada emisora, quedando expresamente prohibido a las entidades, garantizar o avalar en cualquier forma, obligaciones de los demás participantes en los casos en que esta Ley no los faculte expresamente para fungir como garantes, avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o sustitutos de las entidades de que se trate.

Para concluir, en este capítulo se dispone que en lo referente a la emisión, colocación y operación de los valores, las entidades se sujetarán a lo previsto por la Ley de Mercado de Valores y demás disposiciones legales aplicables.

Por su parte, el **Capítulo Sexto**, denominado “**De las Garantías, Avaes y Mecanismos de Pago**”, faculta al Estado para que, previa autorización del Congreso del Estado se constituya en garante, avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto de los Municipios y de las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal; y a los Municipios para que se constituyan en garantes, avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o sustitutos de las entidades de la administración pública paramunicipal a su cargo.

La iniciativa de ley prevé que cuando los Municipios o las entidades de la administración pública paraestatal o paramunicipal requieran del aval o garantía del Estado, la contratación de empréstitos o créditos se realice con la autorización de la Tesorería General y la intervención del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Es importante apuntar que de acuerdo al texto de la iniciativa propuesta, el Estado únicamente podrá constituirse en garante o avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto de los Municipios o de las entidades de la administración pública paramunicipal, en los casos en que la magnitud o el impacto del proyecto que se pretenda financiar así lo amerite, o cuando existan

circunstancias extraordinarias, plenamente justificadas que así lo requieran a juicio de la Tesorería General y del Congreso del Estado.

En el caso de los Municipios, éstos únicamente podrán constituirse en garantes, avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o sustitutos de las entidades de la administración pública paramunicipal, en los casos en que la magnitud o el impacto del proyecto que se pretenda financiar así lo amerite, o cuando existan circunstancias extraordinarias, plenamente justificadas que así lo requieran a juicio del Ayuntamiento y del Congreso del Estado.

El capítulo en comento contempla el procedimiento que deberán seguir las entidades que requieran el aval o la garantía del Estado o de los Municipios.

Por otro lado, se incluye una disposición legal que permite al Estado y a los Municipios afectar a fines especiales determinados activos o ingresos que les correspondan, al señalar que dichas entidades podrán, con la autorización previa del Congreso del Estado, emitida mediante ley o decreto, afectar como fuente y/o garantía de pago, de los financiamientos que celebren directamente o de aquellos en los que funjan como garantes o avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o sustitutos, sus ingresos derivados de contribuciones, cobranza de cuotas, cooperaciones, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones federales o cualesquier otros ingresos de los que puedan disponer de conformidad con la legislación aplicable y sus accesorios, incluyendo la posibilidad de afectar los derechos al cobro de los ingresos antes referidos, posibilitando con ello el acceso a financiamientos vía la bursatilización eficiente de ingresos.

Lo anterior se hace extensivo a las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, mismas que quedan facultadas para que, con la autorización previa de sus órganos de gobierno, de la Tesorería General, de los Ayuntamientos y del Congreso del Estado, según corresponda, puedan afectar como fuente y/o garantía de pago, de los financiamientos que celebren directamente, sus ingresos derivados de la cobranza de cuotas, derechos, productos o cualesquier otros ingresos de los que puedan disponer de conformidad con la legislación aplicable, incluyendo también, la posibilidad de afectar los derechos al cobro de los ingresos antes referidos.

En el mismo orden de ideas, se establece la posibilidad de que el Estado y los Municipios, puedan afectar también, como garantía y/o fuente de pago, de los financiamientos que celebren directamente o de aquellos en los que funjan como garantes o avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o sustitutos, los bienes del dominio privado de su propiedad.

De la misma manera, con base en las recientes reformas a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de diciembre de 2006, en la iniciativa se propone también que, sujeto a las limitaciones previstas en la ley de la materia, el Estado y los Municipios puedan, con la autorización previa del Congreso emitida mediante ley o decreto, afectar como fuente o garantía de pago de financiamientos que contraten directamente, las aportaciones federales que en términos de la legislación federal aplicable sean susceptibles de afectación o los derechos al cobro de los ingresos antes referidos.

Es importante acotar que en el caso de financiamientos cuya garantía o fuente de pago sean las aportaciones federales correspondientes a los fondos de aportaciones para la infraestructura social y de fortalecimiento de las Entidades Federativas, los recursos correspondientes únicamente podrán destinarse a los fines previstos en la ley federal que las regula, siempre que los mismos sean, adicionalmente, considerados inversiones públicas productivas en términos de lo previsto por la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Por otra parte y de acuerdo con lo previsto por la Ley de Coordinación Fiscal Federal, la iniciativa prescribe que las participaciones federales y las aportaciones federales que en términos de la legislación federal aplicable sean susceptibles de afectación, únicamente podrán ser afectadas para el pago de obligaciones que contraigan el Estado o los Municipios, con autorización del Congreso del Estado e inscritas a petición de dichas entidades en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el Registro Único de Obligaciones

y Empréstitos del Estado de Coahuila de Zaragoza, a favor de la Federación, de instituciones de crédito que operen en territorio nacional, así como de personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

En este capítulo, se establece que los mecanismos legales que, bajo cualquier modalidad o forma, se propongan implementar las entidades a efecto de garantizar o realizar el pago de financiamientos, deberán ser previamente autorizados por el Congreso del Estado.

De igual manera, se faculta al Poder Ejecutivo del Estado y a los Ayuntamientos para realizar los pagos de obligaciones garantizadas mediante la afectación de participaciones y de aportaciones federales a cargo del Estado y los Municipios, que sean inscritas en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado, a través de los mecanismos legales anteriormente referidos.

Asimismo, queda terminantemente prohibido el otorgamiento de garantías o avales fuera de los casos previstos en la iniciativa, precisándose que el servidor público que viole esta disposición incurrirá en responsabilidad oficial.

Por último, el **Capítulo Sexto** incluye una moderna disposición que faculta al Estado, los Municipios y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, con la autorización previa del Congreso del Estado emitida mediante ley o decreto, para contratar, bajo cualquier forma legal, el otorgamiento de garantías de terceros, totales o parciales, a efecto de mejorar la calidad crediticia de los financiamientos que celebren de manera directa.

El **Capítulo Séptimo**, “**De las Operaciones de Refinanciamiento y Reestructuración de la Deuda Pública**”, regula ampliamente el tema y autoriza a las entidades a realizar, con sujeción a lo previsto en la ley, operaciones de refinanciamiento o reestructuración, total o parcial, de los créditos o empréstitos a su cargo, con la finalidad de mejorar las condiciones de plazo, tasas de interés, garantías u otras condiciones originalmente pactadas.

En esta propuesta se definen como operaciones de refinanciamiento, los empréstitos o créditos que se celebren por las entidades, bajo cualquier modalidad, a efecto de mejorar las condiciones de tasa de interés, plazo, perfil de amortización, garantías u otras condiciones originalmente pactadas de uno o varios financiamientos a su cargo, substituyendo o novando las obligaciones del financiamiento original, por uno o varios nuevos financiamientos con el mismo o con diferente acreedor y, como operaciones de reestructuración, los empréstitos o créditos que celebren las entidades a efecto de mejorar las condiciones de tasa de interés, plazo, perfil de amortización, garantías u otras condiciones originalmente pactadas de uno o varios financiamientos a su cargo, con el mismo acreedor, que no impliquen novación.

La iniciativa determina que la celebración de operaciones de refinanciamiento de los empréstitos o créditos a cargo de las entidades únicamente podrá realizarse, con la aprobación previa del Congreso del Estado. No obstante lo anterior, debe subrayarse que el Artículo 9 regula por separado, dándole un tratamiento particular, lo relativo al refinanciamiento y reestructuración de empréstitos o créditos contratados con base en el mismo.

En cuanto a las operaciones de reestructuración y con el propósito de que las entidades estén en posibilidades de tomar ventaja de las ventanas de oportunidad que en ocasiones brinda el mercado, se prevé que las mismas puedan ser celebradas, sin necesidad de autorización por el Congreso del Estado cuando su objeto sea el mejoramiento de las condiciones originales de los financiamientos consistente en la reducción del plazo, la disminución de la tasa de interés o la reducción de las garantías. Sin embargo, aún en el caso de operaciones de reestructuración que no requieran autorización del Congreso del Estado, éstas deberán ser autorizadas por los Ayuntamientos en tratándose de empréstitos a cargo de los Municipios o por los órganos de gobierno, la Tesorería General y los Ayuntamientos, según corresponda, en la hipótesis de créditos a cargo de entidades de la administración pública paraestatal o paramunicipal.

En el caso de operaciones de reestructuración cuyo objeto sea la ampliación del plazo o cualquier otra modificación, distintas de las señaladas en el párrafo que precede, impliquen o no, novación, las entidades deberán obtener las autorizaciones previstas en la iniciativa para cualquier otro crédito o empréstito.

En el **Capítulo Octavo**, titulado “**De la Subrogación de la Deuda Pública Derivada de Activos que se Enajenen o Concesionen**”, se prevé la posibilidad de que la deuda pública contratada por el Estado o por los Municipios para la ejecución de obras, adquisición o manufactura de bienes o prestación de servicios cuyo uso o explotación con posterioridad se enajene o concesione, pueda subrogarse al adquirente o al concesionario, en los casos en que así lo consideren conveniente el Poder Ejecutivo del Estado o los Ayuntamientos respectivos, debiéndose proceder a la sustitución de las garantías originalmente otorgadas por el Estado o el Municipio correspondientes, lo anterior para que dichas entidades estén en posibilidades de cancelar la deuda respectiva en sus estados financieros, logrando con ello una mejor percepción de la calidad crediticia de las mismas que facilite la obtención de mejores condiciones de financiamiento.

El **Capítulo Noveno**, “**Del Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado de Coahuila de Zaragoza**”, de conformidad con lo previsto por el tercer párrafo del Artículo 9º de la Ley de Coordinación Fiscal y en su Reglamento, a fin de instituir un mecanismo de control que permita determinar los niveles de endeudamiento estatal, municipal, paraestatal y paramunicipal, se establece la obligación de las entidades de inscribir en dicho registro los financiamientos contraídos por las mismas, que constituyan deuda pública, directa o contingente, conforme a lo establecido en esta propuesta.

Igualmente, se contempla en forma detallada el procedimiento que deberán seguir las entidades para inscribir sus financiamientos, modificar las inscripciones respectivas y solicitar la cancelación de las mismas, y precisa la obligación a cargo de las entidades de informar semestralmente al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila de Zaragoza sobre la situación que guarden sus obligaciones inscritas en el registro y su derecho a obtener las certificaciones respecto de dichas obligaciones.

De gran importancia resulta el hecho de que la inscripción de los financiamientos en el registro se realice únicamente para efectos declarativos y no para efectos constitutivos de garantía, ya que al no ser el Poder Ejecutivo del Estado el encargado de ejecutar las garantías que otorguen las demás entidades, se eliminará la percepción, existente en diversas jurisdicciones, de que el riesgo de los créditos o empréstitos es del Estado y no de las entidades contratantes. Dicha provisión indudablemente fomentará que las instituciones financieras realicen un verdadero análisis de crédito en los casos en los que les sea requerido financiamiento y permitirá que las entidades tengan acceso a formas de financiamiento más eficientes basadas en dichos análisis y en las calificaciones que sobre su calidad crediticia emitan las instituciones calificadoras de valores.

Para finalizar, el **Capítulo Noveno** puntualiza la obligación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila de Zaragoza, para que, en su carácter de responsable del registro, proporcione la información relativa a las inscripciones que consten en el mismo a las instituciones calificadoras de valores contratadas por las entidades para calificar su calidad crediticia o la de los financiamientos que en su caso celebren, cuando éstas así lo soliciten.

Así pues, en ejercicio de las facultades que me confieren los Artículos 59, fracción II y 82, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; 16, apartado A, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; y 181, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Libre, Independiente y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se presenta ante esta Honorable Legislatura para su estudio, resolución y, en su caso, aprobación, la siguiente iniciativa de:

TERCERO.- La globalización entendida como la serie de procesos por los cuales se entrelazan las naciones y los estados soberanos llevándonos con ello a perder los límites de fronteras y del quehacer cotidiano en las distintas dimensiones, entre ellas la económica y financiera que han colocado a nuestro país y a nuestro estado en la necesidad

de actualizar y modernizar nuestro marco jurídico legal a fin de incorporar nuevos instrumentos que con la actividad diaria han aparecido en los distintos mercados financieros internacionales y nacionales.

Nuestra legislatura se ha caracterizado por mantener la funcionalidad de nuestras instituciones y siempre ha procurado realizar las adecuaciones a nuestro marco jurídico en los mejores tiempos y acorde a las necesidades de nuestra sociedad, con la finalidad de seguir contando con una regulación jurídica de avanzada.

En ese tenor, la iniciativa propuesta por el Ejecutivo del Estado para expedir la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, tiene la finalidad de adecuar la normatividad Estatal en materia financiera a la normatividad y terminología que ha impuesto la Federación, principalmente en el rubro de Deuda Pública, con la reforma que implemento a partir de 1996, en la cual se regulan las deudas de los entes estatales, municipales y de las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, en la que se incluyen aspectos referentes a las facultades y competencias de estos organismos, hasta la regulación de los nuevos instrumentos y mecanismos de financiamiento, así como el establecimiento de los requerimientos para su implementación que necesitan ser incorporados en nuestra ley, estableciéndose un sistema seguro, moderno, eficiente y congruente con la legislación federal y estatal en vigor, para la autorización, contratación, administración, refinanciamiento, reestructuración, registro y control de la deuda pública.

De igual manera es necesaria la incorporación a nuestra ley de todos aquellos nuevos instrumentos de financiamiento bursátil, así como de los mecanismos para acceder al financiamiento bancario mediante créditos estructurados, disponibles para las entidades públicas y que al contar con un marco jurídico moderno y actualizado será más eficaz brindando además certeza jurídica a todos los participantes en este mercado, como lo son inversionistas, instituciones bancarias, agencias calificadoras de valores, autoridades financieras entre otras, quienes con su actividad han incluido diversos mecanismos y requisitos que se hace necesario incluirlos en esta ley de deuda pública, a fin de que las entidades públicas puedan tener un acceso más eficiente a estos instrumentos de financiamiento.

Como se señala en la exposición de motivos de la iniciativa que se dictamina, esta propuesta claramente va encaminada a colocar a nuestro estado, dentro de los parámetros internacionales y nacionales para la gestión de la deuda pública que han sido establecidos por el fondo monetario internacional y por el Banco Mundial, en lo aplicable a entidades Subnacionales, entendiendo estas como un término genérico para designar las divisiones territoriales que poseen los Estados soberanos en cualquier nivel, habitualmente, con carácter político-administrativo, esta iniciativa que se plantea cuenta con esa cualidad.

Además en este proyecto se impone la obligación a las entidades públicas el informar periódicamente a los órganos de supervisión y al propio congreso sobre el volumen y la composición de su deuda y establece los las provisiones para hacer públicos los aspectos más relevantes y sustanciales de la gestión de la deuda pública.

En concreto estas comisiones dictaminadoras al analizar la iniciativa de merito, son coincidentes en que la misma brinda total transparencia y certeza jurídica, al determinar de manera precisa, clara y detallada las funciones , facultades, obligaciones y objetivos de las autoridades Estatales en materia de Deuda Pública, por lo que cconsecuentes con las consideraciones que anteceden, resulta pertinente emitir el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO.

ÚNICO.- Por las razones expuestas, se estima prudente que esta Soberanía apruebe la Iniciativa de Decreto para expedir la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Lic. Jorge Juan Torres López Gobernador Constitucional del Estado, para quedar como sigue:

LEY DE DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

Capítulo Primero De las Disposiciones Generales

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto establecer las bases a que deberán sujetarse el Estado de Coahuila de Zaragoza, los Municipios, los organismos públicos descentralizados estatales o municipales, las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria y los fideicomisos públicos estatales o municipales, que formen parte de la administración pública paraestatal o paramunicipal, para contraer obligaciones o celebrar empréstitos o créditos que deriven del crédito público y que en términos de lo previsto por esta ley, constituyan deuda pública, así como regular lo relativo a su presupuestación, administración, garantías, mecanismos de pago, registro y control.

Artículo 2.- La deuda pública se constituye por las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, que resulten de operaciones de crédito público a cargo de las siguientes entidades:

- I.** El Estado;
- II.** Los Municipios;
- III.** Los organismos públicos descentralizados estatales o municipales;
- IV.** Las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria;
- V.** Los fideicomisos públicos estatales o municipales que formen parte de la administración pública paraestatal o paramunicipal, en los que el fideicomitente sea alguna de las entidades señaladas en las fracciones anteriores.

Artículo 3.- Para los efectos de la presente ley se entiende por:

- I.** Entidades: Las señaladas en el **Artículo 2** de esta Ley;
- II.** Entidades de la Administración Pública Paraestatal: Los organismos públicos descentralizados estatales, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos estatales que formen parte de la misma;

- III.** Entidades de la Administración Pública Paramunicipal: Los organismos públicos descentralizados municipales, las empresas de participación municipal mayoritaria y los fideicomisos públicos municipales que formen parte de la misma;
- IV.** Crédito Público: La aptitud jurídica, política, económica y moral de las entidades para, basadas en la confianza de que gozan por su administración, patrimonio e historial crediticio, endeudarse con el objeto de obtener ingresos destinados a realizar inversiones públicas productivas;
- V.** Deuda Pública: Las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, que resulten de operaciones de endeudamiento sobre el crédito público de las entidades;
- VI.** Deuda Pública Directa del Estado: La que contraiga el Estado como responsable directo;
- VII.** Deuda Pública Indirecta del Estado: La que contraigan las entidades de la administración pública paraestatal;
- VIII.** Deuda Contingente del Estado: La que derive de operaciones de endeudamiento en las cuales el Estado funja como garante, avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto de los Municipios, de las entidades de la administración pública paraestatal o paramunicipal;
- IX.** Deuda Pública Estatal o Deuda Pública del Estado: La que contraiga el Estado, por conducto del Poder Ejecutivo, como responsable directo o como garante, avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto de los Municipios, de las entidades de la administración pública paraestatal o paramunicipal;
- X.** Deuda Pública Directa de los Municipios: La que contraigan los Municipios como responsables directos;
- XI.** Deuda Pública Indirecta de los Municipios: La que contraigan las entidades de la administración pública paramunicipal;
- XII.** Deuda Contingente de los Municipios: La que derive de operaciones de endeudamiento en las cuales los Municipios funjan como garantes, avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o sustitutos de las entidades de la administración pública paramunicipal a su cargo;
- XIII.** Deuda Pública Municipal: La que contraigan los Municipios, por conducto de sus ayuntamientos, como responsables directos o como garantes, avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o sustitutos de las entidades de la administración pública paramunicipal a su cargo;
- XIV.** Deuda Pública de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal: La que contraigan las entidades de la administración pública paraestatal como responsables directas;
- XV.** Deuda Pública de las Entidades de la Administración Pública Paramunicipal: La que contraigan las entidades de la administración pública paramunicipal como responsables directas;
- XVI.** Empréstitos: Las operaciones de endeudamiento que resulten del crédito público que celebren el Estado o los Municipios;

- XVII.** Créditos: Las operaciones de endeudamiento que resulten del crédito público que celebren las entidades señaladas en las **fracciones III, IV y V del Artículo 2** de esta Ley;
- XVIII.** Financiamientos: Las operaciones de endeudamiento referidas en las **fracciones XVI y XVII** anteriores, consideradas desde el punto de vista del ingreso que generan a las entidades, mismas que pueden derivar de:
- a)** La contratación de préstamos;
 - b)** La suscripción o emisión de valores, títulos de crédito o de cualquier otro documento pagadero a plazos;
 - c)** La reestructuración y refinanciamiento de empréstitos y créditos;
 - d)** Proyectos contratados al amparo de la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios para el Estado de Coahuila, mismos que no constituirán deuda pública en los casos en que así lo disponga expresamente la ley de la materia;
 - e)** La adquisición de bienes, la contratación de obras y servicios, o cualesquier otro acto jurídico cuyo pago se pacte a plazos;
 - f)** Pasivos contingentes relacionados con los actos mencionados en las fracciones anteriores; y
 - g)** En general, de operaciones financieras, bajo cualquier modalidad, que comprendan obligaciones a plazo, así como obligaciones de exigibilidad contingente, derivadas de actos jurídicos, independientemente de la forma en que se les documente, contraídas a través o a cargo de las entidades;
- XIX.** Valores: Son los bonos, obligaciones, certificados y demás títulos de crédito, nominados o innominados, representativos de la parte alícuota de un bien o de la participación en un crédito colectivo o de cualquier derecho de crédito individual, susceptibles de circular en el mercado de valores, que emitan, en serie o en masa, en términos de la legislación aplicable, las entidades señaladas en el **Artículo 2** de esta Ley.
- XX.** Servicio de la Deuda Pública: Son los importes de dinero que se destinen a la amortización de capital y al pago de intereses, comisiones y demás accesorios legales y contractuales derivados de las operaciones de financiamiento, incluyendo los fondos de reserva y de provisión, los gastos de implementación y mantenimiento y demás costos que correspondan según la forma de financiamiento de que se trate. Asimismo, se consideran parte del servicio de la deuda pública, para efectos de esta Ley, los relativos a las operaciones financieras de cobertura que tiendan a evitar o reducir riesgos económico-financieros a las entidades derivados de créditos o empréstitos constitutivos de deuda pública, celebrados con base en la misma y el pago de comisiones por garantías de terceros;
- XXI.** Inversiones Públicas Productivas: Las destinadas a la ejecución de obras públicas, a la adquisición o manufactura de bienes, a la prestación de servicios públicos, al mejoramiento de las condiciones, estructura o perfil de la deuda pública vigente o de la que se pretenda contraer, incluyendo el refinanciamiento o reestructuración de empréstitos o créditos celebrados con o sin la autorización del Congreso siempre que en su origen hayan sido destinados a Inversiones Públicas Productivas, o a cualquier otra finalidad de interés público o social, cuando en forma directa o indirecta, inmediata o mediata, generen recursos públicos;
- XXII.** Montos y Conceptos de Endeudamiento Autorizado: Son los montos y conceptos derivados de operaciones de

endeudamiento, directo o contingente, autorizados en las partidas respectivas de la Ley de Ingresos del Estado y de las Leyes de Ingresos de los Municipios, según corresponda;

- XXIII.** Operaciones de Refinanciamiento: Son los empréstitos o créditos que se celebren por las entidades, bajo cualquier modalidad, a efecto de mejorar las condiciones de tasa de interés, plazo, perfil de amortización, garantías u otras condiciones originalmente pactadas de uno o varios financiamientos a su cargo, substituyendo o novando, las obligaciones del financiamiento original, por uno o varios nuevos financiamientos con el mismo o con diferente acreedor;
- XXIV.** Operaciones de Reestructuración: Son los empréstitos o créditos que celebren las entidades, a efecto de mejorar las condiciones de tasa de interés, plazo, perfil de amortización, garantías u otras condiciones originalmente pactadas de uno o varios financiamientos a su cargo, con el mismo acreedor, que no impliquen novación;
- XXV.** Congreso o Congreso del Estado: El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza;
- XXVI.** Tesorería General: La Tesorería General del Estado;
- XXVII.** Tesorería Municipal: La Tesorería Municipal del Municipio de que se trate, o su equivalente;
- XXVIII.** Órganos de Gobierno: Los consejos, juntas directivas, comités técnicos o equivalentes, de las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal; y
- XXIX.** Registro o Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado: El Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado de Coahuila de Zaragoza que lleva el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Artículo 4.- Los recursos obtenidos por las entidades mediante operaciones de deuda pública, únicamente podrán ser destinados a inversiones públicas productivas.

La aplicación de los recursos derivados de operaciones de deuda pública, podrá ser realizada en forma directa por la entidad que en cada caso hubiere contraído el endeudamiento de que se trate o previa autorización del Congreso, en forma indirecta, a través de fondos o fideicomisos públicos constituidos al efecto, de los que la entidad que corresponda forme parte en virtud de sus atribuciones u objeto.

Artículo 5.- Queda prohibido a las entidades contraer obligaciones de pasivo, que constituyan deuda pública, para financiar gasto corriente.

Artículo 6.- Las entidades no podrán, en ningún caso, contraer directa o indirectamente obligaciones, créditos o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.

Las obligaciones de pago que contraigan las entidades al amparo de esta Ley, podrán denominarse en la unidad de cuenta, llamada Unidad de Inversión o "UDI", cuyo valor en pesos para cada día publica periódicamente el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación. Dichas obligaciones se considerarán de monto determinado.

Artículo 7.- Los actos realizados en contravención a las disposiciones previstas en la presente Ley, serán nulos de pleno derecho. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurran quienes los lleven a cabo.

El desvío de los recursos a un destino distinto al aprobado por el Congreso y establecido en los actos jurídicos que documenten los financiamientos, será considerado como incumplimiento de los mismos y no acarreará su nulidad.

Artículo 8.- El desvío de los recursos procedentes de financiamientos constitutivos de deuda pública, será responsabilidad de los servidores públicos que incurran en ella, ya sea que ordenen o ejecuten los actos que resulten en el desvío correspondiente. Dicho desvío se sancionará de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado.

Artículo 9.- Las Entidades podrán contratar empréstitos o créditos, sin la previa autorización del Congreso, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

- I. El plazo de pago del capital no exceda de trescientos sesenta días naturales;
- II. No se afecten en garantía, ni como fuente de pago, ingresos derivados de la coordinación fiscal; y
- III. Se informe al Congreso al rendir la cuenta pública correspondiente.

Los financiamientos a que se refiere este Artículo no estarán sujetos a lo previsto por el **Capítulo Tercero** de esta Ley.

En cuanto a su autorización, dichos financiamientos se registrarán exclusivamente por lo previsto en este Artículo.

Las entidades de la administración pública paraestatal sólo podrán contratar los créditos que se señalan en este Artículo si cuentan con la autorización previa de sus órganos de gobierno y de la Tesorería General. Por su parte, las entidades de la administración pública paramunicipal únicamente podrán contratar los créditos que se señalan en este Artículo si cuentan con la autorización previa de sus órganos de gobierno y del ayuntamiento correspondiente.

Los empréstitos o créditos contratados por las entidades en términos de lo previsto por este Artículo podrán ser refinanciados sin la autorización del Congreso del Estado cuando los financiamientos que los sustituyan cumplan con los requisitos previstos en las **fracciones I y II** del mismo. En caso contrario, su refinanciamiento deberá ser previamente autorizado por el Congreso estando sujeto a lo previsto por esta Ley para los financiamientos no regulados por este Artículo.

Artículo 10.- El Ejecutivo Estatal a través del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila de Zaragoza, es el encargado de interpretar esta ley para efectos administrativos y de expedir las disposiciones necesarias para su debida observancia. En el ámbito municipal, corresponderá al ayuntamiento esta última atribución.

Los titulares de las entidades a que se refiere el **Artículo 2** de esta Ley, serán responsables del estricto cumplimiento de la misma, así como de las disposiciones que con base en ésta se emitan. Las infracciones a la presente Ley y a sus disposiciones administrativas se sancionarán en los términos que legalmente correspondan y de conformidad con el régimen de responsabilidades de los servidores públicos.

Capítulo Segundo **De las Facultades y Obligaciones de los** **Órganos en Materia de Deuda Pública**

Artículo 11.- Son órganos competentes en materia de deuda pública dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones:

- I. El Congreso del Estado;
- II. El Poder Ejecutivo del Estado;
- III. La Tesorería General;
- IV. El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila de Zaragoza;
- V. Los Ayuntamientos; y
- VI. Los órganos de gobierno de las entidades a que aluden las **fracciones III, IV y V del Artículo 2** de esta Ley.

Artículo 12.- Al Congreso del Estado le corresponde:

- I. Analizar y en su caso, autorizar anualmente en la Ley de Ingresos del Estado y en las Leyes de Ingresos Municipales, los montos y conceptos de endeudamiento, directo y contingente, que sean necesarios para el financiamiento de las entidades durante el ejercicio fiscal correspondiente, en términos de lo dispuesto por el Artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
- II. Analizar y en su caso, autorizar, previa solicitud debidamente justificada del Poder Ejecutivo del Estado, de los ayuntamientos o de las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, el ejercicio de montos y conceptos de endeudamiento no previstos o adicionales a los autorizados en la Ley de Ingresos del Estado y en las Leyes de Ingresos Municipales, que sean necesarios para su financiamiento, cuando a juicio del propio Congreso se presenten circunstancias extraordinarias que así lo requieran;
- III. Autorizar a las entidades para contratar créditos o empréstitos con base en su crédito público;
- IV. Autorizar a las entidades la emisión y colocación de valores, en los términos de esta Ley;
- V. Autorizar a las entidades, el refinanciamiento y la reestructuración de deuda pública en los términos previstos en la presente Ley;
- VI. Reconocer, aprobar y ordenar el pago de la deuda pública del Estado;
- VII. Solicitar a las entidades la documentación e información complementaria que requiera para el análisis de las solicitudes de autorización de endeudamiento;
- VIII. Autorizar al Poder Ejecutivo para que, en representación del Estado, se constituya en garante, avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto de las entidades señaladas en las **fracciones II, III, IV y V del Artículo 2** de esta Ley;
- IX. Autorizar a los ayuntamientos para que, en representación de los Municipios, se constituyan en garantes, avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o sustitutos, de las entidades de la administración pública paramunicipal;

- X.** Autorizar al Estado y a los Municipios a afectar como fuente o garantía de pago, o ambas, de los financiamientos que celebren directamente, así como de aquellos en los que funjan como garantes, avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o sustitutos, los bienes del dominio privado de su propiedad o sus derechos al cobro e ingresos derivados de contribuciones, cobranza de cuotas, cooperaciones, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones federales, o cualesquier otros ingresos de los que puedan disponer de conformidad con la legislación aplicable;
- XI.** Autorizar al Estado y a los Municipios a afectar como fuente o garantía de pago, o ambas, de financiamientos que celebren directamente, las aportaciones federales que en términos de la legislación federal sean susceptibles de afectación;
- XII.** Autorizar a las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal a afectar como fuente o garantía de pago, o ambas, de los financiamientos que celebren, los bienes de su propiedad o sus derechos al cobro e ingresos derivados de la cobranza de cuotas, derechos, productos o cualesquier otros ingresos de los que puedan disponer de conformidad con la legislación aplicable;
- XIII.** Autorizar la celebración de los mecanismos legales que, bajo cualquier modalidad o forma, se propongan implementar las entidades, a efecto de garantizar o realizar el pago de financiamientos;
- XIV.** Autorizar, en los casos en que así se requiera, de acuerdo con lo previsto en esta Ley, la celebración de operaciones financieras de cobertura que tiendan a evitar o reducir riesgos económico-financieros, derivados de créditos o empréstitos obtenidos por las entidades con base en esta Ley;
- XV.** Vigilar que los recursos obtenidos de las operaciones a que se refiere esta Ley sean destinados a las inversiones públicas productivas autorizadas;
- XVI.** Vigilar que se incluyan anualmente, dentro de la iniciativa de Presupuesto de Egresos del Estado y autorizar, la o las partidas presupuestales necesarias y suficientes para cubrir el pago del servicio de la deuda pública directa del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate;
- XVII.** Solicitar de las entidades los informes necesarios, para verificar que las operaciones de endeudamiento sean realizadas conforme a las disposiciones legales aplicables y a las autorizaciones respectivas, formulando, en su caso, las observaciones que de ello se deriven, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar;
- XVIII.** Autorizar al Estado, los Municipios y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal para contratar, bajo cualquier forma legal, el otorgamiento de garantías de terceros, totales o parciales, a efecto de mejorar la calidad crediticia de los financiamientos que celebren de manera directa; y
- XIX.** Las demás que, en materia de deuda pública, le confieran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, esta Ley u otras disposiciones legales.

Artículo 13.- Al Poder Ejecutivo del Estado le compete:

- I.** Proponer al Congreso, al presentar anualmente la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado, los montos y conceptos de endeudamiento, directo y contingente, que, en su caso, sean necesarios para el financiamiento del Estado y de las entidades de la administración pública paraestatal en el ejercicio fiscal correspondiente, en términos de lo dispuesto por el Artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

- II. Solicitar al Congreso la modificación de la Ley de Ingresos del Estado, para incluir montos y conceptos de endeudamiento no previstos o adicionales a los autorizados, que sean necesarios para el financiamiento del Estado y en su caso, de las entidades de la administración pública paraestatal a su cargo cuando considere que existen circunstancias extraordinarias que así lo justifiquen;
- III. Presentar y gestionar ante el Congreso las solicitudes de autorización de endeudamiento en términos de lo previsto por esta Ley;
- IV. Contratar, en los términos autorizados por el Congreso, empréstitos en representación del Estado;
- V. Negociar, aprobar, celebrar y suscribir, en el ámbito de su competencia, los actos jurídicos, títulos de crédito y demás instrumentos legales necesarios, directa o indirectamente, para la obtención, manejo, operación y gestión de los financiamientos a cargo del Estado, autorizados conforme a lo previsto en esta Ley;
- VI. Emitir, previa autorización del Congreso, valores en representación del Estado y colocarlos entre el gran público inversionista, en los términos de esta Ley y de la legislación aplicable;
- VII. Celebrar, previa autorización, en su caso, del Congreso, operaciones de refinanciamiento y reestructuración de la deuda pública a cargo del Estado;
- VIII. Constituir al Estado, previa autorización del Congreso y sujeto a lo establecido en esta Ley, en garante, avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto de las entidades señaladas en el **Artículo 2, fracciones II, III, IV y V** de esta Ley;
- IX. Afectar, previa autorización del Congreso, como fuente o garantía de pago, o ambas, de los financiamientos que contrate directamente el Estado o de aquellos en los que funja como garante, avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto, los bienes del dominio privado de su propiedad o sus derechos al cobro e ingresos derivados de contribuciones, cobranza de cuotas, cooperaciones, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones federales o cualesquier otros ingresos de los que pueda disponer de conformidad con la legislación aplicable y realizar en su caso, los pagos que correspondan mediante dichas garantías o fuentes de pago;
- X. Afectar, previa autorización del Congreso, como fuente o garantía de pago, o ambas, de financiamientos que celebre directamente el Estado, las aportaciones federales que en términos de la legislación federal sean susceptibles de afectación;
- XI. Negociar los términos y condiciones, así como celebrar los actos jurídicos que formalicen los mecanismos legales de garantía o pago de los financiamientos que celebre directamente el Estado o de aquellos en los que funja como garante, avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto;
- XII. Realizar, en su caso, a través de los mecanismos legales a que se refiere la **fracción XI** anterior, el pago de obligaciones y empréstitos contraídos por el Estado;
- XIII. Realizar, previa instrucción de los ayuntamientos, pagos por cuenta y orden de los Municipios, con cargo a las participaciones u otros ingresos federales que les correspondan;

- XIV.** Solicitar a las entidades la documentación e información complementaria que requiera, para el análisis de las solicitudes de autorización de endeudamiento, cuando se solicite al Estado fungir como garante, avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto;
- XV.** Celebrar, de acuerdo a lo previsto en esta Ley, operaciones financieras de cobertura que tiendan a evitar o reducir riesgos económico-financieros derivados de créditos o empréstitos obtenidos por el Estado con base en esta Ley;
- XVI.** Destinar los recursos obtenidos con motivo de las operaciones a que se refiere esta Ley, de acuerdo con lo autorizado por el Congreso;
- XVII.** Incluir anualmente dentro de la iniciativa de Presupuesto de Egresos del Estado, la o las partidas presupuestales necesarias y suficientes para cubrir, en su totalidad, el pago del servicio de la deuda pública a cargo del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate;
- XVIII.** Vigilar que se incluyan anualmente dentro de los presupuestos de egresos de las entidades de la administración pública paraestatal, la o las partidas presupuestales necesarias y suficientes para cubrir, en su totalidad, el pago del servicio de la deuda pública a cargo de las mismas correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate;
- XIX.** Realizar oportunamente los pagos del servicio de la deuda pública directa del Estado y vigilar que se hagan oportunamente los pagos del servicio de la deuda pública contingente e indirecta del Estado;
- XX.** Aprobar, previamente a la autorización por el Congreso, los montos y conceptos de endeudamiento, directo y contingente, que sean necesarios para el financiamiento de las entidades de la administración pública paraestatal, cuya inclusión en la Ley de Ingresos del Estado soliciten dichas entidades y, en su oportunidad, la celebración de las operaciones de endeudamiento que se propongan contraer dichas entidades;
- XXI.** Informar trimestralmente al Congreso, sobre el ejercicio de las partidas correspondientes a los montos y conceptos de endeudamiento autorizado y con relación a la situación de la deuda pública estatal, al rendir la cuenta pública;
- XXII.** Proporcionar al Congreso, por conducto de la Auditoría Superior del Estado, la información que éste le requiera de acuerdo con la Ley, en relación con las operaciones de deuda pública que celebre;
- XXIII.** Contratar a instituciones calificadoras de valores debidamente autorizadas en México, a efecto de que emitan la calificación sobre la calidad crediticia del Estado y las calificaciones sobre la calidad crediticia de los financiamientos bancarios, bursátiles o de cualquier otra naturaleza, que en su caso, se proponga implementar el Estado y para que realicen la revisión periódica de las calificaciones respectivas;
- XXIV.** Solicitar la inscripción de los financiamientos que contrate, cuando los mismos se contraigan con afectación de sus participaciones o aportaciones federales, en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, que al efecto lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e informar a dicha dependencia, sobre la situación que guarden sus obligaciones inscritas en el citado registro, de acuerdo a lo previsto en la normatividad aplicable;
- XXV.** Llevar el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado, de acuerdo a lo previsto en esta Ley;

- XXVI.** Inscribir los financiamientos que celebre en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado, así como mantener actualizada la información sobre la situación que guarden sus obligaciones inscritas y cancelar en su oportunidad, las inscripciones correspondientes;
- XXVII.** Expedir a través del Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado, las certificaciones que correspondan, con relación a las obligaciones que se encuentren inscritas en dicho registro;
- XXVIII.** Publicar, anualmente en un diario de circulación local y en un diario de circulación nacional, la información fiscal y financiera que el Estado considere relevante, incluyendo el saldo actualizado de la deuda pública estatal. Lo anterior, sin perjuicio de que el Poder Ejecutivo Estado pueda, adicionalmente, realizar las publicaciones respectivas en la página de internet del Estado;
- XXIX.** Asesorar a las entidades señaladas en las **fracciones II, III, IV y V del Artículo 2** de esta Ley, en la formulación de sus proyectos financieros y en todo lo relativo a las operaciones que pretendan realizar en materia de deuda pública;
- XXX.** Contratar en representación del Estado el otorgamiento de garantías de terceros, totales o parciales, a efecto de mejorar la calidad crediticia de los financiamientos que de manera directa celebre el Estado; y
- XXXI.** Las demás que, en materia de deuda pública, le confieran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, esta Ley u otras disposiciones legales.

Artículo 14.- Los derechos y obligaciones a que se refieren las **fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX y XXX del Artículo 13** de esta Ley, podrán ser ejercidos y cumplidas por el Poder Ejecutivo del Estado por conducto del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila. Asimismo, los derechos y obligaciones a que se refieren las **fracciones X, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX** de dicho Artículo, podrán ser ejercidos y cumplidas por el Poder Ejecutivo del Estado por conducto del Tesorería General.

Artículo 15.- Los Ayuntamientos tendrán las facultades y obligaciones siguientes:

- I.** Proponer al Congreso, al presentar anualmente la iniciativa de Ley de Ingresos Municipal, los montos y conceptos de endeudamiento, directo y contingente, que, en su caso, sean necesarios para el financiamiento del Municipio respectivo y de las entidades de la administración pública paramunicipal a su cargo, en el ejercicio fiscal correspondiente, en términos de lo dispuesto por el Artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
- II.** Solicitar al Congreso la modificación de las Leyes de Ingresos Municipales, para incluir montos y conceptos de endeudamiento no previstos o adicionales a los autorizados, que sean necesarios para el financiamiento de los Municipios y en su caso, de las entidades de la administración pública paramunicipal a su cargo, cuando se considere que existen circunstancias extraordinarias que así lo justifiquen;
- III.** Presentar y gestionar ante el Congreso las solicitudes de autorización de endeudamiento en términos de lo previsto por esta Ley;
- IV.** Contratar, previa autorización del Congreso del Estado, empréstitos en representación de los Municipios;

- V. Negociar, aprobar, celebrar y suscribir, en el ámbito de su competencia, los actos jurídicos, títulos de crédito y demás instrumentos legales necesarios, directa o indirectamente, para la obtención, manejo, operación y gestión de los financiamientos a cargo de los Municipios, autorizados conforme a lo previsto en esta Ley;
- VI. Emitir, previa autorización del Congreso, valores en representación de los Municipios y colocarlos entre el gran público inversionista, en los términos de esta Ley y de la legislación aplicable;
- VII. Celebrar, previa autorización, en su caso, del Congreso del Estado, operaciones de refinanciamiento y reestructuración de la deuda pública a cargo de los Municipios;
- VIII. Constituir a los Municipios, previa autorización del Congreso y sujeto a lo establecido en esta Ley, en garantes, avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o sustitutos de las entidades de la administración pública paramunicipal;
- IX. Solicitar, en su caso, al Estado que se constituya en garante, avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto de los Municipios con relación a financiamientos que se propongan celebrar de acuerdo a lo establecido en esta Ley;
- X. Afectar, previa autorización del Congreso, como fuente o garantía de pago, o ambas, de los financiamientos que celebren directamente los Municipios o de aquellos en los que funjan como garantes, avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o sustitutos, los bienes del dominio privado de su propiedad o sus derechos al cobro e ingresos derivados de contribuciones, cobranza de cuotas, cooperaciones, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones federales o cualesquier otros ingresos de los que puedan disponer de conformidad con la legislación aplicable y realizar, en su caso, los pagos que correspondan mediante dichas garantías o fuentes de pago;
- XI. Afectar, previa autorización del Congreso, como fuente o garantía de pago, o ambas, de financiamientos que celebre directamente el Municipio, las aportaciones federales que en términos de la legislación federal sean susceptibles de afectación;
- XII. Negociar, previa autorización del Congreso, los términos y condiciones y celebrar los actos jurídicos que formalicen los mecanismos legales de garantía o pago de los financiamientos que celebren directamente los Municipios o de aquellos en los que funjan como garantes, avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o sustitutos;
- XIII. Realizar, en su caso, a través de los mecanismos legales a que se refiere la **fracción XII** anterior, el pago de obligaciones y empréstitos contraídos por los Municipios;
- XIV. Instruir al Poder Ejecutivo del Estado para que realice pagos por cuenta y orden de los Municipios con cargo a las participaciones u otros ingresos federales que les correspondan;
- XV. Solicitar a las entidades de la administración pública paramunicipal la documentación e información complementaria que requiera para el análisis de las solicitudes de autorización de endeudamiento cuando se les solicite fungir como garantes, avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o sustitutos;
- XVI. Celebrar, de acuerdo con lo previsto en esta Ley, operaciones financieras de cobertura que tiendan a evitar o reducir riesgos económico-financieros derivados de créditos o empréstitos obtenidos por los Municipios con base en esta Ley;

- XVII.** Destinar los recursos obtenidos con motivo de las operaciones a que se refiere esta Ley, de acuerdo con lo autorizado por el Congreso;
- XVIII.** Incluir anualmente en los presupuestos de egresos municipales, la o las partidas presupuestales necesarias y suficientes para cubrir, en su totalidad, el pago del servicio de la deuda pública a cargo de los Municipios, correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate;
- XIX.** Vigilar que se incluyan anualmente dentro de los presupuestos de egresos de las entidades de la administración pública paramunicipal, la o las partidas presupuestales necesarias y suficientes para cubrir, en su totalidad, el pago del servicio de la deuda pública a cargo de las mismas, correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate;
- XX.** Realizar oportunamente los pagos del servicio de la deuda pública directa del Municipio y vigilar que se hagan oportunamente los pagos de la deuda pública contingente e indirecta del Municipio;
- XXI.** Aprobar, previamente a su autorización por el Congreso, los montos y conceptos de endeudamiento, directo y contingente, que sean necesarios para el financiamiento de las entidades de la administración pública paramunicipal, cuya inclusión en la Ley de Ingresos del Municipio soliciten dichas entidades y en su oportunidad, la celebración de las operaciones de endeudamiento que se propongan contraer dichas entidades;
- XXII.** Informar al Congreso sobre el ejercicio de las partidas correspondientes a los montos y conceptos de endeudamiento autorizado y con relación a la situación de su deuda pública, al rendir la cuenta pública municipal;
- XXIII.** Proporcionar al Congreso, por conducto de la Auditoría Superior del Estado y al Poder Ejecutivo por conducto del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila de Zaragoza, cuando el Estado funja como garante, avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto, la información que éstos le requieran en relación con las operaciones de deuda pública que celebren;
- XXIV.** Contratar, en caso de que a juicio del ayuntamiento, así convenga a los intereses del Municipio de que se trate, a instituciones calificadoras de valores debidamente autorizadas en México, a efecto de que emitan la calificación sobre la calidad crediticia del Municipio y las calificaciones sobre la calidad crediticia de los financiamientos bancarios, bursátiles o de cualquier otra naturaleza que, en su caso, se proponga implementar el Municipio y para que realicen la revisión periódica de las calificaciones respectivas;
- XXV.** Solicitar la inscripción de los financiamientos que celebren, cuando los mismos se contraigan con afectación de sus participaciones o aportaciones federales, en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que al efecto lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e informar a dicha dependencia sobre la situación que guarden sus obligaciones inscritas en el citado registro, de acuerdo a lo previsto en la normatividad aplicable;
- XXVI.** Inscribir los financiamientos que celebren en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado; informar a dicha dependencia sobre la situación que guarden sus obligaciones inscritas en el registro de acuerdo a lo previsto en esta Ley y notificar, en su caso, el pago de las obligaciones inscritas para efectos de la cancelación de las inscripciones correspondientes;
- XXVII.** Solicitar al Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado, la expedición de las certificaciones correspondientes con relación a las obligaciones a cargo de los Municipios que se encuentren inscritas en dicho registro;

- XXVIII.** Llevar un Registro Municipal de Obligaciones y Empréstitos e inscribir en el mismo las operaciones de endeudamiento correspondientes a la deuda pública municipal, mantener actualizada la información sobre la situación que guarden las obligaciones inscritas y cancelar en su oportunidad, las inscripciones correspondientes;
- XXIX.** Publicar anualmente en un diario de circulación local y en un diario de circulación nacional, la información fiscal y financiera que el Municipio considere relevante, incluyendo el saldo actualizado de la deuda pública municipal. Lo anterior, sin perjuicio de que los Ayuntamientos puedan, adicionalmente, realizar las publicaciones respectivas en su página de internet;
- XXX.** Contratar en representación de los Municipios, bajo cualquier forma legal, previa autorización del Congreso emitida mediante Ley o Decreto, el otorgamiento de garantías de terceros, totales o parciales, a efecto de mejorar la calidad crediticia de los financiamientos que de manera directa obtengan; y
- XXXI.** Las demás que, en materia de deuda pública, les confieran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, esta Ley u otras disposiciones legales.

Artículo 16.- Los actos de los ayuntamientos a que se refieren **las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XVI, XXI, XXIV y XXX del Artículo 15** de esta Ley deberán ser autorizados, previamente a su sometimiento para la aprobación del Congreso, mediante el acuerdo de la mayoría de sus miembros.

En el caso de que los actos de los ayuntamientos a que se refieren **las fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XVI, XXI, XXIV y XXX del Artículo 15** de esta ley impliquen obligaciones por virtud de las cuales se afecte el patrimonio inmobiliario municipal o comprometan al Municipio por un plazo mayor al período para el que fue electo el ayuntamiento, dichos actos deberán ser autorizados, previamente a su sometimiento para la aprobación del Congreso, mediante el acuerdo de las dos terceras partes de sus miembros.

Artículo 17.- Los derechos y obligaciones a que se refieren **las fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX y XXX del Artículo 15** de esta Ley, podrán ser ejercidos por conducto del Presidente Municipal del Municipio que corresponda.

Artículo 18.- Los órganos de gobierno de las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal tendrán las siguientes facultades y obligaciones:

- I.** Incluir anualmente en sus proyectos de presupuesto de ingresos, para efectos de su propuesta e inclusión en las iniciativas de Ley de Ingresos del Estado o en las iniciativas de Leyes de Ingresos de los Municipios, según corresponda, los montos y conceptos de endeudamiento, que sean necesarios para su financiamiento en el ejercicio fiscal correspondiente, en términos de lo dispuesto por el Artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
- II.** Solicitar a la Tesorería General, en el caso de las entidades de la administración pública paraestatal, o al ayuntamiento del municipio al que pertenezcan, en el caso de las entidades de la administración pública paramunicipal, la autorización e inclusión en la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado o en las iniciativas de Leyes de Ingresos Municipales, de los montos y conceptos de endeudamiento considerados en sus respectivos presupuestos de ingresos en términos de la **fracción I** anterior;

- III. Solicitar, en su caso, a través del Poder Ejecutivo del Estado y de los Ayuntamientos, según corresponda, autorización al Congreso para ejercer montos y conceptos de endeudamiento no previstos o adicionales a los autorizados en la Ley de Ingresos del Estado o en las Leyes de Ingresos de los Municipios, según corresponda, que sean necesarios para el financiamiento de las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, cuando se considere que existen circunstancias extraordinarias que así lo justifiquen;
- IV. Presentar y gestionar ante el Congreso, a través del Poder Ejecutivo del Estado y de los Ayuntamientos, según corresponda, las solicitudes de autorización de endeudamiento en términos de lo previsto por esta Ley;
- V. Contratar créditos, en representación de las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, según corresponda, previa autorización del Congreso;
- VI. Negociar, aprobar, celebrar y suscribir en el ámbito de su competencia, los actos jurídicos, títulos de crédito y demás instrumentos legales necesarios, directa o indirectamente, para la obtención, manejo, operación y gestión de los financiamientos a cargo de las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, autorizados conforme a lo previsto en esta Ley;
- VII. Emitir, previa autorización del Congreso, valores en representación de las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal y colocarlos entre el gran público inversionista, en los términos de esta Ley;
- VIII. Celebrar, previa autorización, en su caso, del Congreso, operaciones de refinanciamiento y reestructuración de la deuda pública a cargo de las entidades de la administración pública paraestatal o paramunicipal, según corresponda;
- IX. Afectar, previa autorización del Congreso, como fuente o garantía de pago, o ambas, de los financiamientos que celebren las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los bienes de su propiedad o sus derechos al cobro e ingresos derivados de la cobranza de cuotas, derechos, productos o cualesquier otros ingresos de los que puedan disponer de conformidad con la legislación aplicable;
- X. Solicitar, en su caso, al Estado o a los Municipios, según corresponda, que se constituyan en sus garantes, avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o sustitutos con relación a financiamientos que se propongan celebrar las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal de acuerdo a lo establecido en esta Ley;
- XI. Celebrar, de acuerdo a lo previsto en esta Ley, operaciones financieras de cobertura que tiendan a evitar o reducir riesgos económico-financieros derivados de créditos o empréstitos obtenidos por las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal con base en esta Ley;
- XII. Destinar los recursos obtenidos con motivo de las operaciones a que se refiere esta Ley de acuerdo con lo autorizado por el Congreso;
- XIII. Incluir anualmente dentro de los presupuestos de egresos de las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, la o las partidas presupuestales necesarias y suficientes para cubrir en su totalidad, el pago del servicio de la deuda pública a su cargo correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate;
- XIV. Realizar oportunamente los pagos del servicio de la deuda pública a cargo de las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal;

- XV.** Proporcionar al Congreso, por conducto de la Auditoría Superior del Estado; al Poder Ejecutivo, por conducto de la Tesorería General; y a los ayuntamientos, por conducto de la Tesorería Municipal, según corresponda, la información que éstos les requieran en relación con las operaciones de deuda pública que celebren las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal;
- XVI.** Contratar, en caso de que a su juicio así convenga a los intereses de la entidad de que se trate, a instituciones calificadoras de valores debidamente autorizadas en México, a efecto de que emitan la calificación sobre la calidad crediticia de las entidades y la calificación sobre la calidad crediticia de los financiamientos bancarios, bursátiles o de cualquier otra naturaleza que en su caso, se propongan implementar las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal y para que realicen la revisión periódica de las calificaciones respectivas;
- XVII.** Solicitar la inscripción de los financiamientos que celebren las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, cuando como fuente o garantía de pago de los mismos se hubieren afectado participaciones federales, en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que al efecto lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e informar a dicha dependencia sobre la situación que guarden sus obligaciones inscritas en el citado registro, de acuerdo a lo previsto en la normatividad aplicable;
- XVIII.** Inscribir los financiamientos que celebren las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado, informar a dicha dependencia sobre la situación que guarden sus obligaciones inscritas en el registro de acuerdo a lo previsto en esta Ley y notificar en su caso, el pago de las obligaciones inscritas para efectos de la cancelación de la inscripción correspondiente;
- XIX.** Solicitar al Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado, la expedición de las certificaciones correspondientes con relación a las obligaciones a cargo de las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, que se encuentren inscritas en dicho registro;
- XX.** Llevar un Registro de Obligaciones y Empréstitos de la entidad correspondiente e inscribir en el mismo las operaciones de endeudamiento correspondientes a la deuda pública a su cargo;
- XXI.** Publicar anualmente en un diario de circulación local y en un diario de circulación nacional, la información fiscal y financiera de la entidad de la administración pública paraestatal y paramunicipal respectiva, que dichos órganos de gobierno consideren relevante, incluyendo el saldo actualizado de la deuda pública paraestatal o paramunicipal, según corresponda. Lo anterior, sin perjuicio de que los órganos de gobierno de las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal puedan, adicionalmente, realizar las publicaciones respectivas en sus páginas de internet;
- XXII.** Contratar en representación de las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, bajo cualquier forma legal, previa autorización del Congreso emitida mediante Ley o Decreto, el otorgamiento de garantías de terceros, totales o parciales, a efecto de mejorar la calidad crediticia de los financiamientos que de manera directa celebren dichas entidades; y
- XXIII.** Las demás que, en materia de deuda pública, se les confieran en esta Ley o en otras disposiciones legales.

Artículo 19.- Los actos de los órganos de gobierno de las entidades de la administración pública paraestatal a que se refiere el **Artículo 18, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVII y XXII** deberán ser autorizados, mediante el acuerdo de la mayoría de sus miembros y por la Tesorería General, previamente a su sometimiento para la aprobación del Congreso.

Artículo 20.- Los actos de los órganos de gobierno de las entidades de la administración pública paramunicipal a que se refiere el **Artículo 18, fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVII y XXII** deberán ser autorizados, mediante el acuerdo de la mayoría de sus miembros y por el ayuntamiento correspondiente, previamente a su sometimiento para la aprobación del Congreso.

En el caso de que los actos de los órganos de gobierno de las entidades de la administración pública paramunicipal a que se refiere el **Artículo 18, fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVII y XXII** impliquen obligaciones por virtud de las cuales se afecte el patrimonio inmobiliario paramunicipal o comprometan a la entidad de la administración pública paramunicipal por un plazo mayor al período para el que fue electo el ayuntamiento del Municipio al que pertenezcan, dichos actos deberán ser autorizados, previamente a su sometimiento para la aprobación del Congreso, mediante el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del ayuntamiento correspondiente.

Artículo 21.- Las facultades y obligaciones establecidas en el **Artículo 18**, en favor o a cargo, de los órganos de gobierno de las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, serán ejercidas directamente por dichos órganos de gobierno o por sus respectivos titulares de acuerdo a lo que establezcan sus respectivos decretos constitutivos, estatutos, fideicomisos o cualesquier otra normatividad que los rijan en cuanto a su estructura y facultades.

Capítulo Tercero **De la Presupuestación de la Deuda Pública**

Artículo 22.- Los montos y conceptos de endeudamiento, directo y contingente que en su caso, sean necesarios para el financiamiento del Estado, los Municipios y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, deberán ser incluidos anualmente por el Poder Ejecutivo del Estado y por los ayuntamientos, en la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado y en las iniciativas de Leyes de Ingresos de los Municipios, según corresponda.

Los montos y conceptos de endeudamiento necesarios para el financiamiento de las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, deberán ser autorizados anualmente en sus proyectos de presupuestos de ingresos para efectos de su propuesta e inclusión en la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado o en las iniciativas de Leyes de Ingresos de los Municipios, según corresponda.

Artículo 23.- Los montos y conceptos de endeudamiento que sean necesarios para el financiamiento de las entidades a que hace referencia el Artículo anterior, serán autorizados por el Congreso, anualmente, en la Ley de Ingresos del Estado y en las Leyes de Ingresos de los Municipios, en su caso.

Artículo 24.- La autorización de montos y conceptos de endeudamiento en las partidas correspondientes de la Ley de Ingresos del Estado y en las Leyes de Ingresos de los Municipios, no autoriza por sí misma al Poder Ejecutivo del Estado, a los ayuntamientos, ni a las entidades de la administración pública paraestatal o paramunicipal, para la contratación de los créditos o empréstitos cuyos montos y conceptos se encuentren amparados bajo tales partidas, sino que, para que éstos puedan obtener dichos financiamientos deberán presentar y gestionar ante el Congreso, las solicitudes de autorización de endeudamiento correspondientes de acuerdo con lo previsto en el Capítulo Cuarto de esta Ley.

En los casos en que junto con las Iniciativas de Ley de Ingresos del Estado o de Leyes de Ingresos de los Municipios, se presenten las solicitudes de autorización de endeudamiento correspondientes en términos del **Artículo 36** de este ordenamiento, el Congreso podrá autorizar en la misma Ley la contratación de los financiamientos respectivos.

Artículo 25.- Los montos relativos a los empréstitos y créditos que se propongan celebrar las entidades, deberán encontrarse considerados en las partidas correspondientes a los montos y conceptos de endeudamiento autorizado, incluidas en la Ley de

Ingresos del Estado, en las Leyes de Ingresos de los Municipios y en los presupuestos de ingresos de las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, según corresponda, de acuerdo con lo previsto por esta Ley.

Artículo 26.- El Congreso podrá, previa solicitud debidamente justificada de las entidades, autorizar el ejercicio de montos y conceptos de endeudamiento no previstos o adicionales a los autorizados en la Ley de Ingresos del Estado o en las Leyes de Ingresos de los Municipios, cuando a juicio del Congreso se presenten circunstancias extraordinarias que así lo requieran.

Artículo 27.- En los casos en que el Congreso del Estado autorice la contratación de créditos o empréstitos que impliquen el ejercicio de montos y conceptos de endeudamiento no previstos o adicionales a los autorizados en la Ley de Ingresos del Estado o en las Leyes de Ingresos Municipales, dichos ordenamientos deberán reformarse o adicionarse a fin de incluir los nuevos montos y conceptos de endeudamiento. En todo caso las reformas o adiciones antes señaladas deberán realizarse previamente a que las entidades contraigan los empréstitos o créditos de que se trate.

En adición a lo anterior, previamente a la contratación de los empréstitos respectivos, el Estado y los Municipios, por conducto del Poder Ejecutivo del Estado o de los ayuntamientos, según proceda, deberán realizar los ajustes correspondientes en sus presupuestos de egresos. Asimismo, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, antes de contraer los créditos respectivos, deberán realizar los ajustes pertinentes a sus presupuestos de ingresos y de egresos, notificando de ello a la Tesorería General y a los ayuntamientos, según corresponda.

Artículo 28.- Los financiamientos cuya autorización soliciten las entidades, deberán ser en todo caso, acordes con la capacidad de pago de las mismas.

En los casos en que la magnitud de los proyectos de inversión pública productiva lo ameriten, el Congreso podrá autorizar la implementación de programas de financiamiento, que impliquen la obtención de créditos o empréstitos en uno o en varios ejercicios presupuestales. En tal caso, los ingresos y erogaciones que deriven de los financiamientos que se celebren durante ejercicios fiscales posteriores al del programa de financiamiento que contenga su autorización, deberán ser incluidos en las leyes de ingresos y en los presupuestos de egresos relativos a dichos ejercicios, según corresponda.

Artículo 29.- El Poder Ejecutivo del Estado deberá incluir anualmente dentro de la iniciativa de Presupuesto de Egresos del Estado, la o las partidas presupuestales necesarias y suficientes para cubrir el pago de obligaciones a cargo del Estado y de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, derivadas de empréstitos, celebrados o por celebrarse, durante la vigencia de los mismos, lo cual deberá ser verificado por el Congreso, en el entendido de que, en términos de lo previsto por el **Artículo 67 fracción XXXIII** de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, en caso de no incluirse la o las partidas correspondientes, el Congreso deberá incluirlas y autorizarlas.

Los titulares de las entidades de la administración pública paraestatal deberán incluir, dentro de sus proyectos de presupuesto de egresos, la o las partidas presupuestales necesarias y suficientes para cubrir en su totalidad, el pago del servicio de la deuda pública a cargo de dichas entidades, correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, lo cual será vigilado por los órganos de gobierno correspondientes y por la Tesorería General, respectivamente.

Artículo 30.- Los Presidentes Municipales deberán incluir anualmente dentro de las iniciativas de presupuestos de egresos municipales, la o las partidas presupuestales necesarias y suficientes para cubrir el pago de obligaciones a cargo del Municipio y de las Entidades de la Administración Pública Paramunicipal, derivadas de empréstitos, celebrados o por celebrarse, durante la vigencia de los mismos, lo cual deberá ser verificado por los Ayuntamientos, en el entendido de que, en términos de lo previsto por el **Artículo 158-P fracción IV** de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, en caso de no incluirse, el Ayuntamiento respectivo deberá incluirlas y autorizarlas.

Los titulares de las entidades de la administración pública paramunicipal deberán incluir, dentro de sus proyectos de presupuesto de egresos, la o las partidas presupuestales necesarias y suficientes para cubrir en su totalidad, el pago del servicio de la deuda

pública a cargo de dichas entidades, correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, lo cual será vigilado por los órganos de gobierno correspondientes, la Tesorería Municipal y por los ayuntamientos, respectivamente.

Artículo 31.- El Poder Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, deberán informar al Congreso sobre el ejercicio de las partidas correspondientes a los montos y conceptos de endeudamiento autorizado y con relación a la situación de su deuda pública al rendir la cuenta pública estatal o municipal en términos de lo previsto por la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y las leyes aplicables.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, el Poder Ejecutivo del Estado, los ayuntamientos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal deberán proporcionar al Congreso, directamente o por conducto de la Auditoría Superior del Estado, la información que éste les requiera de acuerdo con la Ley, en relación con las operaciones de deuda pública que celebren.

Capítulo Cuarto **De la Contratación de Empréstitos y Créditos**

Artículo 32.- La contratación de empréstitos o créditos deberá ser previamente autorizada por el Congreso de acuerdo con lo previsto por el **Artículo 12, fracciones III, IV y V** de esta Ley.

En los casos en que así lo autorice expresamente el Congreso, las operaciones de endeudamiento podrán ser contratadas por dos o más entidades de manera conjunta. En los actos jurídicos que documenten las operaciones conjuntas de endeudamiento, se deberán establecer separadamente las obligaciones a cargo de cada entidad, quedando expresamente prohibido a las mismas garantizar o avalar, en cualquier forma, o afectar como garantía o fuente de pago ingresos para pagar o garantizar, en cualquier forma, obligaciones de las demás entidades, en los casos en que esta Ley no las faculte expresamente para fungir como garantes, avalistas, deudoras solidarias, subsidiarias o sustitutas de las entidades de que se trate. Los actos que realicen las entidades en contravención a lo anterior serán nulos.

Artículo 33.- La contratación de empréstitos a cargo de los Municipios, deberá ser previamente autorizada por sus respectivos ayuntamientos de acuerdo con lo previsto por los **Artículos 15 y 16** de esta Ley. Dicha autorización será requisito necesario para gestionar la autorización de los mismos ante el Congreso.

Artículo 34.- Las entidades de la administración pública paraestatal, sólo podrán contratar créditos si cuentan con la autorización previa de sus órganos de gobierno y de la Tesorería General, otorgada de acuerdo con lo previsto por los **Artículos 13 fracción XX y 19** de esta Ley. Dichas autorizaciones serán requisito necesario para gestionar la autorización de los créditos respectivos ante el Congreso.

Las entidades de la administración pública paramunicipal, únicamente podrán contratar créditos si cuentan con la autorización previa de sus órganos de gobierno y del ayuntamiento correspondiente, otorgadas de acuerdo con lo previsto por los **Artículos 15 fracción XXI y 20** de esta Ley. Dichas autorizaciones serán requisito necesario para gestionar la autorización de los créditos respectivos ante el Congreso.

Artículo 35.- En los casos en que las entidades se propongan celebrar créditos o empréstitos, incluida la emisión de valores, deberán formular una solicitud de autorización de endeudamiento, en términos del **Artículo 36** de esta Ley, a sus órganos de gobierno, a los ayuntamientos, a la Tesorería General y al Congreso, según corresponda.

Las solicitudes de autorización de endeudamiento que presenten ante el Congreso, el Poder Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos, las mismas deberán presentarse bajo la forma de iniciativas de Ley o Decreto, según corresponda.

Las solicitudes de autorización para la celebración de empréstitos o créditos por las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal y los alcances a las solicitudes correspondientes, serán presentadas ante el Congreso a través del Poder Ejecutivo del Estado o de los Ayuntamientos, según corresponda.

Artículo 36.- Las solicitudes de autorización de endeudamiento referidas en el Artículo anterior, deberán incluir:

- I. La información relativa al crédito o empréstito que se proponga celebrar la entidad de que se trate, indicando, según resulte aplicable: monto, destino, plazo máximo, mecanismo de pago y demás datos que en su caso, se consideren relevantes. En el caso de emisiones de valores, se deberá señalar según resulte aplicable: Importe de la emisión o programa de valores, destino, plazo máximo de la emisión o programa de valores, mecanismo de pago y demás datos que se consideren relevantes; y
- II. En su caso, las autorizaciones que previamente se hubieren obtenido de los órganos de gobierno, de los ayuntamientos y de la Tesorería General, según corresponda.

La Tesorería General o el ayuntamiento respectivo, comunicarán oficialmente su resolución a las entidades solicitantes, dentro de los veinte días hábiles siguientes a la fecha en que reciban la solicitud de que se trate, precisando, en caso de que la celebración del financiamiento sea aprobada, las características y condiciones bajo las cuales podrá ser concertado.

En los actos jurídicos, valores o títulos de crédito con que se documenten las operaciones de endeudamiento se deberán incluir los datos de la o las autorizaciones respectivas.

Artículo 37.- Una vez que las entidades cuenten con las aprobaciones de los órganos de gobierno, de los ayuntamientos y de la Tesorería General, según corresponda, podrán gestionar ante el Congreso, por conducto del Poder Ejecutivo del Estado o de los Ayuntamientos, según corresponda en términos de lo previsto por el **Artículo 35** de esta Ley, la autorización para la obtención de los créditos o empréstitos que se propongan celebrar.

Artículo 38.- El Congreso podrá solicitar a las entidades la documentación e información complementaria que requiera para el análisis de las solicitudes de autorización de endeudamiento que se le presenten.

Artículo 39.- Las entidades negociarán, aprobarán y suscribirán, en el ámbito de su competencia y por conducto de sus funcionarios legalmente autorizados al efecto, los actos jurídicos, títulos de crédito y demás instrumentos legales necesarios, directa o indirectamente, para la obtención, manejo, operación y gestión de los financiamientos y demás operaciones de endeudamiento a su cargo.

Artículo 40.- Las entidades deberán remitir al Congreso del Estado, dentro de un plazo de sesenta días naturales, contados a partir de la celebración de cualquier crédito o empréstito, un informe escrito que refleje el monto, forma y términos de los mismos, incluyendo plazo, gracia, tasas de interés ordinaria y moratoria, así como información sobre la aplicación de los recursos correspondientes, acompañando copia de los documentos en los que consten los actos jurídicos, valores o títulos de crédito que las documenten.

Artículo 41.- Las entidades que se propongan contraer deuda pública, deberán analizar las diferentes opciones de financiamiento disponibles en el mercado y optar por la, o las, que ofrezcan las condiciones más favorables al interés público.

En virtud de lo anterior, las autorizaciones que, mediante ley o decreto, otorgue el Congreso para la contratación de las operaciones previstas en esta ley, deberán ser genéricas y en ningún caso podrán designar a la institución con la cual deberá celebrarse la operación correspondiente.

Artículo 42.- Las operaciones de endeudamiento que celebren las entidades, deberán apegarse a las autorizaciones otorgadas por el Congreso y los recursos provenientes de las mismas, aplicarse de acuerdo al destino autorizado en el decreto correspondiente. Cualquier modificación al destino de un crédito o empréstito o a las demás condiciones autorizadas por el Congreso en el decreto respectivo, requerirá de una nueva autorización de dicho Congreso.

Artículo 43.- El Congreso vigilará, a través de sus órganos facultados al efecto, que los recursos obtenidos por las entidades con motivo de las operaciones a que se refiere esta Ley, sean destinados de acuerdo a lo autorizado por el propio Congreso.

Artículo 44.- El Congreso verificará que las operaciones de endeudamiento sean realizadas conforme a las disposiciones constitucionales y legales aplicables, formulando en su caso, las observaciones que de ello se deriven, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar.

Artículo 45.- El Poder Ejecutivo del Estado, los ayuntamientos y los órganos de gobierno de las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, deberán realizar oportunamente los pagos de la deuda pública a su cargo.

El Poder Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos, deberán vigilar que se hagan oportunamente los pagos del servicio de su deuda pública contingente e indirecta.

Artículo 46.- Las entidades podrán celebrar operaciones financieras de cobertura, que tiendan a evitar o reducir riesgos económico-financieros derivados de créditos o empréstitos obtenidos con base en esta Ley. En los casos en que el plazo de las operaciones financieras de cobertura exceda de tres años, su contratación requerirá de la previa autorización del Congreso.

Artículo 47.- El Poder Ejecutivo del Estado deberá contratar a instituciones calificadoras de valores, a efecto de que emitan la calificación sobre la calidad crediticia del Estado y para que realicen en su caso, la revisión periódica de dicha calificación. Asimismo, podrá contratar a dichas instituciones, con la finalidad de que califiquen la calidad crediticia de los financiamientos bancarios, bursátiles o de cualquier otra naturaleza que, en su caso, implemente y para que realicen la revisión periódica de dichas calificaciones.

Artículo 48.- Los Municipios y los órganos de gobierno de las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal podrán, en los casos en que así lo estimen justificado, contratar a instituciones calificadoras de valores a efecto de que califiquen la calidad crediticia de los Municipios y de las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal o la de los financiamientos bancarios, bursátiles o de cualquier otra naturaleza que en su caso, implementen y para que realicen la revisión periódica de dichas calificaciones.

Artículo 49.- Las entidades estarán facultadas para contratar a auditores externos, a efecto de que dictaminen sus estados financieros.

Artículo 50.- El Estado, por conducto de la Tesorería General o del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila de Zaragoza, podrá otorgar a los Municipios y a las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, empréstitos o créditos de los previstos en el **Artículo 9** de esta Ley. Asimismo, las Entidades de la Administración Pública Paraestatal podrán otorgar empréstitos o créditos de los anteriormente señalados al Estado. Por su parte, los Municipios podrán otorgar créditos de los previstos en el **Artículo 9** de esta Ley a las entidades de la administración pública paramunicipal.

Los financiamientos entre entidades a que hace mención este Artículo deberán ser en todo caso, acordes con la capacidad de pago de las mismas.

Artículo 51.- El Poder Ejecutivo del Estado asesorará por conducto del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila de Zaragoza, en los casos en que así se lo requieran, a los Municipios, a las entidades de la administración pública

paraestatal y paramunicipal, en la formulación de sus proyectos financieros y en lo relativo a las operaciones que pretendan realizar en materia de deuda pública.

Capítulo Quinto **De la Emisión y Colocación de Valores**

Artículo 52.- Sujeto a lo previsto en esta Ley, las entidades podrán ocurrir al mercado de valores para captar recursos mediante la emisión de valores.

Artículo 53.- La celebración de empréstitos o créditos mediante la emisión de valores, con base en el crédito público de las entidades y su colocación entre el gran público inversionista, a través del mercado de valores, estará sujeta en todos los casos, a la autorización previa del Congreso, debiéndose cumplir con los requisitos que para las operaciones de endeudamiento se establecen en esta Ley.

El Congreso podrá autorizar la implementación de programas de colocación de valores, que impliquen una o más emisiones a realizarse, en forma sucesiva, durante un plazo que podrá abarcar uno o más ejercicios presupuestales.

Los montos y conceptos de endeudamiento autorizado correspondientes a emisiones de valores que se realicen al amparo de programas de colocación autorizados, que abarquen más de un ejercicio presupuestal, deberán ser incluidos en los ejercicios fiscales posteriores al de su autorización, en la Ley de Ingresos del Estado, en las Leyes de Ingresos Municipales y en los presupuestos de ingresos de las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, correspondientes a dichos ejercicios, según sea aplicable.

Artículo 54.- Los valores que emitan las entidades son títulos de deuda pública.

Artículo 55.- Los valores serán colocados entre el gran público inversionista, por un intermediario del mercado de valores legalmente autorizado, a través de una bolsa de valores mexicana legalmente autorizada para operar.

Artículo 56.- Las entidades sólo podrán emitir valores pagaderos en moneda nacional y dentro del territorio de la República. En los títulos respectivos y en su caso, en el acta de emisión, deberán citarse los datos fundamentales de su autorización, así como la prohibición de su venta a extranjeros, sean estos gobiernos, entidades gubernamentales, organismos internacionales, sociedades o particulares. Los títulos no tendrán validez si no consignan dichos datos. Lo dispuesto en este Artículo será aplicable a los demás títulos de crédito que suscriban, avalen o acepten las entidades.

Artículo 57.- Los valores que emitan las entidades, deberán inscribirse en la Sección de Valores del Registro Nacional de Valores y en su caso, en una bolsa de valores mexicana legalmente autorizada para operar.

Artículo 58.- La emisión de valores podrá ser realizada directamente por las entidades o en su caso, de manera indirecta, mediante fideicomisos, a través de instituciones fiduciarias y al amparo en su caso, de un acta de emisión, cuando por disposición de la Ley o de la naturaleza de los títulos correspondientes, así se requiera. Los fideicomisos a que hace mención el párrafo que precede no serán considerados, en ningún caso, parte de la administración pública paraestatal ni paramunicipal.

Artículo 59.- Las entidades podrán, previa autorización del Congreso, realizar emisiones conjuntas de valores.

Artículo 60.- En los actos jurídicos que documenten las emisiones conjuntas de valores, se deberán establecer separadamente las obligaciones a cargo de cada emisora, quedando expresamente prohibido a las entidades garantizar o avalar, en cualquier forma, obligaciones de las demás emisoras, en los casos en que esta Ley no los faculte expresamente para fungir como garantes, avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o sustitutos de las entidades de que se trate.

Artículo 61.- En todo lo referente a la emisión, colocación y operación de los valores, las entidades se sujetarán a lo previsto por la Ley de Mercado de Valores y demás disposiciones legales aplicables.

Capítulo Sexto **De las Garantías, Avaluos y Mecanismos de Pago**

Artículo 62.- Las garantías y avaluos que se otorguen para la celebración de operaciones de endeudamiento que realicen las entidades, se regirán por las disposiciones legales de la materia, así como por esta Ley y por las demás normas y disposiciones administrativas que en su caso, expidan la Tesorería General y los ayuntamientos.

Artículo 63.- El Estado podrá, previa autorización del Congreso, constituirse en garante, avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto de las entidades señaladas en las **fracciones II, III, IV y V del Artículo 2** de esta Ley.

Artículo 64.- Los Municipios podrán constituirse en garantes, avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o sustitutos de las entidades de la administración pública paramunicipal a su cargo.

Artículo 65.- Cuando los Municipios, las entidades de la administración pública paraestatal o paramunicipal requieran el aval o garantía del Estado, la contratación de empréstitos o créditos se realizará con la autorización de la Tesorería General y la intervención del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Artículo 66.- El Estado únicamente podrá constituirse en garante, avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto de los Municipios o de las entidades de la administración pública paramunicipal, en los casos en que la magnitud o el impacto social del proyecto que se pretenda financiar así lo amerite o cuando existan circunstancias extraordinarias plenamente justificadas que así lo requieran, a juicio de la Tesorería General y del Congreso.

Artículo 67.- Los Municipios únicamente podrán constituirse en garantes, avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o sustitutos de las entidades de la administración pública paramunicipal, en los casos en que la magnitud o el impacto social del proyecto que se pretenda financiar así lo amerite o cuando existan circunstancias extraordinarias plenamente justificadas que así lo requieran, a juicio del ayuntamiento y del Congreso.

Artículo 68.- Los Municipios, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal que requieran el aval o la garantía del Estado, deberán señalarlo expresamente al Poder Ejecutivo del Estado en la solicitud de autorización de endeudamiento relativa a los financiamientos correspondientes, debidamente requisitada de acuerdo a lo previsto por el **Artículo 36** de esta Ley y entregar en su caso, la documentación e información complementaria que la Tesorería General les requiera para el análisis respectivo.

Los Municipios y las entidades de la administración pública paramunicipal que soliciten la garantía o aval del Estado, deberán contar previamente con la autorización de los ayuntamientos, para la celebración de los financiamientos para los cuales se requiera la garantía o aval respectivo y en su caso, de los órganos de gobierno, según corresponda.

Artículo 69.- Las entidades de la administración pública paramunicipal que requieran el aval o la garantía de los Municipios, deberán señalarlo expresamente al ayuntamiento de que se trate, en la solicitud de autorización de endeudamiento relativa a los financiamientos correspondientes, debidamente requisitada de acuerdo a lo previsto por el **Artículo 36** de esta Ley y entregar en su caso, la documentación e información complementaria que el ayuntamiento correspondiente les requiera para el análisis respectivo.

Las entidades de la administración pública paramunicipal que soliciten la garantía o aval de los Municipios, deberán contar previamente con la autorización de su Órgano de Gobierno, para la celebración de los financiamientos para los cuales se requiera la garantía o aval respectivo.

Artículo 70.- Una vez que los Municipios o las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal que requieran la garantía o aval del Estado cuenten con las autorizaciones de sus órganos de gobierno, de los ayuntamientos y de la Tesorería General, según corresponda, gestionarán la autorización del Congreso para la celebración de los financiamientos y el otorgamiento de las garantías o avales respectivos, apegándose a los procedimientos establecidos.

Artículo 71.- El Estado y los Municipios podrán, con la autorización previa del Congreso emitida mediante ley o decreto, afectar como fuente o garantía de pago, o ambas, de los financiamientos que contraten directamente o de aquellos en los que funjan como garantes, avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o sustitutos, los bienes del dominio privado de su propiedad o sus ingresos derivados de contribuciones, cobranza de cuotas, cooperaciones, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones federales o cualesquier otros ingresos de los que puedan disponer de conformidad con la legislación aplicable, incluidos sus accesorios. Asimismo, el Estado y los Municipios podrán afectar en los términos señalados, los derechos al cobro de los ingresos antes referidos.

Igualmente, sujeto a las limitaciones previstas en la legislación federal de la materia, el Estado y los Municipios podrán, con la autorización previa del Congreso emitida mediante ley o decreto, afectar como fuente o garantía de pago de financiamientos que contraten directamente, las aportaciones federales que en términos de la legislación federal aplicable sean susceptibles de afectación, incluidos sus accesorios. Asimismo, el Estado y los Municipios podrán afectar en los términos señalados, los derechos al cobro de las aportaciones federales antes referidas.

En el caso de financiamientos cuya garantía o fuente de pago sean las aportaciones federales, los recursos correspondientes únicamente podrán destinarse a los fines previstos en la ley federal que las regula.

Artículo 72.- Las entidades de la administración pública paraestatal podrán, con la autorización previa de sus órganos de gobierno, de la Tesorería General y del Congreso, emitida por éste último mediante Ley o Decreto, afectar como fuente o garantía de pago, o ambas, de los financiamientos que celebren directamente, los bienes de su propiedad o sus ingresos derivados de la cobranza de cuotas, derechos, productos o cualesquier otros ingresos de los que puedan disponer de conformidad con la legislación aplicable. Asimismo, las entidades de la administración pública paraestatal, podrán afectar en los términos señalados, los derechos al cobro de los ingresos antes referidos.

Artículo 73.- Las entidades de la administración pública paramunicipal podrán, con la autorización previa de sus órganos de gobierno, de los ayuntamientos y del Congreso, emitida por éste último mediante ley o decreto, afectar como fuente o garantía de pago, o ambas, de los financiamientos que celebren directamente, los bienes de su propiedad o sus ingresos derivados de la cobranza de cuotas, derechos, productos o cualesquier otros ingresos de los que puedan disponer de conformidad con la legislación aplicable. Asimismo, las entidades de la administración pública paramunicipal podrán afectar en los términos señalados, los derechos al cobro de los ingresos antes referidos.

Artículo 74.- El otorgamiento de garantías, las afectaciones de ingresos, la implementación de los mecanismos de pago y, en general, la celebración de los actos jurídicos a que se refiere este Capítulo, podrá realizarse respecto de cualesquier financiamientos ya sea que constituyan, o no, deuda pública, en términos de la misma.

Artículo 75.- Las participaciones federales y las aportaciones federales, únicamente podrán ser afectadas, en los términos del **Artículo 71** de esta Ley, para el pago de obligaciones, directas o contingentes, según corresponda, que contraigan el Estado o los Municipios con autorización del Congreso e inscritas a petición de dichas entidades en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el Registro Único

de Obligaciones y Empréstitos del Estado, en favor de la Federación, de instituciones de crédito que operen en territorio nacional, así como de personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

Los Municipios podrán afectar en favor del Estado las participaciones que en ingresos federales les correspondan, en los casos en que así lo acuerden, por escrito.

Artículo 76.- La celebración de los mecanismos legales que bajo cualquier modalidad o forma, se propongan implementar las entidades, a efecto de garantizar o realizar el pago de financiamientos, deberá ser previamente autorizada por el Congreso.

En los casos en que los mecanismos legales antes referidos se implementen bajo la forma de fideicomisos, los mismos no serán considerados, en ningún caso, parte de la administración pública paraestatal o paramunicipal.

En los casos en que los mecanismos legales que implemente el Estado como medio para cumplir obligaciones de pago a su cargo, impliquen la notificación de la afectación correspondiente y el otorgamiento de un mandato a la Tesorería de la Federación, para que entregue a una institución bancaria o fiduciaria un porcentaje de las participaciones que en ingresos federales le correspondan al Estado o de las aportaciones federales que en términos de la legislación federal sean susceptibles de afectación, ya sea bajo la forma de una instrucción irrevocable o en cualquier otra forma, los términos de dicho mandato, únicamente podrán ser modificados por el Poder Ejecutivo del Estado, si en adición al consentimiento que en su caso, deba obtener de los acreedores que correspondan, cuenta con la autorización previa del Congreso, otorgada de acuerdo a los términos establecidos en el decreto que incluya la autorización del mecanismo respectivo.

En los casos en que los mecanismos legales que implementen los Municipios, como medio para cumplir obligaciones de pago a su cargo, impliquen la notificación de la afectación correspondiente y el otorgamiento de un mandato al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila de Zaragoza o a la Tesorería General, según corresponda, para que entreguen a una institución bancaria o fiduciaria un porcentaje de las participaciones que en ingresos federales le correspondan al Municipio o de las aportaciones federales que en términos de la legislación federal sean susceptibles de afectación, ya sea bajo la forma de una instrucción irrevocable o en cualquier otra forma, los términos de dicho mandato únicamente podrán ser modificados por el ayuntamiento correspondiente, si en adición al consentimiento que en su caso, deba obtener de los acreedores que correspondan, cuenta con la autorización previa del Congreso, otorgada de acuerdo a los términos establecidos en el decreto que incluya la autorización del mecanismo respectivo.

En los fideicomisos que se constituyan para servir diversos financiamientos deberá pactarse que distintos acreedores puedan fungir como fideicomisarios, salvo en el caso de que el cien por ciento del patrimonio del fideicomiso de que se trate se destine a servir la deuda de un sólo acreedor.

Artículo 77.- Una vez autorizada por el Congreso la celebración de los mecanismos a que hace mención el Artículo anterior, el Estado y los Municipios podrán celebrar, por conducto de sus funcionarios legalmente autorizados al efecto, los actos jurídicos y demás instrumentos legales que los formalicen.

Artículo 78.- El pago de obligaciones a través de mecanismos legales de garantía o fuente de pago implementados mediante la afectación de participaciones y aportaciones federales a que aluden los **Artículos 75 y 76** de esta Ley, únicamente podrá ser realizado a través de dichos mecanismos, cuando las obligaciones correspondientes hayan sido previamente autorizadas por el Congreso y se encuentren inscritas en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado.

Artículo 79.- Las entidades a cuyo favor se otorgue alguna garantía o aval, en su caso, estarán obligadas a proporcionar a sus garantes, avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o sustitutos la información que éstos les requieran, sobre la situación de las operaciones de deuda pública respectivas.

Artículo 80.- Con excepción de los casos expresamente previstos en otras leyes, queda prohibido al Estado y a los Municipios otorgar garantía o aval fuera de los casos previstos en esta Ley. El servidor público que viole esta disposición incurrirá en responsabilidad oficial.

Artículo 81.- El Estado, los Municipios y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal podrán, con la autorización previa del Congreso emitida mediante Ley o Decreto, contratar bajo cualquier forma legal, el otorgamiento de garantías de terceros, totales o parciales, a efecto de mejorar la calidad crediticia de los financiamientos que celebren de manera directa.

Capítulo Séptimo De las Operaciones de Refinanciamiento y Reestructuración de la Deuda Pública

Artículo 82.- Las entidades podrán en cualquier tiempo, refinanciar o reestructurar, total o parcialmente, los financiamientos a su cargo, así como sus garantías y coberturas, con la finalidad de mejorar las condiciones crediticias originalmente pactadas sujetándose a las disposiciones de esta Ley

Artículo 83.- Con excepción de lo previsto en el Artículo 9, las entidades únicamente podrán refinanciar los empréstitos, créditos o financiamientos a su cargo, con la autorización previa del Congreso.

Artículo 84.- Las entidades podrán celebrar operaciones de reestructuración de los empréstitos o créditos a su cargo, cuando el objeto de las mismas sea el mejoramiento de las condiciones originales de los financiamientos consistente en la reducción del plazo, la disminución de la tasa de interés o la reducción de las garantías, sin necesidad de autorización por el Congreso.

Las operaciones de reestructuración que no requieran autorización del Congreso deberán ser autorizadas por los ayuntamientos en el caso de empréstitos a cargo de los Municipios o por los órganos de gobierno, la Tesorería General y los ayuntamientos, según corresponda, en el caso de créditos a cargo de entidades de la administración pública paraestatal o paramunicipal.

Artículo 85.- El Estado y los Municipios podrán con la autorización previa del Congreso, reestructurar los empréstitos a su cargo, cuando el objeto de las mismas sea la ampliación del plazo o cualquier otra modificación o modificaciones, distintas de las señaladas en el **Artículo 84.**

Artículo 86.- Las entidades de la administración pública paraestatal podrán, con la autorización previa de sus órganos de gobierno, de la Tesorería General y del Congreso, reestructurar los créditos a su cargo, cuando el objeto de las mismas sea la ampliación del plazo o cualquier otra modificación o modificaciones, distintas de las señaladas en el **Artículo 84.**

Artículo 87.- Las entidades de la administración pública paramunicipal podrán, con la autorización previa de sus órganos de gobierno, de los ayuntamientos y del Congreso, celebrar operaciones de reestructuración de los créditos a su cargo, cuando el objeto de las mismas sea la ampliación del plazo o cualquier otra modificación o modificaciones, distintas de las señaladas en el **Artículo 84.**

Artículo 88.- Siempre que el objeto de una reestructuración o refinanciamiento implique la modificación de una garantía o aval, se requerirá contar con la autorización del garante, avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto correspondiente.

Artículo 89.- Las operaciones de refinanciamiento y reestructuración de deuda pública a que se refiere este capítulo, estarán sujetas a los requisitos de información y registro previstos en esta Ley.

Capítulo Octavo

De la Subrogación de la Deuda Pública Derivada de Activos que se Enajenen o Concesionen

Artículo 90.- La deuda pública contratada por el Estado y por los Municipios para la ejecución de obras, adquisición o manufactura de bienes o prestación de servicios, cuyo uso o explotación se enajene o se concesione con posterioridad, podrá subrogarse, en los casos en que así lo consideren conveniente el Poder Ejecutivo del Estado o los ayuntamientos respectivos, al adquirente o al concesionario, a partir de la fecha de enajenación o del otorgamiento de la concesión, en los términos y condiciones que la misma establezca.

Artículo 91.- En los casos de subrogación a los que se refiere el párrafo que precede, al enajenar un activo u otorgar una concesión, se deberá proceder a la sustitución de las garantías otorgadas por el Estado o el Municipio de que se trate, por las que ponga a disposición el adquirente o concesionario, salvo en aquellos casos en que las garantías originales de los créditos sean los propios bienes, sus rendimientos, o los ingresos derivados de la prestación de los servicios objeto de la enajenación o concesión.

En ningún caso podrán permanecer o darse como garantía de créditos que se subroguen o adquieran con motivo de una enajenación o concesión a particulares, las participaciones en ingresos federales y otros ingresos que no provengan de la prestación de los servicios objeto de la enajenación o concesión.

Capítulo Noveno

Del Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado de Coahuila de Zaragoza

Artículo 92.- En el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado se inscribirán, para efectos declarativos, a solicitud de las entidades, los financiamientos que constituyan deuda pública, directa o contingente, contraídos por las mismas conforme a lo establecido en esta Ley.

La inscripción en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado, es independiente de aquella que las entidades deban realizar, conforme a la legislación aplicable, en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de las inscripciones en los registros que de acuerdo a lo previsto en esta Ley, lleven cada una de las entidades.

Artículo 93.- Para que proceda la inscripción de los financiamientos en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- I. Que la entidad solicitante, bajo protesta de decir verdad, manifieste que se trata de obligaciones pagaderas en México y en moneda nacional, contraídas con la Federación, con instituciones de crédito que operen en territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, conforme a las bases establecidas en esta Ley, por los conceptos y hasta por los montos autorizados conforme a la misma.

Tratándose de obligaciones que se hagan constar en títulos de crédito nominativos, se incluya en el texto de los mismos que sólo podrán ser negociados dentro del territorio nacional con la Federación, con las instituciones de crédito que operen en territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad mexicana;

- II. Que la entidad solicitante acredite en su caso, que el Congreso autorizó, previamente a su celebración, la obligación correspondiente;

- III. Que la entidad solicitante acredite la publicación, de acuerdo a lo establecido en los artículos 13 fracción XXVIII, 15 fracción XXIX y 18 fracción XXI de esta Ley, de la información fiscal y financiera que la entidad solicitante considere relevante. Para tal efecto, al momento de entregar la solicitud, deberá presentarse copia de la publicación de la información correspondiente al año calendario precedente al de la solicitud de inscripción y de estar disponible, la del primer semestre del año en que se realice la solicitud de inscripción; y
- IV. Que la entidad solicitante acredite que se encuentra al corriente en el pago de los empréstitos o créditos que tenga contratados a la fecha de la solicitud de inscripción.

Además de lo señalado en este Artículo, a la solicitud de inscripción que se presente, se deberá acompañar la documentación a que se refiere el **Artículo 94** de esta Ley.

Artículo 94.- Las solicitudes de inscripción en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado, deberán incluir un resumen de los principales datos del financiamiento cuya inscripción se solicite y deberán acompañarse de un ejemplar en fotocopia del instrumento o instrumentos jurídicos en los que se haga constar la obligación directa o contingente cuya inscripción se solicite.

Artículo 95.- El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila de Zaragoza, una vez cumplidos los requisitos a que se refiere este capítulo, procederá a la inscripción solicitada y notificará a la entidad solicitante lo conducente. Si no se cumplen los requisitos para la inscripción, el propio Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila de Zaragoza lo notificará a la entidad solicitante para que, en su caso, subsane la omisión en un término no mayor de diez días hábiles contados a partir de la recepción de la notificación.

Artículo 96.- En la inscripción al registro se anotará lo siguiente:

- I. El número y fecha de inscripción; y
- II. Las principales características y condiciones del financiamiento de que se trate.

Artículo 97.- La inscripción de obligaciones, créditos y empréstitos en el registro, sólo podrá modificarse previa solicitud de la entidad interesada, a la cual se deberá acompañar un ejemplar en fotocopia del instrumento jurídico en el que se haga constar la modificación de la obligación y la declaratoria, bajo protesta de decir verdad, de que se ha cumplido con los requisitos legales necesarios para realizarla.

Artículo 98.- Las entidades deberán informar semestralmente al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila de Zaragoza, la situación que guarden sus obligaciones inscritas en el registro.

Al efectuarse el pago total de una obligación inscrita en el registro, la entidad de que se trate, deberá informarlo al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila de Zaragoza, presentando la documentación respectiva, para que se proceda a la cancelación de la inscripción correspondiente.

Artículo 99.- El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila de Zaragoza proporcionará a las entidades, a los acreditantes de éstas o a sus legítimos representantes, las certificaciones procedentes que soliciten respecto a las obligaciones inscritas en el registro.

Con base en los datos del registro, el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila de Zaragoza podrá dar a conocer información agregada de las obligaciones crediticias de las entidades.

Artículo 100.- El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila de Zaragoza proporcionará la información relativa a los registros de la deuda pública que consten en el registro y que correspondan a financiamientos celebrados por las entidades a las instituciones calificadoras de valores contratadas por las mismas, para calificar su calidad crediticia o la de los valores que en su caso emitan, cuando estas así lo soliciten.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su Publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Estado, el día 6 de diciembre de 1996.

ARTÍCULO TERCERO.- Se deroga el Libro Cuarto del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como todas aquellas disposiciones contenidas en dicho ordenamiento que se opongan o de cualquier forma contravengan lo previsto en la presente Ley.

ARTÍCULO CUARTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se opongan o de cualquier forma contravengan lo previsto en esta Ley.

ARTÍCULO QUINTO.- Las deudas, empréstitos, financiamientos, créditos y obligaciones financieras con horizontes de corto plazo contraídas por las entidades que estén vigentes a la fecha de la entrada en vigor de la presente Ley, se registrarán por las disposiciones de ésta.

Todos los empréstitos, financiamientos, créditos, garantías, avales y en general cualquier acto jurídico, principal o accesorio, en materia de deuda a largo plazo que hayan sido celebrados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la presente, se registrarán por las Leyes que estaban vigentes en su fecha de celebración.

ARTÍCULO SEXTO.- La modificación de los mecanismos legales que bajo cualquier modalidad o forma, se hubiesen celebrado por las entidades con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta ley a efecto de garantizar o realizar el pago de financiamientos, no requerirá de la autorización del Congreso.

La modificación de los mandatos otorgados a la Tesorería de la Federación, bajo la forma de instrucciones irrevocables o en cualquier otra forma, celebrados, otorgados o notificados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta Ley se registrará por la legislación y los decretos correspondientes a su autorización.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- La celebración de los créditos, empréstitos, mecanismos de pago y demás actos jurídicos regulados por esta ley y la de los actos jurídicos necesarios para la implementación y mantenimiento de los mismos, no será objeto de licitación pública en virtud de no ser idónea para asegurar las condiciones a que alude el artículo 171 tercer párrafo de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, ni estarán sujetos al ámbito de aplicación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza en vigor.

ARTÍCULO OCTAVO.- Las entidades a que se refiere el **Artículo 2** de esta Ley, deberán inscribir todos sus empréstitos o créditos vigentes en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado de Coahuila de Zaragoza, dentro de un plazo de noventa días a partir de la fecha de publicación de esta Ley.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Finanzas de la Quincuagésimo Octava Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Diputado Jesús Mario Flores Garza, (Coordinador de Gobernación y Puntos Constitucionales), Diputada Jessica Agüero Martínez, Diputado Salvador Hernández Vélez, Diputada Verónica Boreque Martínez González, Diputado Rogelio Ramos Sánchez, Diputada Esther Quintana Salinas, Diputado José Manuel Villegas González, Diputada Cecilia Yaneth Babún Moreno, Diputada Verónica Martínez García , Diputado Salomón Juan

Marcos Issa (Coordinador de Finanzas), Diputado Enrique Martínez y Morales, Diputado Francisco Tobías Hernández, Diputado Shamir Fernández Hernández, Diputado Jesús Contreras Pacheco, Diputado Rodrigo Rivas Urbina y Diputado José Miguel Batarse Silva, en Saltillo Coahuila, a 5 de agosto de 2011.

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES

NOMBRE	VOTO Y FIRMA		
	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA
DIP. JESUS MARIO FLORES GARZA COORDINADOR			
DIP. JESSICA AGÜERO MARTINEZ	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA
DIP. SALVADOR HERNÁNDEZ VÉLEZ	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA
DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA
DIP. ROGELIO RAMOS SÁNCHEZ	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA
DIP. ESTHER QUINTANA SALINAS	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA
DIP. JOSÉ MANUEL VILLEGAS GONZÁLEZ	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA
DIP. CECILIA YANETH BABÚN MORENO	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA
DIP. VERONICA MARTINEZ GARCIA	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA

COMISION DE FINANZAS

DIP. SALOMÓN JUAN MARCOS ISSA COORDINADOR	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA
DIP. ENRIQUE MARTINEZ Y MORALES	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA
DIP. FRANCISCO TOBÍAS HERNANDEZ	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA
DIP. SHAMIR FERNANDEZ HERNANDEZ	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA
DIP. ROGELIO RAMOS SANCHEZ	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA
DIP. JESUS CONTRERAS PACHECO	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA

DIP. CECILIA YANETH BABÚN MORENO	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA
DIP. RODRIGO RIVAS URBINA	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA
DIP. JOSE MIGUEL BATARSE SILVA	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA

Es cuanto, Diputada Presidenta.

Nota: Por instrucciones de la Diputada Presidenta, interviene en la lectura el Diputado Secretario Loth Tipa Mota Natharen.

Diputada Presidenta Hilda Esthela Flores Escalera:

Muchas gracias Diputado Secretario.

A continuación, esta Presidencia someterá a consideración el proyecto de decreto que contiene el dictamen que se acaba de leer, señalándose que el mismo será discutido y votado primero en lo general y luego en lo particular, según lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley Orgánica del Congreso.

Conforme a lo señalado, a continuación se someterá a consideración en lo general el proyecto de decreto que se dio a conocer, por lo que le solicito a quienes deseen intervenir para hacer comentarios en este sentido que se sirvan indicarlo mediante el sistema electrónico a fin de registrar sus intervenciones, solicitándoles de igual forma a quienes harán uso de la palabra que en su intervención mencionen si se reservaran algún artículo de los ordenamientos a que se refiere el proyecto de decreto para la discusión en lo particular e indiquen únicamente cuál será debiendo entregar por escrito la propuesta de modificación que se planteará.

Está solicitando intervenir el Diputado Mario Alberto Dávila, ¿el sentido de su intervención? Está solicitando, permítame tantito Diputado, voy a tomar nota de quienes deseen para organizar la participación de todos, está pidiendo también la palabra la Diputada Esther Quintana Salinas, ¿el sentido de su intervención? Tiene la palabra Diputado Mario Dávila.

Diputado Mario Alberto Dávila Delgado:

Muchas gracias, Diputada Presidenta.

El tema de deuda pública en Coahuila es muy probablemente el más importante en estos tiempos, por la magnitud de lo que representa, por el riesgo de la funcionalidad del Estado y por el riesgo de una crisis financiera que pudiéramos tener.

Llama mucho la atención que en un Periodo de Diputación Permanente sea enviada esta iniciativa y que se tenga que convocar a un Periodo Extraordinario de Sesiones para considerar esta ley.

El tema lo vemos al vapor, el tema lo vemos de una manera muy rápida, pues se nos ha entregado aproximadamente con 26 horas de anticipación para poderlo revisar, para poderlo discutir y no estamos de acuerdo con la forma en que se está dando.

En su momento, nosotros presentaremos en el Periodo Ordinario una iniciativa de Ley de Deuda Pública con algunos conceptos generales donde señalo lo siguiente: que no deberá de endeudarse al Estado en un más de un 35% de su presupuesto anual, ya que así lo marcan los académicos de la administración pública; también incluiremos que no se le permita al Ejecutivo del Estado y a las administraciones municipales, ni a cualquier entidad pública del Estado o Municipios que se endeude durante el último año de gestión; además que asuma la responsabilidad de pagar las deudas que traiga con una cantidad no menor al 30% de sus recursos propios de sus ingresos que se le den más facultades a este Congreso y que no se le quiten como es el caso, que haya más transparencia y que no haya opacidad.

En cuanto al tema de esta ley observamos que el plazo para la deuda a corto plazo lo están ampliando, pues actualmente es de 6 meses y lo están llevando a 12 meses, entendiendo que se le resta toda posibilidad a este Congreso de tener un control y de tener un orden de dicha deuda porque no obliga al Ejecutivo ni al SATEC, ni a ninguna otra entidad a que rinda cuentas, a que permita autorización al Congreso para contraer dicha deuda, en el entendido de que la deuda a corto plazo en este momento es la mayor que en porcentaje tiene el Estado, entonces no podemos permitir esto.

Da facultades sin límites al SATEC y da facultades al Ejecutivo y le resta, le resta poder a este Congreso y le da facultades para pedir préstamos a corto plazo, para refinanciar, para reestructurar y para de nuevo hacer un crédito.

Estos mecanismos no son nada buenos para nuestro Estado en este momento que tiene una deuda de 31 mil millones de pesos donde el Director del SATEC da una cifra, donde el Gobernador anterior dio una cifra, el Gobernador actual no quiere comprometerse a dar una cifra, cuando la propia ley actual obliga a que este Congreso sea informado el monto de la deuda, obliga a que sea informado del destino de la deuda, obliga a que sea informado de cualquier movimiento que tenga de deuda.

Además esta propia ley propone ampliar los mecanismos de garantía de deuda, no solo las participaciones federales, sino a los bienes del dominio privado, de algunas entidades paramunicipales y paraestatales y además una entidad que nos preocupa es que las personas físicas así lo señalan algunos de los textos de los artículos puedan y las personas morales puedan ser acreedores de nuestro Estado.

Esta ley establece además en lo general y bueno señalo algunos artículos donde se le restan las facultades a este Congreso y señalo el artículo 9, señalo el artículo 10 y como decía le dan amplias facultades al SATEC para que interprete, para que ejecute, para que disponga de esta ley, aún más de las características y poderes que tiene el SATEC está propia ley le da más facultades al SATEC.

Por otro lado, estamos viendo también que muy seguramente esta ley obedece a las presiones que ya están ejerciendo los bancos sobre nuestro Gobierno del Estado porque no es posible pagar a tan corto plazo como son los 6 meses, la deuda que en este momento contiene la deuda a corto plazo y pues seguramente ya Santander, ya Interacciones, y ya Banorte le están cobrando y pues de alguna manera ellos tienen que vacunarse y protegerse y por eso esta ley, tan rápido, tan a vapor.

Y bueno, al final en el transitorio, uno de los transitorios señala que los créditos que hayan sido contraídos con anterioridad, un transitorio los abriga para que esta ley los proteja.

En lo general no estamos de acuerdo con esta ley, porque es un tema fundamental lo que está sucediendo en Coahuila y no nada más en Coahuila, está sucediendo en otras entidades, esta ley sí trae algunas atribuciones para el Congreso pero es importante señalar que estas atribuciones las dirige hacia los municipios y las dirige hacia las entidades paraestatales y paramunicipales, mas no al Ejecutivo ni al SATEC aquí limita la atribución de este Congreso que es de autorizar, que es de revisar, que es de exigir, que es de fiscalizar la deuda que esté contrayendo el Estado.

Por lo anterior nuestro posicionamiento es en contra de esta ley.

Es cuanto Diputada Presidenta. Muchas gracias.

Diputada Presidenta Hilda Esthela Flores Escalera:

Gracias Diputado Mario Dávila.

Solicitó la palabra también la Diputada también Esther Quintana. Tiene el uso de la palabra Diputada Quintana.

Diputada Esther Quintana Salinas:

Con su venia, Diputada Presidenta, muchísimas gracias.

Muy buenas tardes a todos.

De nueva cuenta el Gobierno del Estado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional mayoritario en este Congreso hacen gala de soberbia y de irresponsabilidad.

Una vez más nos traen una iniciativa de reformas que bajo ningún concepto se concibió como un proyecto susceptible de enriquecerse con la discusión de la pluralidad y de la inclusión que por lo general aportan y perfeccionan los productos legislativos, una vez más queda la prueba contundente de que traen una iniciativa hecha a la medida de los intereses de la administración actual y obviamente con visos de futuro.

Se está repitiendo un fenómeno que recién vivimos, porque sucedió hace algunos meses cuando en este mismo recinto el Legislativo se aprobó por la mayoría parlamentaria de este Congreso la Ley del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores de la Educación, en esta misma tribuna no se tuvo empacho ni recato alguno para aplaudirla y ponderar que se trataba de una ley de vanguardia en la materia y que además se había consensado con sus destinatarios, falso, la ley, esta ley tuvo que ser abrogada, están repitiendo el esquema.

La iniciativa de reformas a la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila que hoy se pretende aprobar, -que se va aprobar-, nos da al Grupo Parlamentario de Acción Nacional la razón, en el sentido de que el manejo de las finanzas en el Estado se está llevando a cabo de manera irresponsable y entonces hay que buscarle una salida a esta problemática.

Esta afirmación que acabo de hacer se traduce objetivamente en las nuevas atribuciones y mayores funciones que le otorgan al SATEC a pesar de que este órgano ha demostrado su vocación de servicio a la opacidad fiscal y que en este momento está también en entredicho lo relativo a su probidad y profesionalismo.

Los compañeros Diputados que hoy van aprobar el presente dictamen deben de estar conscientes de que a partir de la entrada en vigor de esta iniciativa, el Poder Legislativo del que en este momento histórico somos parte, estará siendo más mermado todavía en funciones, en una de las funciones sustantivas que es la de la fiscalización.

Lo anterior queda de manifiesto en la tendenciosa redacción del artículo 9º del proyecto de decreto enviado por el Ejecutivo en el que se establece aumentar al doble el plazo para el pago de capital de una deuda, asimismo se elimina arbitrariamente la obligación de los entes públicos sujetos a deuda pública al liquidar ésta 90 días antes de concluir su periodo, lo que invariablemente ocasionará la transmisión de la deuda pública de una administración a otra.

En esta iniciativa, como ya lo señaló puntualmente el coordinador de mi bancada, no se han introducido conceptos, elementos básicos que propician finanzas sanas para un estado, verbigracia, la prohibición o restricción de la contratación de deuda durante el último año de gestión, la limitante de que la deuda debe respaldarse, por lo menos con un 35% de ingresos propios, además de que la deuda en todos los casos debe ser menor a los montos de inversión del capital, son asuntos fundamentales, esto lo señalan los expertos en la materia, nos queda claro que el enorme endeudamiento por el que atraviesa el Estado de Coahuila y los municipios de Coahuila, ha llegado al límite de lo que les permite, valga la redundancia, endeudarse, la normatividad vigente y ahora pues tienen que traer al Poder Legislativo este tipo de reformas que retratan de cuerpo entero que son producto de la irresponsabilidad, de la imprudencia y sobretodo de la ambición desmedida de quienes estiman que Coahuila es propiedad privada.

Como van a resolverlo según, cómo van a resolver la falta de recursos para solventar los compromisos adquiridos con instituciones financieras, pues precisamente con este tipo de reformas que hoy nos están presentando y reitero nuevamente la preocupación profunda que tiene mi bancada, porque se están pulverizando los pesos y los contrapesos que naturalmente deben sustentar la división de poderes, en Coahuila no hay equilibrios institucionales y con esto simple y sencillamente están convirtiendo al Poder Ejecutivo en amo y señor, con horca y cuchillo, para “contratar” libremente créditos o empréstitos sin

requerir la aprobación del Poder Legislativo, del Congreso del Estado, y le dan al Congreso del Estado obviamente pues una triste calidad de comparsa.

Estamos indiscutiblemente ante el presidencialismo redimido, estamos ante la regresión desnuda y sin maquillaje alguno de la vuelta a sus orígenes del Partido Revolucionario Institucional.

Esta iniciativa de reformas es una simulación, es una perfecta simulación, al Estado, a la situación financiera del Estado, con todas estas facultades que le otorgan a las entidades estatales y municipales la van a convertir en un verdadero galimatías. El Grupo, y además van a agravar la economía más todavía de los coahuilenses.

Esa es la razón, entre otras, estas son las razones, entre otras, por las que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de ninguna manera acepta ser cómplice de esto, como ya lo indico el Coordinador de la bancada de nuestro grupo en estricto apego a la responsabilidad que tenemos frente a los coahuilenses vamos a votar en contra.

Gracias Diputada Presidenta.

Diputada Presidenta Hilda Esthela Flores Escalera:

Gracias Diputada Esther Quintana.

Me está pidiendo la palabra también el Diputado Rodrigo Rivas, ¿El sentido de su participación? -En contra-. Tiene la palabra Diputado Rivas.

Diputado Rodrigo Rivas Urbina:

Con su permiso Diputada Presidenta.

El día de hoy Coahuila sufre un nivel de endeudamiento histórico de más de 31 mil millones de pesos, lo cual resulta contrastante con la administración anterior que señaló que dejó cero deudas al final de su mandato, es decir, en 5 años el Estado contrajo cantidades desproporcionadas y que el día de hoy a través del Dictamen que ustedes pretenden aprobar, todavía se dan mayores facilidades para que las entidades estatales y municipales adquieran más deuda, sin la necesidad de pedirle aprobación al Congreso del Estado, lo cual resulta por demás absurdo y refleja el insaciable apetito económico del Gobierno del Estado, es decir no llenaron los hermanos Moreira.

Sabemos que con el objeto de solicitar créditos por 3 mil millones de pesos a los bancos para endeudar más al Gobierno del Estado falsificaron documentos por lo cual los Diputados de Acción Nacional presentamos una denuncia porque tenemos elementos para afirmarlo sin embargo desconocemos el destino de los recursos de la deuda porque nos queda la duda si realmente ingresaron a Finanzas del Estado parte de los 31 mil millones de pesos que debemos todos los coahuilenses, o quizás que están en manos de algún prestanombres de los hermanos Moreira nos queda esa duda y por eso estamos votando en contra de esta propuesta, de esta iniciativa que nos presentan el día de hoy.

Y nos vamos más allá, porque vemos que ya no se van a preocupar los falsificadores y ladrones de esos recursos del Estado de Coahuila que con la presente iniciativa ya no tendrán la necesidad de falsificar documentos del Congreso del Estado para adquirir más deuda, deuda o recursos que probablemente no ingresen a Finanzas del Estado, que probablemente estén invertidos en Estados Unidos, en empresas de los prestanombres de los Moreira.

Ya que con la presente iniciativa no requerirán de la autorización de esta Soberanía ya que el Estado y Municipio podrán contratar deudas por el doble del tiempo que establece la Ley de Deuda Pública vigente sin la necesidad del visto bueno del Congreso, también la citada ley prevé que el Gobierno del Estado a través del SATEC puede otorgar créditos a los municipios lo cual podría resultar perjudicial para los municipios y se demuestra el enorme conjunto de facultades que se le está dando al SATEC y dejando al Congreso del Estado sin facultades fiscalizadoras.

Todavía después de lo que acabamos de pasar en nuestro Estado, con esta falsificación de documentos de quien representa a esa Secretaría del SATEC todavía se le dan este tipo de facultades para que siga cometiendo este tipo de fraudes en nuestro Estado.

Quienes voten a favor de esta iniciativa que lacera todos los coahuilenses y que permite que continúe un manoseo total del Poder Ejecutivo al Legislativo pasarán a la historia, sí pero pasaran a la historia como unos Diputados sumisos y borregos al servicio de los hermanos Moreira.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

Diputada Presidenta Hilda Esthela Flores Escalera:

Está pidiendo la palabra el Diputado Jesús Mario Flores Garza, ¿El sentido de su intervención, Diputado? -A favor-. Tiene la palabra Diputado.

Diputado Jesús Mario Flores Garza:

Muy buenas tardes.

Con el permiso, Diputada Presidenta.

Diputados y Diputadas.

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y la Comisión de Finanzas, el día de ayer emitió un dictamen en el que fue aprobada por mayoría con la votación de todos los integrantes de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, esta iniciativa de Ley de Deuda Pública, hoy se pone a consideración de todos los Diputados del Pleno en general y nosotros queremos dejar establecido lo siguiente, tenemos el pleno convencimiento de que es un documento válido, legítimo, innovador, la exposición de motivos de la iniciativa de esta Ley de Deuda Pública da claridad y da justificación a las disposiciones legales que son 9 capítulos, 100 artículos y 9 transitorios.

Muchos son los aspectos que se consideran en esta nueva ley, principalmente es una ley que contiene una adecuación a la legislación normativa federal en materia de deuda pública.

Esta iniciativa también, así de una manera muy general establece que los recursos públicos obtenidos por las entidades mediante operaciones de deuda pública, únicamente pueden ser destinadas a inversiones públicas productivas, se prohíbe expresamente que puedan dedicarse a financiar gasto corriente.

La iniciativa también establece obligaciones para el Poder Ejecutivo y para los ayuntamientos de incluir en sus leyes de ingresos y anotar las solicitudes de créditos que se soliciten y que deben presentar y gestionar la autorización de endeudamiento correspondiente.

La finalidad también de esta iniciativa es empatar el marco jurídico estatal, con las circunstancias actuales de modernidad en el entorno nacional e internacional, privilegia también la transparencia y también la rendición de cuentas, en el manejo de la deuda pública al implementarse el registro único de obligaciones y empréstitos del Estado a través del cual se impone a las entidades la obligación de transparentar en forma pública todo lo referente al manejo de la deuda.

El Congreso sigue siendo el instituto rector, el organismo rector, el Congreso siempre tendrá la responsabilidad de regular y de cuidar la deuda pública.

Hoy hablamos de deuda pública, pero recordemos que todos los gobiernos hacen uso de ella para buscar mejores niveles de desarrollo para sus comunidades, hablar de deuda pública no debe asustarnos, no es algo prohibido a lo que no podamos referirnos, hacer uso de deuda pública privada todas las entidades gubernamentales del país y del mundo y en el país en todos los niveles, los organismos públicos y financieros, el sector privado, los empresarios, los comerciantes y hasta el ciudadano actual para mejorar su nivel de vida y lograr bienes o valores que no puede adquirir de una sola vez o con una sola

exhibición, el nuevo marco jurídico propuesto obliga a la transparencia y a la rendición de cuentas, se trata de una ley nueva moderna de vanguardia que nos va a permitir acceder con una regulación clara a los sistemas financieros para buscar niveles de desarrollo.

El Congreso del Estado tiene esta iniciativa de ley hoy para decidir, nosotros ratificamos nuestra decisión de que es el mejor instrumento actual para la situación que se vive ahora y nosotros también ratificamos el derecho y la responsabilidad de la fracción parlamentaria de tener un compromiso y una responsabilidad con nuestros ciudadanos, a ellos nos debemos, para ellos fue nuestro compromiso.

Les pedimos a los Diputados que emitan su voto a favor de este dictamen.

Es cuanto Diputada.

Diputada Presidenta Hilda Esthela Flores Escalera:

Gracias Diputado Jesús Mario Flores.

En virtud de que no hay ninguna participación registrada más, y en virtud también de que no hubo reservas en lo particular, procederemos ahora a votar en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que se sometió a consideración, señalándose que el sistema electrónico estará abierto el tiempo programado para ese efecto y que una vez que concluya ya no se podrá votar, pidiéndose a las Diputadas y Diputados presentes que mediante el sistema electrónico emitan su voto en el sentido que determinen y a la Diputada Secretaria Cecilia Yanet Babún Moreno, que tome nota de la votación y que una vez que se cierre el registro de los votos informe sobre el resultado.

Se abre el sistema para la votación correspondiente. Se cierra el sistema.

Diputada Secretaria Cecilia Yanet Babún Moreno:

Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 26 votos a favor, 4 votos en contra y 0 abstenciones.

Diputada Presidenta Hilda Esthela Flores Escalera:

Conforme al resultado de la votación, se aprueba por mayoría en lo general y en lo particular el decreto que ha sido leído y votado por supuesto, habiéndose resuelto esto y aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto contenido en el dictamen presentado en este caso por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Finanzas por lo que ahora deberá procederse a la formulación del decreto correspondiente, así como a su envío al Ejecutivo del Estado para su promulgación, publicación y observancia.

Cumplido lo anterior y en virtud de haberse votado los asuntos contemplados en la convocatoria correspondiente, en atención de lo que se establece en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Congreso, a continuación procederemos a la clausura de este Período Extraordinario de Sesiones, por lo que se pide a las Diputadas y Diputados así como al público presente que se sirvan poner de pie.

El Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza clausura el día de hoy 6 de agosto del año 2011 el Segundo Período Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura, asimismo en observancia de lo dispuesto en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Congreso, expídase el Acuerdo en que se dé cuenta de lo anterior y comuníquese en la forma señalada por la misma disposición.

Declarado lo anterior se clausura esta sesión, siendo las 17: 10 horas del día 6 de agosto de 2011. Muchas gracias.